

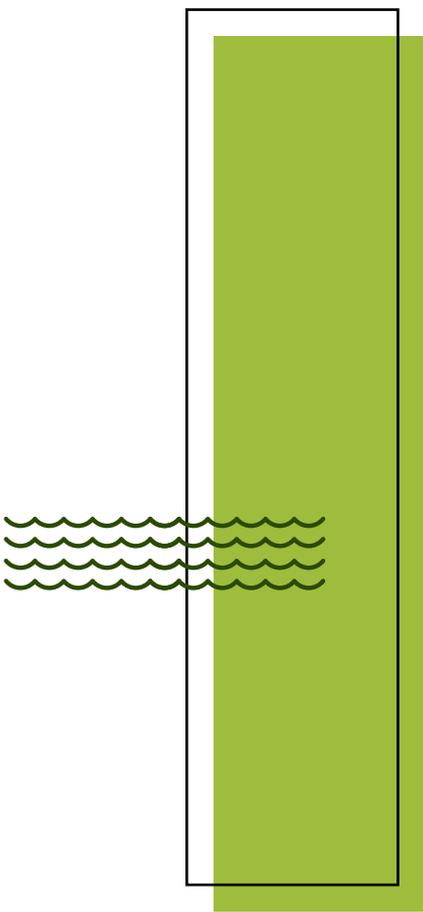


De America Soy

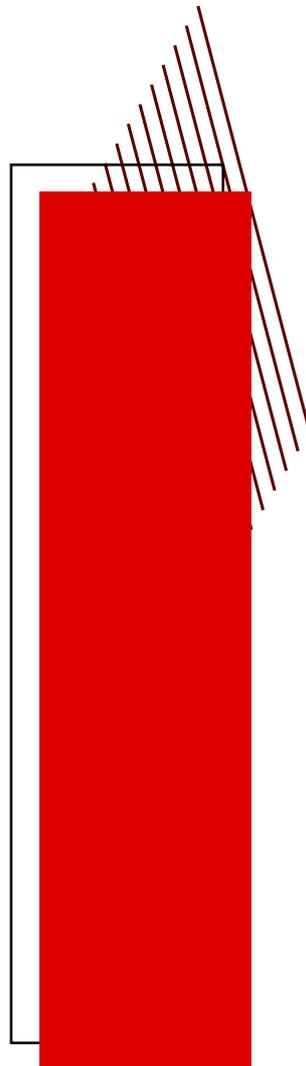
Resistencias Comunitarias ante el Covid 19 en América Latina

Aportes desde la ecología política,
la economía popular y solidaria y
los feminismos

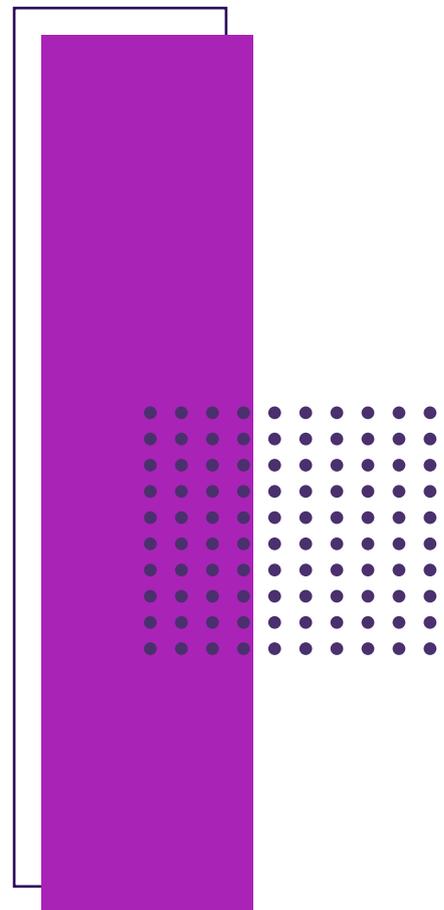
De America Soy
Coordinación:
Luis Ignacio Silva Neira
Jacobo Castellanos Rivadeneira



Resistencia
Ecológica



Resistencia
Popular y
Solidaria



Resistencia
Feminista

Introducción



Desde el primer momento en que unx estudiante empieza su carrera de grado de economía, comienza a recibir lo que serán las bases de su formación profesional en una de las áreas más influyentes en la generación de políticas públicas.

Las competencias técnicas adquiridas en dicho estudio constituyen hoy en día gran parte de las herramientas utilizadas por los hacedores de políticas que dan sustento a las políticas públicas y sociales de los Gobiernos. ¿Qué se estudia cuando se estudia economía? Desde esta pregunta, - que desde otras ciencias sociales podría ser más difícil de responder - en la ciencia económica tiene una respuesta más directa:



La economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos

(Robbins, 1945: p. 16)



A partir de acá, el estudio de la economía sigue una dirección y la disciplina se convierte en instrumentos y técnicas que permiten resolver un problema que pareciera ser más operativo que social. En esta relación nos encontramos con personas que resuelven -de forma eficiente- la forma de reproducir sus medios de vida con los recursos disponibles, y es el mercado la institución

central que determina las interacciones sociales -en un rol secundario- para producir y distribuir los recursos entre los miembros de la sociedad.

El estudio de esta ciencia y sus aplicaciones de política han cambiado de orientaciones a lo largo del siglo XX. Luego de la crisis financiera de 1929, emergieron las ideas de Keynes que promovían el gasto e inversión pública para fomentar la actividad económica, y dieron inicio -en particular una vez terminada la segunda guerra mundial - a la llamada época de oro del capitalismo, período marcado por aumentos de productividad, disminución de la desigualdad y aumento de la masa salarial en gran parte de las economías de occidente. La crisis del petróleo (1973) marcó el fin de esta era y la Escuela de Economía de Chicago cobró relevancia al proponer políticas orientadas al mercado: ajustes macroeconómicos por el lado de la oferta (flexibilización de los mercados laborales), liberalización de las cuentas comerciales y política monetaria enfocada en el control de la inflación. Esto marcó el inicio de la época neoliberal, la cual impactó profundamente en las economías latinoamericanas y en el patrón de desarrollo seguido en las últimas décadas.

Si bien ambos paradigmas representan políticas económicas opuestas en la forma de afrontar el rol del estado en la economía o las políticas seguidas en el mercado laboral, ambas se basan en el mismo concepto de economía presentado inicialmente: resolver de la forma más eficiente el problema de asignar recursos escasos ante necesidades infinitas. Desde este lugar, el pensamiento económico dominante generalmente ha omitido importantes consideraciones en su estudio, elementos como dominio o poder son

muchas veces omitidos produciendo resultados sesgados hacia los sectores o grupos dominantes en la reproducción de la vida social. Con ello, el estudio de la economía se desprende de las ciencias sociales y se instala dentro de la solución de problemas operativos. Tal como lo describe el economista Lerner (1972) *“Una transacción económica es un problema político resuelto. ...La economía ha ganado el título de Reina de las Ciencias Sociales por elegir como su dominio problemas políticos resueltos.”*

De esta manera, la Ciencia Económica estudia las dinámicas que se observan en un mercado -carente de contexto- como institución central y natural en la producción y asignación de los recursos, y considera a agentes representativos que maximizan su bienestar, para así encontrar los resultados económicos y diseñar las políticas apropiadas. Encontramos así sociedades determinadas por mercados y no mercados determinados por sociedades, es decir, es el mercado que organiza la sociedad al entregar a éste el rol de la asignación de los recursos, y al omitir las asimetrías de poder, el mercado reproduce las desigualdades -muchas ocultas- de la misma sociedad.

Encontramos de esta manera diversas desiguales y opresiones que la teoría económica -al omitirlas- las reproduce al justificar políticas económicas dentro de este marco teórico, y ha sido la crisis del COVID solo una expresión de cómo dichas desigualdades se han recrudecido y han dejado más a la vista estos problemas, tales como la desigualdad de género, la explotación del medio ambiente y la economía popular.

Medioambiente



Por otro lado, podemos encontrar la sobreexplotación del medio ambiente resultado de la forma en cómo se ha desarrollado el actual modelo productivo. Los procesos productivos llevados a cabo en las sociedades capitalistas se basan en el uso de insumos productivos (usualmente considerados capital y trabajo) para generar a partir de su interacción bienes y servicios que son transados en el mercado. De esta manera, son las unidades empresariales quienes deben decidir cuánto producir para maximizar las ganancias, y para eso, utilizan capital y trabajo como medios o meros instrumentos para lograr un objetivo: la producción. Este objetivo se vislumbra tanto en los objetivos de las empresas (maximizar las ganancias) como también en los objetivos que se trazan a nivel país (crecimiento del PIB). Ante esta dinámica, la interacción entre la sociedad con sus medios de vida son consideradas de forma instrumental, y la crisis medioambiental y el calentamiento global ha puesto en cuestión los límites de esta manera de reproducir nuestros medios de vida.

En esta línea, la macroeconomía como rama de estudio dentro de la economía se ha centrado en el Producto Interno Bruto como objetivo de política económica y de desarrollo, concepto que corresponde al valor de mercado de bienes y servicios producidos dentro un territorio nacional en un año. Este objetivo surgió luego de la gran crisis financiera de 1929 y de los esfuerzos de las naciones occidentales por contabilizar a nivel nacional su capacidad productiva, lo que terminó en los años 1950s con la medición del crecimiento PIB como objetivo de los países (Raworth, 2017).

De esta forma, la producción entendida desde el marco de estudios de la economía actual, se centra en la satisfacción de las necesidades humanas, y de esta manera, es el entorno un mero instrumento o medio para lograr el objetivo. La sostenibilidad ambiental y la comprensión del entorno como la biodiversidad, las especies que lo habitan y la conservación del ecosistema, no representan un punto de análisis más allá del efecto que esto pudiera tener sobre la satisfacción de las necesidades humanas en el futuro. Se configura así entonces un sistema en el que el ser humano y sus necesidades se encuentran al centro, y sus interacciones y medios son instrumentales a este.

Uno de los puntos de inicio en el estudio de la economía, como se clarifica en gran parte de los manuales introductorios a los cursos económicos, muestra el flujo circular de la economía como la base del funcionamiento económico y el centro de las dinámicas productivas a analizar en esta ciencia. En él, se observa que las dinámicas productivas se materializan a partir de la relación entre empresas y hogares, mientras los primeros producen bienes y servicios, los segundos consumen y ofrecen su fuerza de trabajo y/o capital para mantener las dinámicas productivas. Desde este paradigma, es que el centro del estudio es la producción y transacción de bienes y servicios, y no las interacciones socioecológicas que de ese proceso se desprenden.

Ante este objetivo productivo establecido por gran parte de la economías, incluyendo las latinoamericanas, resulta fundamental comprender que las consecuencias ambientales de la actividad económica serán variadas dependiendo de qué se produzca. Es así que este tema cobra particular relevancia

para la región de América Latina al considerar la posición geográfica y los recursos con los que este espacio cuenta.

El rol internacional, la posición geopolítica y la inserción en el comercio internacional del subcontinente latinoamericano se encuentra en gran parte determinada por las características geográficas que está posee. Como se observa en el capítulo de ecología y resistencia, Latinoamérica posee importantes reservas mundiales de agua fresca, tierras cultivables, minerales y combustibles fósiles. Justamente el uso intensivo de estos recursos ha caracterizado la producción con las consecuencias a la biodiversidad que esto conlleva. Esta estructura concentra la actividad económica en sectores primarios – como bien manifiesta el autor en el capítulo de ecología y resistencia- como países que mantienen una eco-dependencia. De esta manera, las desigualdades entre los países desarrollados se incrementan al no ser estos quienes sufren las consecuencias de los daños socio ecológicos ligados a la explotación de dichos recursos, y en la explotación irrestricta de estos como una aparente “única” vía para promover el crecimiento económico en los países de la región.

La dependencia de los recursos naturales determina a Latinoamérica en una posición de rezago productivo, en donde las dinámicas económicas internacionales le asignan un rol secundario y de “atraso” económico frente al mundo desarrollado, mientras que las herramientas teóricas entregadas por la teoría económica dominante proponen mecanismos de desarrollo homogéneos en la forma de manejar los mercados, lo que finalmente reproduce el sistema imperante.

Economía popular



La acumulación y la producción mediante lógicas mercantiles que se establecen en las economías de mercado son consideradas como la base del sistema económico, necesarias para la reproducción de los medios de vida y el progreso. Se establece así al mercado como una institución natural a la sociedad humana y cómo la única forma que permite producir y distribuir los bienes y servicios que esta produce. El progreso entonces se genera a partir de la forma en cómo, utilizando el mercado, se logra alcanzar mayores y mejores niveles productivos.

Sin embargo, ¿podemos considerar el progreso como algo equivalente para todos? En la idea de progreso como concepto homogéneo y transversal para cualquier lugar, tiempo y contexto histórico esconde una multiplicidad de elementos que pueden determinar lo que efectivamente puede considerarse como “progreso”. El desarrollo integral del ser humano y el mejoramiento de su calidad de vida, resulta ser una expresión de la cosmovisión que tiene una sociedad en un determinado momento del tiempo y lugar, y no sería así el mercado la única herramienta para alcanzar el progreso, sino más bien, alcanzar una idea de progreso que domina el actual paradigma: patriarcal, racista, capitalista.

Como se describió anteriormente, el marco de entendimiento básico en el estudio de la economía

se centra en la relación entre hogares y empresas, lo que remite al funcionamiento económico, su entendimiento y sus consecuentes políticas económicas a partir de las lógicas de mercado que en esta relación se desprende. De esta manera, son las relaciones mercantiles que se producen en el mercado, entre empresas y hogares, el foco de estudio de la economía, y es así que las ideas de progreso y desarrollo se fundamentan en dicha lógica.

Entender entonces posibilidades de desarrollo desde la perspectiva de la economía social y solidaria, desarrollo cooperativo o desde experiencias latinoamericanas que prescindan de las relaciones de mercado para la reproducción de la vida, resultan en muchos casos truncadas al encontrar que desde la generación de políticas públicas existe un marco de entendimiento limitado para pensar más allá de las actuales estructuras de mercado.



Otras maneras de organizar la producción no solo son necesarias, sino también fundamentales para poder alinear la idea de desarrollo y progreso a partir de las propias experiencias y cosmovisiones de las sociedades que habitan en el territorio latinoamericano. Para esto, salir del marco teórico clásico de la economía es una necesidad para descubrir otras formas productivas que incorporen las necesidades y deseos de la población, como también sus creencias y vivencias. En esta perspectiva, el Buen Vivir, como describen los autores

del capítulo de economía popular y resistencia, se considera como propuesta que “surge desde los valores, experiencias, memorias y prácticas de los pueblos originarios latinoamericanos”.

Ante este contexto teórico, donde el marco neoclásico de la economía presenta falencias para poder comprender desigualdades y vulnerabilidades que afectan particularmente a la región de América Latina y el Caribe, soluciones atinentes a las necesidades de la población que habitan estos territorios están usualmente ausentes en el quehacer público de los estados de la región. Es así como la crisis del COVID ha dejado al descubierto las vulnerabilidades de la región, y lo que ha resultado más importante aún, es que las respuestas de los estados han seguido un marco limitado para atenderlas. Es por esto que los sectores más afectados se han visto en la necesidad de resistir a la adversidad, y afrontar con herramientas contra hegemónicas a la actual crisis, como una muestra exacerbada de las opresiones previamente existentes.

Conocer y visibilizar estas formas de resistencia que existen en la región son una oportunidad para cambiar el foco de lo que se ha impuesto como progreso, y a su vez, generar herramientas teóricas que permitan diseñar nuevas políticas públicas alineadas con las características propias de la región, tanto con sus vulnerabilidades como con sus visiones e historias.

En este marco, se presenta a continuación una revisión de las resistencias en América Latina y el Caribe desde tres vulnerabilidades descritas anteriormente, género, medio ambiente y desde la economía popular.

Para esto, se expondrán tres informes que detallarán el contexto de cómo el COVID ha afectado a cada uno de estas áreas en la región, y se describirán experiencias de resistencia a partir de casos de estudios.

Desde una perspectiva feminista, el trabajo presentado en género y resistencia expone los casos de estudio de dos organizaciones feministas, La casa de las vulvas y No tan distintas, que desde Brasil y Argentina respectivamente. La casa de las vulvas es una casa cultural que tiene como objetivo visibilizar y fomentar el trabajo artístico de mujeres y disidencias de género con un enfoque feminista y antirracista, y utilizando el arte como vehículo de cambio social. Por otro lado, la organización (trans)feminista no tan distintas es una experiencia de trabajo con mujeres y disidencias en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, que tiene como objetivo crear nuevas estrategias habitacionales fuera de las lógicas capitalista heteropatriarcal. Finalmente, a partir de una entrevista con la antropóloga feminista Rosalva Aída Hernández se pone en cuestión la actividad académica y activista como complementarias, y expone la experiencia de la organización Hermanas en la sombra en México, donde existe un trabajo con mujeres presas, ex-presidarias y feministas aliadas que desde la creación literaria se piensan estrategias para la construcción de nuevas realidades.

En cuanto a ecología y resistencia, se expone la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (Fepikecha) en Perú, y que agrupa a comunidades indígenas kichwa con el objetivo de lograr el reconocimiento de la propiedad de sus tierras ancestrales

y asegurar la protección de esta. En México, la Cooperación comunitaria es una organización de la sociedad civil que busca generar espacios de encuentro entre las comunidades indígenas marginadas con sus propias tradiciones ancestrales, y con ello, reducir su situación de vulnerabilidad y fortalecer su autonomía. Finalmente, la organización Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) en Chile busca defender y recuperar los derechos de agua para las comunidades que habitan los territorios, recurso que hoy se encuentra en manos de privados resultado de su transacción mercantil.



Finalmente, desde la economía popular y resistencia, se presentan cuatro experiencias en la región. En Bolivia, la organización El Campesino se dedica a la comercialización de castaña ecológica utilizando el cooperativismo como forma de organización, que frente a los efectos de la pandemia establecieron estrategias de ayuda e intercambio recíproca y cooperativa con otras comunidades. Luego, se presenta el caso de la Despensa solidaria, cooperativa situada en México que surge para generar trabajo digno y construir comunidad. En Colombia, la Fundación OASIS es presentada como una experiencia asociativa que tiene como objetivo proveer alimentación y techo para menores y adultxs mayores. Finalmente, la cooperativa Unidad Social en Chile representa un caso de resistencia en el contexto de las manifestaciones sociales vividas

en Chile en octubre de 2019, y que se orientó a la generación de mecanismos de provisión de alimentos en el contexto de la pandemia.

El recorrido y revisión de cada una de estas experiencias, a partir de las voces de quienes trabajan en cada una de estas organizaciones, representan una muestra de resistencia en la región y constituyen así propuestas contra hegemónicas al actual sistema económico y social. La revisión de estas experiencias que surgen desde la vida cotidiana y social de las comunidades y sociedades que habitan en la región latinoamericana constituye una oportunidad para crear un marco de desarrollo que considere tanto el contexto socio-histórico de los pueblos, como también sus distintas cosmovisiones ancestrales.

La crisis del COVID expuso vulnerabilidades, y también los límites de la economía neoclásica para dar respuestas apropiadas en el contexto de la región. Las limitaciones de esta teoría se evidencian en las respuestas limitadas de los Estados en cuanto a la visión sesgada hacia el norte global a la hora de pensar en el progreso. Es por esto que en el presente trabajo se expondrán propuestas de políticas públicas que consideran el contexto y las desigualdades propias de Latinoamérica, y con esto, fomentar la construcción de sociedades con un mayor grado de autodeterminación y justicia social a la hora de pensar en la construcción del futuro.



Género



En relación a la desigualdad de género, la ciencia económica dominante omite de forma consistente las relaciones de poder que se desarrollan en la interacción social, centrándose en las transacciones económicas como fundamento para entender la distribución y producción de los recursos. A modo de ejemplo, las principales teorías laborales explican cómo funciona el mercado del trabajo, en donde se describe que lxs “agentes” participantes ofrecen su fuerza de trabajo determinada por su disposición individual a trabajar. Así se constituye una oferta de trabajo que mira las interacciones entre el salario y las horas que las personas (como agentes homogéneos) están dispuestas a trabajar. ¿Cómo se relacionan lxs personas entre sí? ¿Existe heterogeneidad entre lxs participantes de la fuerza laboral?. Es claro ver cómo lxs agentes no son homogéneos y grandes diferencias se encuentran tanto entre quienes participan en el mercado laboral, como en la intensidad con que participan.

Según indica la CEPAL (2021) la participación laboral femenina en la región de América Latina y el Caribe alcanzó un 52% y disminuyó a un 46% luego de la llegada del COVID, mientras tanto, la participación laboral masculina alcanzó un 69% después del COVID. De esta manera, elementos fuera del marco de estudio económico pueden entender y explicar lo que la economía dominante comúnmente no explica: ¿Cómo el mercado laboral reproduce diferencias de poder entre sus

participantes?

La decisión de participar en el mercado laboral, como también la posibilidad de conseguir un trabajo, está determinada por las relaciones de poder y opresión de género. Ante esto, es que observamos cómo son las mujeres y disidencias quienes por lo general participan en menor porción en el mercado laboral o participan con una mayor probabilidad de ser despedidxs, a su vez, participan con mayor intensidad en sectores más precarios, informales o de menor pago. La omisión de las relaciones de poder de género -que asigna roles y discrimina sujeto a dicha construcción social- no permite comprender de forma integral las dinámicas del mercado laboral.

Por otro lado, la reproducción de los medios de vida - a diferencia de cómo se muestra en la economía dominante - no depende solo del mercado laboral y de las transacciones monetarias adyacentes, depende también de trabajos que no son contabilizados ni considerados por la economía formal. Los distintos tipos de trabajo no remunerado que se encuentran en la sociedad (trabajo de cuidados, trabajo doméstico, etc.) representan labores esenciales para la reproducción de la vida, y sin embargo, no son labores distribuidas homogéneamente entre lxs miembros de esta. Es así como se observa que el tiempo utilizado en las labores de quehaceres domésticos y de cuidados no remunerados es tres veces mayor para las mujeres que para hombres tomando en consideración 18 países de la región de América latina y el caribe (CEPAL, 2021). Incluso, muchas veces resulta difícil o imposible obtener información más detallada sobre este tipo de trabajos, ya que los estados no han implementado -o lo

han hecho parcialmente- registros de información que permitan tomar en cuenta estos trabajos, lo que resulta fundamental para alcanzar una comprensión integral del mercado laboral. Esta situación se agudiza cuando se desea conocer la situación de las disidencias, generalmente ausentes en el diagnóstico y posterior desarrollo de políticas públicas.

Esta distribución desigual de los trabajos necesarios para la reproducción de la sociedad, no considerados por la teoría dominante, ya que desde este paradigma teórico no hay un estudio en profundidad de las relaciones de poder que pueden determinar las relaciones de género, y con ello, las asignaciones de los roles asignados dentro de la sociedad. Es así como la desigualdad de género es comúnmente invisibilizada por la teoría económica.



Referencias



CEPAL (2021): Panorama social de América Latina. Informe anual. Repositorio CEPAL. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020> .

Lerner, A. P. (1972). The economics and politics of consumer sovereignty. *The American Economic Review*, 62(1/2), 258-266.

Raworth, K. (2017). *Doughnut economics: seven ways to think like a 21st-century economist*. Chelsea Green Publishing.

Robbins, L. (2007). *An essay on the nature and significance of economic science*. MacMillan and Co., Limited St. Martin Street: London.

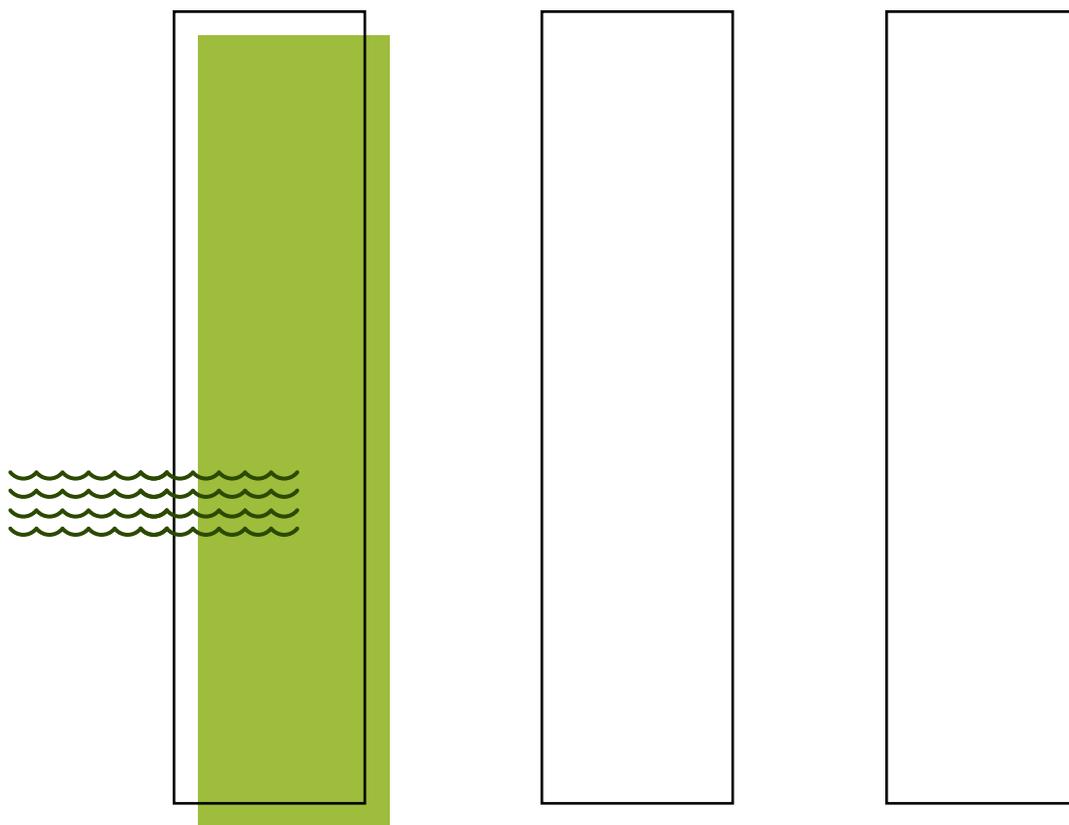
Ecología y Resistencia en América Latina

Joshua Hurtado Hurtado

Internacionalista y prospectivista

Estudiante doctoral en Ciencias Ambientales

Interdisciplinarias de la Universidad de Helsinki, Finlandia



Introducción



La pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del ser humano frente a fenómenos disruptivos de carácter biológico. Paralelamente, ha dejado claro que las dinámicas de explotación de la biósfera y de los entornos naturales de los cuales dependen tanto la vida humana como no humana son capaces de desencadenar riesgos para el desenvolvimiento (económico, social, político, de salud, etc.) de las sociedades.

Como la fundación Heinrich-Böll-Stiftung en su oficina del Cono Sur (2020) ha argumentado, los virus y las bacterias siempre han existido, pero las diferentes dinámicas de explotación de la biósfera –entre las cuales se encuentran el tráfico de animales, la deforestación, la contaminación de ríos y lagos, la extracción de minerales del subsuelo y la agroindustria intensiva– aceleran la aparición de nuevos patógenos, su multiplicación y su expansión a escala mundial (Heinrich Böll Stiftung Oficina del Cono Sur, 2020).

Por otra parte, el cambio social en la región bajo estudio, América Latina, está íntimamente vinculado a las relaciones que se forman entre sociedad, economía, territorio y elementos naturales de la biósfera. Una región de contradicciones, América Latina cuenta con grandes riquezas de la biósfera, pues, de acuerdo con Fabio de Castro y otros (2016, p. 1), en ella se localizan: la mitad de los bosques tropicales del planeta, una diversidad de biomas que albergan una biodiversidad monumental, un tercio de las reservas de agua fresca, un cuarto de la tierra con potencial cultivable, y reservas importantes de minerales valiosos y combustibles fósiles. Por otra parte, en la región también predominan procesos extractivos y de explotación de los entornos naturales, lo que deriva en daños para las comunidades y para los ecosistemas de la región.

Se puede decir que las relaciones socio-ecológicas descritas son centrales para el devenir de la región. Por ende, adquiere mayor relevancia el estudiar los cambios surgidos en estas relaciones a partir de la pandemia de COVID-19, así como a aquellas organizaciones e iniciativas en América Latina que se dedican a cultivar la simbiosis humano-biósfera.

En este reporte, exploramos la relación de las comunidades humanas, entendidas como las colectividades humanas asentadas en un determinado territorio, con los medios naturales de subsistencia.

Delinear el contexto de la región en su rol como espacio periférico de la economía política internacional, así como conocer los efectos de la pandemia en la región y las prácticas de algunas organizaciones aquí presentadas, ayudará a repensar y re-politizar las prácticas económicas y las relaciones con los medios naturales de subsistencia de un territorio. Consecuentemente, se podrán visibilizar dinámicas normalmente excluidas de los discursos oficiales sobre el desarrollo y el progreso en los países de la región.

El reporte también presentará casos de estudio de organizaciones que adoptan un enfoque socio-ecológico para entender las relaciones entre comunidades humanas y el entorno natural. Estas organizaciones, ubicadas en diferentes países de la región, muestran maneras de concebir el mundo, de organizarse colectivamente y de enfrentar amenazas a la integridad de las comunidades y de los ecosistemas opuestas a las dominantes en los discursos generales sobre materia económica, progreso y tecnología. Conocer de sus visiones del mundo y de sus experiencias previas a, y durante, la

pandemia, tiene la intención de inspirar a otras organizaciones comprometidas con la sostenibilidad y con la justicia ambiental en sus acciones y en su forma de abordar las relaciones socio-ecológicas en su espacio de incidencia.

Se espera que, al plasmar esta información en el presente documento, las ideas aquí desarrolladas permitan guiar las acciones de organizaciones de la sociedad civil, empresas, gobiernos y de la población latinoamericana en general en la adopción de principios regenerativos y de cuidado hacia la naturaleza. De igual forma, se desea que estos principios se vean reflejados en objetivos institucionales, en la formulación de estrategias organizacionales y en el desarrollo de actividades organizacionales, grupales e individuales. En una última sección, se detallan algunas propuestas que pudieran ser de relevancia para todos estos actores sociales. No obstante, estas propuestas no representan una meta ideal a alcanzar, sino que buscan ser un punto de partida para que las personas lectoras de este documento puedan orientar sus actividades y objetivos hacia prácticas basadas en principios de economía ecológica y de simbiosis y regeneración del entorno.



Contexto: Eco-dependencia, modelos económicos y fenómenos de explotación de los medios naturales de subsistencia en América Latina



Desde las teorías del desarrollo, América Latina, como realidad socio-histórica, ha sido caracterizada como una región de la periferia económica global inmersa en una relación de dependencia con el centro del sistema capitalista de alcance global (Dos Santos, 2020).

Simplificando considerablemente, la relación de dependencia implicaba que las regiones y países de la periferia vendían mercancías de bajo valor a los países del centro, los cuales los transformaban de materias primas y productos manufacturados simples a mercancías de alto valor agregado. Posteriormente vendían estas mercancías de nuevo a las regiones y países de la periferia, a un precio mayor. Esto significaba que los países periféricos no creaban tecnología propia, no se industrializaban, y dependían de la compra de productos valiosos hechos por el centro.

Esta visión de dependencia de América Latina con respecto al centro del sistema capitalista global era apropiada para aproximarse a la condición de subdesarrollo de esta región. No obstante, algo frecuentemente omitido de esta conceptualización fueron los vínculos entre los modelos de desarrollo nacional de cada país latinoamericano, su orientación económica, su composición estructural y los **medios naturales de subsistencia** de la región. Estos últimos, compuestos por aquellos **elementos naturales que son integrales para la subsistencia humana (tierras, agua, bosques, animales, minerales y sus usos)**, rara vez se consideraban en las discusiones de dependencia y subdesarrollo clásicas. Al integrarlos al análisis, es posible ver que América Latina no está únicamente inmersa en una relación de dependencia desde una perspectiva de industrialización, sino que

también está en condiciones de **eco-dependencia** (Barton, 2006).

Para Jonathan Barton (2006), la eco-dependencia se refiere a aquellas relaciones socioeconómicas que se dan en los sectores predominantemente orientados a la exportación y al uso intensivo de medios naturales de subsistencia como recursos para las actividades económicas (Barton, 2006, p. 136). Al igual que la dependencia, la eco-dependencia tiene un alcance internacional que moldea las estructuras internas de cada país latinoamericano, y se manifiesta de tres formas principales: 1) por medio de la externalización de los daños y crisis ecológicas desde los países del centro hacia los de la periferia, 2) en la incapacidad de propuestas de desarrollo sostenible de dar soluciones a los problemas ecológicos, y 3) en los modelos económicos internos de los países que se basan en la explotación irrestricta de los medios naturales de subsistencia (Barton, 2006, p. 134).

Es esta relación de eco-dependencia y sus manifestaciones que ofrecen un referente contextual dentro del cual se desarrollan las dinámicas descritas en este reporte, así como las alternativas y propuestas que surgen para hacer frente a los retos socio-ecológicos de América Latina. La condición de eco-dependencia de América Latina es el fenómeno de escala macro que desarticula y distorsiona la relación que tienen las comunidades humanas con su entorno natural y con los medios naturales de subsistencia.

Los modelos económicos predominantes en América Latina a lo largo del siglo XX y hasta el presente del siglo XXI han estado en oposición estructural al bienestar de la biósfera y a la integridad del territorio, así como a las comunidades que han forjado relaciones con el territorio basadas en el

respeto, la armonía y la conservación. A manera ilustrativa, se puede decir que el estado desarrollista latinoamericano de mediados del siglo XX se sustentaba en ideas de modernización y desarrollo como progreso industrial, marginando en el debate político a aquellas opciones indigenistas y ecologistas que cuestionaban esta visión hegemónica del desarrollo (Svampa, 2008). Por otra parte, Alberto Acosta ha afirmado que tanto los estados neoliberales latinoamericanos, predominantes en la región desde la década de 1980 hasta inicios de la década de los 2000, como los estados progresistas, predominantes en la región durante gran parte de la década de los 2000 y hasta inicios de la década de 2010, se basaban en la modalidad de acumulación extractivista como médula de sus propuestas de desarrollo económico (Acosta, 2012).



El fenómeno de explotación de la biósfera y de los medios naturales de subsistencia de mayor alcance en América Latina es el extractivismo. El extractivismo se refiere al proceso de extracción de elementos naturales de la biósfera para su mercantilización y venta en el mercado global. Este proceso ocurre principalmente en economías que dependen de la exportación de estos elementos para impulsar sus visiones de desarrollo (Acosta, 2012). Profundizar en el panorama extractivista y neo-extractivista (aquél en donde los estados progresistas adoptan el modelo extractivista) de América Latina requeriría de un estudio más detallado. Sin embargo, algunos elementos importantes de este panorama son delineados por Burchardt y Dietz (2014) y se presentan a continuación:

1.

La exportación de bienes primarios en la región incrementó de 27% del total de las exportaciones en el año 2000 a 60.7% en 2011, superando notablemente las exportaciones industriales. Esto, sin embargo, varía de acuerdo con las subregiones latinoamericanas, profundizándose más en los estados andinos.

2.

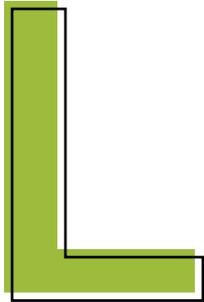
En lo relativo a combustibles fósiles, la región entera vio aumentada su producción de petróleo crudo de 400 mil millones de metros cúbicos en 1990 a 570 mil millones de metros cúbicos en 2008.

3.

La producción agrícola más importante fue la de soja, que subió a más del doble entre 2000 y 2007. Más de la mitad de la producción de soja mundial ocurrió en América Latina en este periodo.

4.

Subregionalmente, se observó que Ecuador, Brasil y Venezuela dependieron principalmente de su producción de petróleo, Perú y Chile de la minería, Bolivia del gas natural, y Argentina de la agricultura y de la minería. México y Centroamérica tenían dinámicas internas diferentes, pero fueron orientándose hacia procesos extractivos iniciando en la década de los 2010.



La riqueza natural de América Latina se ve constantemente amenazada debido a la expansión de actividades extractivas y de uso de suelo. En el reporte GEO-6 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o UNEP por sus siglas en inglés (UNEP, 2016), se manifiesta que las economías latinoamericanas comparten una fuerte y persistente dependencia de los productos primarios y los medios naturales de subsistencia, los cuales representan aproximadamente el 50% de todas las exportaciones de bienes, particularmente de bienes de procedencia agrícola y minerales. En el reporte también se menciona que la población urbana aumentó en más de 35 millones de personas entre 2010 y 2015, y se estima que alcance los 567 millones de personas para el año 2025 (UNEP, 2016). Este proceso ha llevado a un aumento de la degradación ecológica, ya que la urbanización deteriora los ecosistemas al convertir los espacios naturales en espacios creados por el humano, desarticulando los ciclos de vida, carbono, agua y energía (Sadri & Zeybekoglu, 2018). Asimismo, este reporte señala que desde 1990 hasta 2015, se mostró una reducción del 9.4% de los bosques en la región, y 2.23 millones de kilómetros cuadrados de tierra se vieron afectados por erosión hídrica inducida por el ser humano. El reporte establece que la posibilidad de combatir la pobreza y la desigualdad en la

región está íntimamente relacionada con la capacidad de los países latinoamericanos de gestionar adecuadamente el capital natural de la región (UNEP, 2016).

El carácter fundacional del territorio y de los elementos naturales para el desarrollo de formas de organización social también es visible al considerar cómo los entendimientos de estos elementos condicionan la clase de relaciones socio-ecológicas en una región. Por ejemplo, el concepto moderno colonial de “recursos naturales” impulsa ideas instrumentales de la naturaleza que permiten su privatización y abren la puerta a su uso irrestricto por las fuerzas del capital. En cambio, considerar a la naturaleza bajo el término de “comunes” enfatiza su carácter comunitario y la posiciona como un eje para la organización social y política, así como base para la reproducción de la vida (Roca-Servat, 2020, p. 28). La primera perspectiva es, sin embargo, la predominante en la estructura de la economía política internacional, y ocasiona que los efectos de la degradación ambiental muestren una distribución desigual entre el Norte y el Sur Global. Asimismo, las regiones y los países del Sur Global, incluyendo a América Latina, son más vulnerables ante la deforestación, la agricultura intensificada y el cambio climático, ocasionando que ocurran más eventos de desbordamiento de enfermedades transmisibles difíciles de contener (Austin, 2021).

Como consecuencia de este panorama extractivista, numerosos conflictos socioambientales han surgido en la región para intentar detener las incursiones de los estados y de las corporaciones multinacionales que buscan la explotación de la biósfera para su mercantilización. En el siguiente apartado se describen estos movimientos y se ilustran sus dinámicas y su presencia territorial.

Conflictos socioambientales en América Latina



Los conflictos socioambientales son una respuesta social en contra de “la expansión feroz de la extracción de minerales, hidrocarburos, energía renovable y productos agroindustriales”, proceso que conlleva “varias formas de despojo, desposesión, contaminación y sacrificio de comunidades, cuerpos y naturaleza no-humana” (van Teijlingen & Dupuits, 2021, p. 7).

Estos conflictos no son únicamente ambientales, sino que se enmarcan en una disputa política más amplia: la búsqueda de crecimiento económico de los países latinoamericanos “ha desplazado economías regionales existentes, expandido fronteras de extracción hacia territorios antes considerados improductivos o no eficientes, generado acaparamiento de tierras, expulsión y desplazamiento de comunidades rurales (campesinas mestizas, indígenas, afrodescendientes)” (Vallejo et al., 2019, p. 18).

La disputa se puede resumir en dos objetivos distintos que colisionan.

Por un lado, de parte de las élites globales y nacionales, las cuales tienen un perfil blanco, patriarcal, burgués, urbano, adulto y heterosexual, visualizan la naturaleza como una mercancía que servirá para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de los países donde habitan. Por otro lado, están los grupos indígenas, lxs activistas socioambientales, y las comunidades que coexisten pacíficamente con su territorio circundante que buscan defender la vida y los medios de reproducción de vida. Es la oposición de estos objetivos que genera los conflictos socioambientales de la región (Vallejo et al., 2019).

Los conflictos socioambientales en la región latinoamericana exhiben una diversidad considerable. De acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental (Environmental Justice Atlas), en América Latina y el

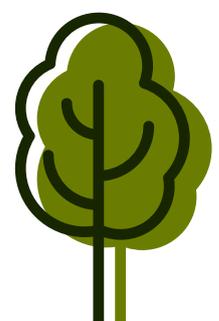
Caribe se presentan diez diferentes tipos de conflictos socioambientales, de los cuales han predominado (desde que se inició su identificación) aquellos relativos a la minería y extracción de materiales de construcción (Figura 1), a la gestión del agua (Figura 2), al uso de suelo y de bosques (Figura 3), y a la extracción y producción de combustibles fósiles (Figura 4). Los conflictos socioambientales en el Atlas reflejan aquellas resistencias u otros tipos de oposición que surgen en respuesta a las iniciativas extractivas. Viendo a la región en su conjunto, se puede observar que los conflictos socioambientales son un fenómeno generalizado en la región, incluso en los países que se denominan progresistas o de izquierda (Recuadro 1).



1.

Primera Figura

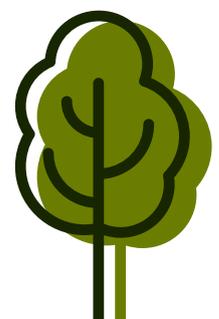
Mapa de conflictos socioambientales relativos a la minería y extracción de materiales de construcción (en naranja).
Fuente: Environmental Justice Atlas (<https://ejatlas.org/>).



2.

Segunda Figura

Mapa de conflictos socioambientales relativos a la gestión del agua (en azul).
Fuente: Environmental Justice Atlas (<https://ejatlas.org/>).



3.

Tercera Figura

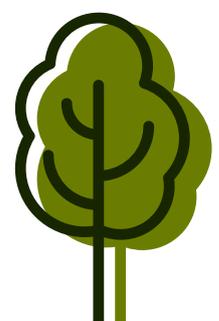
Mapa de conflictos socioambientales relativos al uso de suelo y de bosques (en café). Fuente: Environmental Justice Atlas (<https://ejatlas.org/>)



4.

Cuarta Figura

Mapa de conflictos socioambientales relativos a la extracción y producción de combustibles fósiles (en negro). Fuente: Environmental Justice Atlas (<https://ejatlas.org/>).



1.

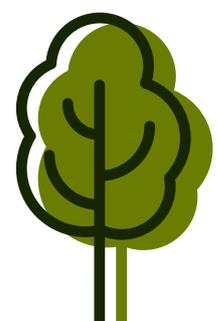
Primer recuadro

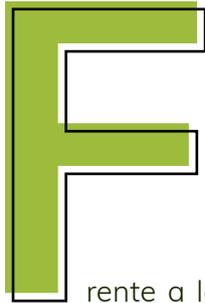
Conflictos socioambientales por país en América Latina y el Caribe (con información de junio de 2021). Sólo se contemplan en este recuadro aquellos conflictos reportados y que pueden sustentarse con referencias en campo y en medios de información. Fuente: Elaboración propia con información del Environmental Justice Atlas (<https://ejatlas.org/>).

País	Número de conflictos socioambientales
Brasil	172
Mexico	162
Colombia	130
Perú	97
Argentina	72
Ecuador	65
Chile	62
Bolivia	42
Venezuela	33
Guatemala	29
Costa Rica	21



País	Número de conflictos socioambientales
Guatemala	29
Costa Rica	21
Honduras	21
Panamá	17
Nicaragua	12
Puerto Rico	10
Republica Dominicana	8
El Salvador	7
Paraguay	6
Uruguay	5
Belice	4
Jamaica	4
Cuba	4
Guyana	2
Haití	2
Surinam	1
Trinidad y Tobago	1
Antigua y Barbuda	1
Las Bahamas	1
Santa Lucia	1
Curaçao	1





rente a la expansión de proyectos extractivistas y neo-extractivistas, una respuesta común de las comunidades afectadas ha sido la resistencia.

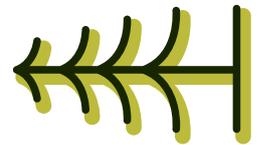
La resistencia puede tomar varias formas.

De manera ilustrativa, se puede decir que sus inicios pueden ocurrir con la reconfiguración de actividades cotidianas, tales como participar en nuevas actividades de trabajo, establecer economías comunitarias e incrementar la participación política en la comunidad (Sebastián Aguilar, 2019). Luego, la resistencia puede expandirse al ámbito de la acción colectiva por medio de manifestaciones o de bloqueos pacíficos que impiden el acceso a los agentes del Estado o de empresas multinacionales a sus territorios (Ortega Cerdá, 2011; Pérez-Rincón, 2014). Finalmente, la resistencia puede llegar hasta la necesidad de armar a los miembros de los movimientos con la finalidad de repeler la entrada y los ataques de estos agentes.

En cualquier caso, estas formas de resistencia se caracterizan como oposicionales, en el sentido de que rechazan rotundamente la influencia de estructuras y dinámicas extractivas,

colonizadoras y de acumulación por desposesión y evitan un acercamiento – mediante la negociación o vías legales – con ellas.

Esta postura oposicional contrasta con otras estrategias comunitarias que se gestan más allá de la resistencia. Actores que ven sus territorios y los medios naturales de subsistencia amenazados en ocasiones optan por integrarse a procesos de negociación o de colaboración con gobiernos o empresas. Mecanismos que facilitan esta negociación o colaboración son consultas previas, esquemas de compensación ambiental o pago por servicios ambientales (van Teijlingen & Dupuits, 2021). Otras estrategias se basan en aumentar la visibilidad de la defensa de los territorios, acudiendo a foros nacionales e internacionales y creando alianzas con actores institucionales que puedan facilitar a las comunidades su labor de defensa (Claeys & Pugley, 2017).



Efectos de la pandemia de COVID-19 en el territorio y en las relaciones socio-ecológicas en América Latina



Si bien, a julio de 2021, aún es pronto para establecer vínculos concretos entre la pandemia de COVID-19 y efectos derivados de ella en cuestiones de degradación ambiental en países particulares de la región latinoamericana, se pueden hacer inferencias sobre los diferentes retos que han enfrentado los territorios y las relaciones socio-ecológicas.

La integridad de las zonas boscosas y selváticas, ya afectada significativamente previo a la pandemia, se vio vulnerada con mayor profundidad durante los primeros meses de la misma. En México, la deforestación ilegal incrementó en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Chihuahua, y la península de Yucatán. En Perú, después de abril de 2020, se incrementó la deforestación a niveles superiores a los de 2018 en el mismo periodo (López-Feldman et al., 2020).

De los diez países con mayor pérdida de bosques primarios en 2020, cinco de ellos se encuentran en América Latina.

En términos de hectáreas perdidas, Brasil en la primera posición, perdiendo 1,704,090 hectáreas; Bolivia la tercera posición, habiendo perdido 276,883 hectáreas; Perú en quinta posición, con 190,199 hectáreas perdidas; Colombia en la sexta posición, con 166,485 hectáreas perdidas; y México en la décima posición, con 68,423 hectáreas perdidas (cifras de Global Forest Watch, citadas en Alonso, 2021).

Lo descrito anteriormente, de acuerdo López-Feldman y otros (2020), indica que los fenómenos de deforestación, particularmente en la zona del Amazonas, se vieron agravados por la reducción de los esfuerzos de monitoreo en la región. Esta reducción de esfuerzos, a su vez, facilitó el

incremento de la tala de bosques y, en consecuencia, un incremento de las emisiones de dióxido de carbono. Otras actividades facilitadas por la disminución del monitoreo fueron la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y los cultivos ilícitos (BBC Future, 2020). Estas últimas expusieron a las comunidades que habitan en los territorios amazónicos al virus de COVID-19, lo cual presenta riesgos severos de salud pública en la región debido a la pobre capacidad de respuesta de hospitales y otros servicios de salud (López-Feldman et al., 2020).

Cuestiones relacionadas con el agua y acceso desigual hacia este medio natural de subsistencia también se vieron exacerbadas en el contexto de la pandemia. Se estima que en América Latina en su conjunto, 37 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable (ACNUDH, 2020).

Considerando que la mayor parte de la región se encuentra en condiciones de estrés hídrico – con México y Chile reportando estrés hídrico en más del 40% de sus respectivos territorios –, y que el agua – además de ser clave para la vida humana y las actividades productivas – es un elemento fundamental para detener la propagación del virus responsable del COVID-19, se exacerbaban los riesgos de salud pública en zonas en donde no existe la infraestructura para abastecer de agua a las comunidades (García & Hiernaux, 2020). En el transcurso de la pandemia, se han constatado las dificultades que puede conllevar la falta de acceso al agua en diferentes países de la región, entre ellos México (Redacción Aristegui Noticias, 2020), Bolivia (Aliaga, 2020), Brasil (Fluence News Team, 2020) y Chile (CEJIL, 2020).

En un estudio por Bolaño-Ortiz y otros (2020), se descubrió que la tasa de incidencia

de casos de COVID-19 se asociaba negativamente con la velocidad del viento en los asentamientos (urbanos), mientras que con los indicadores de contaminación del aire, se identificó una correlación positiva en varias ciudades de América Latina y el Caribe. De igual manera, los hallazgos de este estudio indican que la pobreza y la desigualdad se asociaban positivamente con la transmisión del SARS-COV-2 y la incidencia de casos de COVID-19 en las ciudades latinoamericanas bajo estudio. La mala calidad del aire en las ciudades está vinculada también a fenómenos extractivos, pues aquellos asentamientos cercanos las operaciones de empresas pedreras suelen experimentar peores condiciones en su calidad del aire. Asimismo, el uso de combustibles fósiles (particularmente en automóviles) y de emisiones de gases de efecto invernadero por procesos industriales deterioran la calidad del aire en las ciudades.



Como lo indican los diversos estudios y reportajes, personas en situación de pobreza, aquellos grupos en condiciones de vulnerabilidad y comunidades que viven más cercanas a zonas de extracción o que resisten y enfrentan a las dinámicas de empresas multinacionales, gobiernos y grupos de crimen organizado han experimentado mayores riesgos durante la pandemia. Por un lado, esto se debe al mismo riesgo de exposición al SARS-COV-2 por falta de acceso al agua, hacinamiento, menores posibilidades de acceso a servicios de salud y golpes a los ingresos. Debido a estas condiciones, diferentes iniciativas de acción colectiva surgieron como muestra de solidaridad en asentamientos informales, en temas desde seguridad alimentaria, salud pública, seguridad de

ingresos, infraestructura, vivienda, etc. (Franco et al., 2020). Por otro lado, las medidas institucionales de gobiernos y los peligros que representan las actividades de empresas y de grupos del crimen organizado también vulneran su seguridad e integridad, y derivan en nuevas formas de conflicto socioambiental. Por ejemplo, Menton y otros (2021) han demostrado que la pandemia de COVID-19 intensificó los conflictos sobre medios naturales de subsistencia y las resistencias indígenas en Brasil.

El panorama anterior de los efectos de la pandemia de COVID-19 en América Latina en la relación de las comunidades y los asentamientos con los medios naturales de subsistencia resalta la necesidad de precisar qué alternativas han surgido que permitan hacer frente a los problemas socio-ecológicos descritos.

En la siguiente sección, se presentan casos de estudio que muestran diferentes aproximaciones que las comunidades y organizaciones tienen con los medios naturales de subsistencia, buscando relaciones armoniosas y sostenibles. Asimismo, se detallan algunas de las respuestas e iniciativas que han surgido de ellas para enfrentar los retos de la pandemia.



Casos



1.

Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (Fepikecha), Perú

Nota editorial: La entrevista se llevó a cabo con Marisol García Apagüeño, lideresa indígena kichwa que forma parte de la Junta Directiva de Fepikecha como Secretaria de Actas y Archivos. El autor de este documento ya había conocido a Marisol García por medio de un foro llevado a cabo en el marco de la COP26 en 2021. Marisol fue muy amable de concedernos tiempo para ser entrevistada y darnos su perspectiva con respecto a la aproximación de Fepikecha en su relación con el territorio.

Fepikecha es una organización que reúne a varias comunidades indígenas kichwa que residen en el Bajo Huallaga en San Martín, Amazonía de Perú. La meta que motiva las actividades de la Federación es lograr el reconocimiento de la titulación colectiva de sus territorios. De lograr esto, podrían obtener la seguridad jurídica de los territorios que están cuidando ancestralmente y proteger de manera más efectiva su territorio demarcado.

Cuando se formó ACR Cordillera Escalera, un proyecto gubernamental que buscaba demarcar áreas de la cordillera andina del mismo nombre en Perú con un propósito de conservación ecosistémica, las instituciones encargadas de llevar a cabo la demarcación incursionaron en territorio indígena y buscaron despojar de su territorio a las comunidades indígenas allí residentes. Estas comunidades habían ocupado el territorio por miles de años previo a la incursión del Estado. Para hacer frente a este proyecto, las comunidades indígenas se unieron bajo un modelo de federaciones con el objetivo de revertir las acciones del Estado.

De acuerdo con Marisol, cada comunidad conoce la delimitación “de su territorio de casa, de recolección de frutos, de recolección de medicinas. Es comunal”. Las comunidades obtienen únicamente lo que necesitan, sus medios naturales de subsistencia, dejando al resto del ecosistema territorial en paz. Para ella, las comunidades kichwa no son extractoras. No se dedican a la venta de madera, como sí lo hacen las empresas a las cuales el Estado concesiona y vende el bosque de la Amazonía. Son principalmente empresas madereras, de monocultivos, y mineras.

“Es muy doloroso ver cómo matan a los árboles milenarios, y ellos sólo ven dinero, una mina de dinero. Ellos [las autoridades del Estado] se hacen llamar dueños y son autoridad porque la Constitución los respalda”, dice Marisol.

Al ver cómo el entramado Estado-empresas despoja a las comunidades de sus territorios y destruye los ecosistemas para buscar ganancias financieras, Fepikecha definió como lucha principal en el tema de defensa del territorio y de la naturaleza el “concientizar a los seres humanos en que tenemos que hacer un cambio radical en nuestra vida. Todas nuestras acciones y

demandas en las grandes ciudades afectan a la Amazonía del mundo, y a la Amazonía peruana”, señala Marisol. Por otra parte, Fepikecha también enfatiza la centralidad de las mujeres en el proceso de “revalorar la cultura, la música, las artesanías y la forma de producción de alimentos”.

Debido a que las comunidades indígenas que constituyen Fepikecha son originarias de la Amazonía peruana, han adquirido sabiduría con el paso los siglos a través de su profunda conexión con la naturaleza. “Todo tiene una relación, una razón de por qué nacieron en ese territorio. Si no fuéramos nosotras las comunidades indígenas ahí, no sería verdaderamente una biodiversidad. Somos parte de. Los indígenas somos parte de esa cosa verde”, enfatiza Marisol, indicando que las comunidades indígenas no se consideran separadas del territorio, sino un elemento más del ecosistema y su biodiversidad.

“Al ser nuestra casa y al ser nuestro hábitat, hay un respeto. Porque nosotras realmente tenemos un concepto de conservación. Nos duele matar un árbol”, añade.

Debido al poder del Estado respaldado por el orden constitucional y a su potestad legal sobre el territorio peruano, las comunidades indígenas de Fepikecha han enfrentado numerosos retos a lo largo de su historia como Federación. Estos retos incluyen la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y falta de acceso a la justicia; un trato desigual e indiferente de parte de las autoridades gubernamentales hacia las comunidades con respecto a temas educativos; la falta del reconocimiento legal del territorio indígena; y la concesión de los territorios a empresas. La pandemia de COVID-19 sólo añadió más retos a esta lista y profundizó otros. Por ejemplo, mencionan que las autoridades nunca se presentaron en las comunidades indígenas en tiempos

de la pandemia para brindarles atención. Fue únicamente hasta que pasaron meses que llegaron solamente a ofrecerles el medicamento paracetamol, lo que evidencia una falta de acceso a la salud digna.

Las posibilidades de acceso a la justicia también disminuyeron, dado que ninguna denuncia procedía. Durante la pandemia 7 líderes indígenas fueron asesinados por defender el territorio. Las empresas, amparadas por el Estado, entraron a talar. En consecuencia, se incrementó exponencialmente la tala. Paralelamente, tuvieron que enfrentar un incremento en actividades del narcotráfico en la zona. La siembra de hojas de coca no autorizadas incrementó, y las comunidades de Fepikecha han observado que otros grupos han sacado cocaína en canoas, haciendo pasar los paquetes por pacientes COVID-19.

A pesar de estas dificultades, Fepikecha ha encontrado la fortaleza de seguir defendiendo su territorio en lo que llaman la Resistencia de Corazón Verde. Esta resistencia se centra en concientizar a todo ser humano que la vida está en la Amazonía y en los territorios de los que los seres humanos formamos parte, y que vale la pena defender la naturaleza.

También ha tomado acciones específicas que buscan fortalecer sus esfuerzos por defender el territorio en el que habitan. Entre ellas están el solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el dar seguimiento a su caso. También decidieron organizarse con otras comunidades indígenas por medio La Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODESIPAM), la cual busca trabajar en una agenda indígena que considere iniciativas para el desarrollo local, el fortalecimiento de competencias y la gestión territorial. Por medio de la CODESIPAM, hacen pronunciamientos y

diseñan estrategias para defenderse del Estado peruano. Fepikecha también ha sido una presencia en foros internacionales, tal como la COP26, donde han explicado su caso y buscan establecer alianzas con otras personas y grupos externos al contexto peruano.

Marisol señala que cualquier apoyo a la Resistencia de Corazón Verde es muy bienvenido y agradecido por Fepikecha. Estos apoyos pueden consistir en difundir su causa, apoyar en el diálogo con el Estado peruano, apoyar por medio de vías legales, dedicar tiempo para establecer una clínica médica en sus comunidades o mejorar la infraestructura de las escuelas, y posteriormente (por medio de una organización de la sociedad civil) estarían en posibilidades de recibir donativos. Marisol hace un llamado a lxs gobernantes: “Que realmente escuchen el clamor. Que atiendan sus pedidos, que les den acceso a la justicia, a la salud, a la educación digna, que se valore y respete a las mujeres emprendedoras del pueblo indígena, que se reconozca la titularidad de su territorio, que se proteja las vidas de las defensoras del territorio”.



2.

Cooperación Comunitaria, México

Nota editorial: Para este perfil de organización, se entrevistó a Isadora Hastings, co-fundadora y coordinadora general de Cooperación Comunitaria, y a Elis Martínez, latinoamericanista y encargada de proyectos y desarrollo organizacional. Ambas fueron muy amables en concedernos un espacio para la entrevista.

Cooperación Comunitaria es una organización de la sociedad civil (OSC) de México, la cual busca fomentar el reencuentro de las comunidades indígenas marginadas con sus formas tradicionales de habitar, organizarse y autoproducir de manera sustentable. La OSC cuenta con un equipo operativo interdisciplinar que busca formarse hacia la transdisciplinariedad, y está conformado por administradores, geógrafos, ingenieros civiles, arquitectos, sociólogos, politólogos latinoamericanistas, antropólogos y promotores locales, entre otros. Particularmente relevante es que varios de sus miembros son habitantes de las comunidades con las que trabajan, se suben al barco de cooperación comunitaria y tienen una función clave en estas comunidades.

Cooperación Comunitaria tiene dos objetivos centrales. El primero es reducir la vulnerabilidad de las comunidades con quienes trabajan y aumentar su resiliencia. Esto implica fortalecerlos para que no dependan de otra organización o un gobierno que les facilite esos derechos. Para lograr esto, adoptan un enfoque de aumento de capacidades. Al hacer intervenciones en comunidad, esta OSC busca cultivar la deliberación y autogestión en los procesos comunitarios. El segundo objetivo es establecer un puente entre comunidades rurales y otras instituciones dando voz a quienes actualmente no la tienen en el contexto político actual. Para lograr sus objetivos, Cooperación Comunitaria trabaja con tres líneas estratégicas. La primera es la producción y gestión social del hábitat con grupos organizados. La segunda línea es la reconstrucción integral social del hábitat. La última línea se centra en información e incidencia.

Como organización, Cooperación Comunitaria acoge y abandera el concepto de hábitat. En esta concepción de hábitat, el ser humano forma parte de y es interdependiente con la naturaleza. Reconocen que la experiencia con pueblos originarios les ha hecho entender que no hay una separación de naturaleza y el ser humano, sino que forman parte de un todo. Para Isadora y Elis, “el concepto de territorio que tienen las comunidades es integrativo. Para ellas no hay partes. La parte siempre conforma el todo. Entender esto para la organización fue muy significativo, porque esa integralidad entendida como un pensamiento complejo – alineado al pensamiento oriental, antiguo – abre la mirada hacia otra forma de vivir en contraste con la occidental”. Consideran que el entender la vida con sus múltiples conexiones, analizando las relaciones causales, los efectos de rebote y los flujos de energía y materia es una manera de

pensar mucho más sustentable y sostenible, que contrasta con la forma fragmentaria cultivada desde Occidente. Comprender la integralidad de la humanidad con la biósfera es, desde su perspectiva, clave para sobrevivir a las crisis climáticas que estamos enfrentando.

Previo a la pandemia de COVID-19, eran tres los retos principales que la Cooperación Comunitaria debía atender.

El primero era relativo al financiamiento. Originalmente, tenían que ser conocidos por las fundaciones a pesar de no tener proyectos establecidos que evidenciaran el valor de su propuesta. Únicamente hasta que se consolidaron varios de sus proyectos pudieron tener acceso a recursos para operar. El tema de financiamiento también se vincula con el reto del tiempo, dado que sus proyectos no pueden planearse, ejecutarse, finalizarse y evaluarse en los plazos para postular a convocatorias de financiamiento. El último reto se refiere a su situación como figura jurídica de OSC. “Ser una OSC es difícil, y en este país es cada vez más complicado por la historia de corrupciones de entidades no lucrativas. Cada vez se fiscaliza más y se toman muchas acciones, mucho trabajo burocrático”, mencionan Isadora y Elis.

La pandemia de COVID-19 generó nuevos retos, pero también les brindó ciertas oportunidades. Una dificultad que experimentaron como OSC es que la pandemia retrasó los tiempos de los proyectos que estaban en marcha, los cuales tuvieron que detenerse temporalmente porque las visitas a ellos no estaban permitidas. Por fortuna, algunas de sus fuentes de financiamiento fueron sensibles a la situación y fueron flexibles con los reportes de resultados que les exigían. Otro reto involucró el mantener la comunicación con las comunidades donde desarrollaban una intervención, debido a la

poca o nula conectividad en esas zonas. Por ello, hacer talleres y fortalecer capacidades autogestivas vía remota no era fácil. Muchos de los miembros de las comunidades donde trabajaban tuvieron que adquirir un celular. Las comunidades mismas experimentaron serias dificultades en temas económicos y en temas de movilidad y conectividad. Esto se debió a que cerraron caminos y carreteras y las comunidades no podían abastecerse.

A partir de estos retos, Cooperación Comunitaria optó por fortalecer procesos de soberanía alimentaria, para que ante nuevos eventos disruptivos pudieran las comunidades dedicarse al autoconsumo. Desde su perspectiva, todas las comunidades con las que trabajaban aceptaron muy bien la propuesta de recuperación de huertos como un paso hacia la alimentación autogestiva. Para Isadora y Elis, la soberanía alimentaria y la autonomía alimentaria se relacionan con “cuestiones económicas que trascienden lo familiar. El énfasis radica en reconectarse con la comunidad. Dadas las limitaciones de las comunidades rurales en su entorno, no pueden producir todo lo necesario para una dieta adecuada, pero a partir de los vínculos entre comunidades, pueden llevar a cabo intercambio y se fortalecen como comunidad”.

Isadora y Elis concluyen con el siguiente mensaje, que para ellas es crítico para el desenvolvimiento de las relaciones de la humanidad con la naturaleza en el presente siglo.

“Debemos ver a los seres vivos no como mercancía, sino como seres con derechos iguales a los humanos, derecho a la vida y al disfrute de la vida. Los pueblos originarios proporcionan esa visión de poder entender esto como un sistema del cual somos interdependientes y no podemos prescindir de ninguno”.



3.

Modatima Petorca, Chile

Nota editorial: La entrevista se llevó a cabo con Lorena Donaire, fundadora de Modatima Mujeres y defensora de los territorios en Chile. Fue muy amable en concedernos la entrevista, particularmente en el contexto de persecución que enfrenta en Chile.

El Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) es una expresión de resistencia organizada que lucha por defender y recuperar el agua y los bienes comunes en Chile. Fundada en la provincia de Petorca en 2010, a la fecha han trabajado en todo el país para visibilizar el conflicto con respecto a las aguas y a la amenaza que representa su privatización. En Chile, 87% de las aguas pertenecen a entes privados. Su planteamiento principal es que el agua es un bien común, fundacional para la humanidad y la naturaleza, por lo cual debe ser accesible para la población y estar en sus manos. Como el agua es esencial para la vida, Modatima afirma que debe considerarse como un derecho humano fundamental. También sostienen que debe rechazarse la privatización del agua y evitar su mercantilización, pues de ella dependen comunidades y ecosistemas enteros.

Como organización, Modatima Petorca ha ejecutado acciones de diversa índole para impulsar la defensa del agua y de los bienes comunes. Una de ellas es la aparición en medios y foros nacionales e internacionales, en donde resaltan la magnitud del conflicto por el agua y la severidad de los daños causados por su privatización y mercantilización. Otra es la presencia en el ámbito institucional de la política, habiendo participado en elecciones y, después de ser electos algunos de sus miembros en la rama legislativa, procediendo a instalar comisiones de recursos hídricos en el Senado y en la Cámara de Diputados. No obstante, quizás sus acciones más reconocidas son las que les han ganado mayor reconocimiento:

organizar movimientos de resistencia en calles y en diferentes territorios donde tienen presencia. Uno de los logros de este último campo de acción es la creación de los Comités de Agua Potable rurales, los cuales buscan que el agua quede para el uso de las comunidades y no para las corporaciones.

Para Modatima Petorca, las comunidades tienen una relación interdependiente con el territorio, y consideran que forman parte del ecosistema. Lorena señala: “Existimos en interdependencia del gran ecosistema donde estamos todos insertos. Cuando se daña, nos dañamos a nosotros mismos”. Por ello, los integrantes de Modatima Petorca denuncian como ecocidio las acciones que llevaron a la sequía del río en Petorca y a la escasez general de agua en esa región. Es así que Modatima considera como su gran desafío el liberar las aguas del control de los entes privados respaldados por el Estado y reconstruir los cuerpos de agua.

Tradicionalmente, como organización, han enfrentado serios retos y amenazas a su integridad física. El más claro reto es la persecución y agresiones que sufren los

miembros de Modatima por sus acciones de resistencia en contra de la privatización del agua. Unos días antes de la entrevista, una compañera de Lorena había sufrido un atentado en el cual quemaron su automóvil y la amenazaron de muerte. Asimismo, en varias de las reuniones de la organización, agentes respaldados por el Estado estuvieron vigilando e instalándose en las cercanías de los lugares donde se reunían los miembros de Modatima. Mucho más grave son las desapariciones y asesinatos de compañerxs y defensores ambientales vinculados a exagentes de la dictadura de Pinochet (1973--1990), quienes frecuentemente son empleados por empresarios y desplegados para intimidar a quienes se les oponen, según lo indica la propia Lorena. Un reto adicional es la asimetría de poderes entre su movimiento social y las empresas y el Estado, lo que se refleja en disputas legales que Modatima termina perdiendo. El ejemplo más relevante es relativo a la persecución y agresión hacia integrantes de Modatima. La organización levantó una medida cautelar para su protección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Modatima proporcionó todas las evidencias y argumentos necesarios para ganar dicha solicitud de medida cautelar, y sin embargo no se las otorgaron. Eso exhibe que el entramado Estado-empresas bloquean sus acciones en el plano jurídico.



Durante la pandemia, los retos se profundizaron en varios aspectos. La persecución se acrecentó, evidenciado en casos como la destrucción del automóvil de la compañera de Lorena. La escasez de agua en Petorca ocasionó que se descontrolara la pandemia en provincia porque no existían

los servicios sanitarios para poder tratarla. Varias de estas comunidades sólo recibían 15 litros de agua cada dos días. Incluso ante la orden de la Corte de subir la cantidad de litros de agua otorgados a las comunidades de 15 a 100 para el tratamiento de la pandemia, el Estado chileno desobedeció esa orden y no le ha brindado la cantidad de agua necesaria a Petorca.

Para responder a estos retos, Modatima tomó varias acciones que le permitió maniobrar en el contexto de la pandemia. Para enfrentar las amenazas a sus personas, han buscado visibilizar su lucha tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional lograron obtener escaños en la Convención Constitucional. De acuerdo con Lorena, entraron seis constituyentes a nivel nacional. De este número, cuatro son mujeres con visiones muy diversas, y buscan impulsar leyes que protejan al agua y la defiendan para la población de Chile. A nivel internacional, presentaron audiencias relativas a los siguientes temas: la recuperación del agua y de los bienes naturales comunes; los retos y amenazas de lxs defensorxs de derechos humanos y ambientales; y la resistencia que se da a nivel nacional con todos los conflictos socioambientales chilenos. De sus acciones de resistencia en comunidad y en las calles, organizaron una campaña con el nombre “Un bidón para Petorca”, con lo cual reunieron dinero y bidones de agua para las comunidades.

Con esta campaña, lograron entregar 20 litros más de agua a las comunidades en Petorca de lo que anteriormente recibían. Asimismo, Lorena señala que “la virtualidad nos permitió llegar a más lugares, generar más contenido, entregar más contenido, y afianzar lazos”.

Lorena concluye con las siguientes lecciones derivadas de la experiencia de Modatima

en la pandemia: “Como movimiento, nunca habíamos pasado por los procesos políticos de disputar elecciones. Eso habla de cómo se agita todo. El movimiento empieza a cambiar. Empieza a mover energías”. Delinea lo que le gustaría ver en un futuro con respecto al cuidado del agua y de los bienes comunes: “Ponerse de acuerdo es muy importante. Generar redes de unidad, de apoyo. Un sistema de agua que sea Latinoamericano. Vienen [las grandes empresas y sus asociados políticos] a destruir nuestros territorios, vienen a robarnos el agua. Estamos a un paso de la Guerra del Agua. Si no nos levantamos como Latinoamericanos y no nos aventuramos en reconstruir juntos, la crisis climática se va a seguir profundizando”.



Recomendaciones



Las secciones anteriores han mostrado cómo la estructura económica global y las dinámicas que genera al interior de los países y de las regiones geopolíticas son responsables de violencia, desposesión, degradación ambiental y asimetrías de poder.

Todo esto se manifiesta en eco-dependencia y en el desigual acceso a la justicia y a los medios naturales de subsistencia, privilegiando los intereses de los particulares y del Estado sobre el bienestar de las comunidades y de los ecosistemas. Las posibles recomendaciones para enfrentar este panorama y transitar hacia sociedades fuertemente sostenibles (Bonnedahl & Heikkurinen, 2019) dejan atrás el paradigma neoclásico y propuestas basadas en el crecimiento económico. En cambio, buscan concentrarse en cultivar relaciones socio-ecológicas armónicas entre las comunidades y sus medios naturales de subsistencia.

A continuación, se presentan recomendaciones en dos niveles. Primeramente, se muestran las recomendaciones a nivel paradigmático, las cuales implican cambios en el pensamiento y en la cosmovisión de las personas. En segundo plano, están las recomendaciones más prácticas, orientadas a enfrentar problemas de sostenibilidad y de justicia ambiental. Estas segundas se clasifican de acuerdo con el tipo de actores: sociedad civil organizada, sector privado y sector público.

Las relaciones paradigmáticas están orientadas a servir de base conceptual y de estilo de pensamiento en el cual se enmarcan las recomendaciones prácticas. Por ejemplo, el pensamiento sistémico complejo sostiene las recomendaciones de transición hacia modelos de negocios sostenibles que se recomiendan para el sector privado, pues permitirá que los agentes de este sector comprometidos con la sostenibilidad y las relaciones socio-ecológicas armónicas puedan comprender las consecuencias de sus acciones y aquellos puntos de oportunidad donde puedan ofrecer un producto o servicio con valor socio-ecológico.

Recomendaciones paradigmáticas



Cultivar un pensamiento sistémico complejo.

Más allá de la estructura económica global y de los intereses de los diferentes actores políticos y económicos, una fuerza inercial que obstaculiza el cambio hacia la sostenibilidad es la incapacidad de identificar y conocer con detalle los elementos de un sistema, sus relaciones y sus dinámicas internas. Sin esta capacidad de visualizar sistemas, las personas tienden a pensar de manera fragmentada y unidireccional, pensando que un elemento X sólo puede tener un efecto sobre otro elemento Y. El pensamiento sistémico, sin embargo, muestra que los múltiples efectos y dinámicas de un sistema no se circunscriben a elementos específicos, sino que afectan al sistema en su conjunto, incluso a aquellos elementos originarios que ocasionaron un efecto sobre otros. Para hacer frente a los retos del siglo XXI, alcanzar la sostenibilidad y dirigirnos hacia la justicia ambiental, se debe cultivar el pensamiento sistémico complejo (Castellani, 2018).

Dos dimensiones constituyen este tipo de pensamiento. La primera es el mapeo de sistemas y la comprensión de sus dinámicas. Para ello, hay que prestar atención a los elementos – los cuales pueden ser actores en diferentes roles,



espacios, objetos, etc. – que lo constituyen, e identificar qué tipo de relaciones se establecen entre sí. ¿Hay elementos que se refuerzan mutuamente? ¿Hay elementos que entran en conflicto? ¿Qué consecuencias tienen para el sistema estas relaciones entre elementos? Responder a estas preguntas permitirá comprender el sistema, la naturaleza de sus dinámicas y las consecuencias principales que generan las dinámicas de los sistemas bajo estudio. La segunda dimensión se vincula más a las bases afectivo-emocionales y psicológicas del ser humano. Conlleva el impulsar en las personas la capacidad de asimilar limitaciones a sus propias acciones y deseos, así como orientarlas a percibir cómo el establecer compromisos de responsabilidad hacia con otros seres vivos y con la biósfera puede producir ganancias globales en felicidad, bienestar y paz (Castellani, 2018).



Recomendaciones paradigmáticas

b.

Transitar hacia el ser relacional

Parte de las premisas conceptuales de la ortodoxia económica es el homo economicus, agentes individuales, egoístas, con deseos ilimitados y racionales. Esta visión del ser humano es muy limitada, desconectada de la dimensión afectiva del ser humano y de cualquier idea de interdependencia. Se debe transitar de este ser individual egoísta y racional al ser relacional, un sujeto complejo, multidimensional y relacional constituido por la encarnación, la sexualidad, la afectividad, la empatía y el deseo como cualidades centrales (Braidotti, 2013, p. 26). Lograr esta transición en lxs seres humanxs, tanto desde la cosmovisión imperante en Occidente como en la práctica de la vida de cada persona, permitiría valorar más aquellas entidades no humanas que, sin embargo, forman parte de la biósfera y de las cuales dependemos para nuestra supervivencia. Cuidarlas y procurar su bienestar derivará en el bienestar de las comunidades y de los seres humanos en su conjunto.



Recomendaciones paradigmáticas



Cultivar el pensamiento de futuros y de anticipación.

Este tipo de pensamiento se refiere a todos los esfuerzos por conocer, pensar en, y usar el futuro, desde las dimensiones micro (el individuo y sus relaciones) hasta las macro (nivel societal). Puede ser un esfuerzo consciente y explícito o puede estar inmerso de manera inconsciente en estructuras de anticipación del ser humano (Ahvenharju et al., 2018; Miller et al., 2014). Pensar sobre el futuro y conocer el potencial en el futuro de fenómenos presentes ayuda a prever las consecuencias de ciertas decisiones actuales y permite vislumbrar el posible desarrollo de proyectos innovadores y basados en principios de ecología política-económica y de justicia ambiental. También se podrán identificar obstáculos presentes y futuros y diseñar estrategias para superarlos.

La pregunta, por supuesto, es cómo adoptar los estilos de pensamiento y cosmovisiones recién planteadas. Existen una multitud de formas, algunas más intelectuales y otras más prácticas. Entrar en programas de educación formal, tomar cursos y hacer lecturas especializadas es una opción retadora intelectualmente que sería apropiada para quienes buscan algún grado de especialidad en el tema.



Pero propuestas más prácticas existen. Pasar tiempo en zonas naturales – incluso en jardines o parques – y hacer una identificación de sus elementos y de sus relaciones de manera intuitiva ayuda a visualizar patrones y dinámicas del sistema. Estas relaciones luego se pueden validar con perspectivas especializadas en libros, artículos o con personas conocedoras del tema.

Otra propuesta sería involucrarse en proyectos de huertos urbanos, permacultura y gestión social y sostenible del hábitat, en los cuales el diálogo, cooperación y cuidado de los elementos naturales sean requisitos para el éxito de estos proyectos. La presencia constante en estos proyectos irá orientando a las personas a reconocer la interdependencia con otros seres humanos y con nuestros medios naturales de subsistencia. De igual forma, las personas podrían iniciar contactos con movimientos de justicia ambiental. Al conocerlos, podrían desarrollar un interés por conocer con mayor detalle los temas de fondo y apoyarlos.

Asimismo, se pueden examinar los sistemas y los objetos de la vida diaria, y tratar de seguir la ruta de aquellos objetos o sistemas con los que interactúan con un interés por aprender sobre ellos. Por ejemplo, al agarrar una manzana, piensa lo siguiente: ¿De dónde obtuviste esa manzana? ¿Qué procesos tuvo que pasar dicha fruta para llegar a tu cocina? Si tienes un estante de madera en tu sala, piensa: ¿Cómo fue construido dicho estante? ¿Cuáles son sus materiales? ¿De dónde provinieron? ¿Qué pasa si se rompe? ¿Se repara o se recicla? Si se trata de sistemas, se puede empezar por cuestionar el camino que siguen nuestras acciones y mapear los sistemas. ¿Podemos generar energía para autoconsumo? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué tecnologías e infraestructura son necesarias? ¿Qué estructuras legales lo facilitan o lo impiden? Las preguntas anteriores son ilustrativas, pero ayudan a guiar el tipo de pensamiento que se requiere de las personas.

Finalmente, propuestas más individuales pero introspectivas pueden funcionar. Practicar la meditación puede ayudar a desarrollar una comprensión de unx mismx que sea relacional, entendiendo nuestras conexiones con otras personas y otros elementos de nuestra vida.



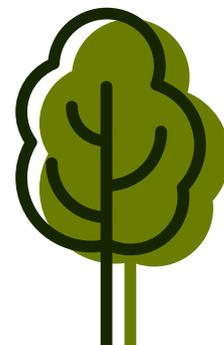
1.

Sociedad Civil Organizada

Las OSC desempeñan un papel importante en el establecimiento de agendas públicas y en la formulación y ejecución de estrategias para la gobernanza en temas de medio ambiente. Pueden facilitar el establecimiento de acuerdos más efectivos y democráticos por parte de los gobiernos hacia la sociedad civil. Sin embargo, aunque su participación es necesaria, muchas veces puede resultar insuficiente debido a limitaciones contextuales y de capacidad operativa (Bernauer & Betzold, 2012). Por ello, más allá de constituir una red de actores que ayudan a materializar acuerdos de gobernanza medioambiental, las OSC deben buscar fortalecer sus capacidades operativas y diseñar estrategias que impulsen acciones orientadas hacia la transición sostenible y a alcanzar la justicia ambiental en los países latinoamericanos. ¿Qué acciones se necesitan para ello?

Formar alianzas

Las alianzas entre OSC cumplen con diferentes propósitos. Organizaciones de base pueden vincularse con organizaciones de la sociedad civil nacionales o internacionales para ayudar a implementar políticas ambientales y para establecer agendas sobre los riesgos ambientales ante gobiernos y foros internacionales (Paehlke & Torgerson, 1990). Las alianzas entre OSC y organizaciones de base



también ayudan a resistir amenazas del Estado o de la industria que pueden destruir modos de vida. Más allá de esta resistencia, sin embargo, las OSC pueden cumplir un rol pragmático en diseminar discursos ambientales bajo diferentes enfoques paradigmáticos (neoliberal, estatista, decolonial, etc.), los cuales dependerán de su relación que tengan con las instituciones gubernamentales en el contexto de acción (Forsyth, 1999).

Desarrollar capacidad operativa

Parte de esto tiene que ver con el financiamiento de las OSC, debido a que existe una relación de dependencia por parte de las OSC hacia con empresas y gobiernos que las financian. Para maniobrar en torno a esta dependencia, esquemas de autofinanciamiento que permitan a las OSC mantener sus operaciones deberían considerarse. Desarrollar capacidades técnicas en el diseño de proyectos de sostenibilidad fuerte y de monitoreo y evaluación de proyectos también facilitará el acceso a fuentes de financiamiento. Esto se puede llevar a cabo por medio de asociaciones con universidades o con especialistas tanto del sector público como del privado. No obstante, hay que considerar que una excesiva orientación de las operaciones de una OSC hacia la búsqueda de financiamiento puede derivar en un bajo impacto en los objetivos de la misma, debido a que quedan desvinculadas de las bases comunitarias que las impulsan (Andrews, 2014; Jalali, 2013).

Diseñar y gestionar proyectos de sostenibilidad fuerte

Al generar alianzas con sectores académicos, públicos y privados, las OSC



pueden impulsar el diseño de proyectos de sostenibilidad fuerte, tales como aldeas ecológicas que usen fuentes renovables de energía y tengan su propio sistema de alimentos (al menos, parcialmente). Esto ocurrió en Sudáfrica con la eco-aldea Lynedoch, la cual se diseñó y construyó bajo la coordinación y el liderazgo del Instituto de Sostenibilidad (Sustainability Institute) en Sudáfrica (Swilling, 2019). El caso de Cooperación Comunitaria en este reporte, una OSC que busca apoyar a las comunidades en diseñar un hábitat y dinámicas de producción sostenible, también ilustra el liderazgo que las OSC pueden tomar en estos proyectos.

Establecer y gestionar foros de encuentro y de discusión

Con la transición a la virtualidad provocada por la pandemia, algunas OSC han optado por impulsar webinars, foros de discusión y pláticas para difundir sus propuestas y aquellos conocimientos relacionados con propuestas de economía ecológica y sostenibilidad fuerte. Hacer llamados al público general a asistir a estos foros de encuentro y de discusión puede facilitar la diseminación de estas ideas y favorecer su apoyo entre sectores más amplios de las sociedades latinoamericanas.

Resistir colectivamente las acciones de desposesión y destrucción ambiental

Los conflictos socioambientales en América Latina exhiben que el entramado Estado-empresas buscarán expandir su control sobre los medios naturales de subsistencia. Las OSC pueden en sí mismas ejercer resistencia en las calles, con marchas y manifestaciones. Además, pueden ayudar a las comunidades a



organizarse colectivamente y ofrecer espacios de comunicación entre sus miembros para resistir. También se pueden tomar medidas legales y pelear en el ámbito jurídico aquellas medidas que amenazan con la desposesión de las comunidades y su desplazamiento, como Fepikecha y Modatima han hecho durante la pandemia. Bloqueos en la vía pública y eventos de performance, como ocurre con el caso de Extinction Rebellion, o con tácticas irónicas y humorísticas, como coordinarse para saturar las sucursales de bancos con clientes que solicitan depositar miles de monedas de baja denominación (algo que hizo Modatima Petorca) o llenar las calles de juguetes, maniqués y otros artefactos para que hagan la manifestación en lugar de las personas (Popović & Miller, 2015). Finalmente, su capacidad de movilización puede lograr que se desarrollen campañas de ayuda o de concientización para la regeneración del medio ambiente y para apoyar a las comunidades que han sido privadas del acceso a los medios naturales de subsistencia.



2.

Sector Privado

El sector privado que se apega a la ideología capitalista, de acumulación y que prioriza el crecimiento económico es uno de los grandes agentes que provocan la destrucción ambiental y la desarticulación de comunidades. Pero el sector privado no es homogéneo: hay empresas y otras unidades de producción económica que buscan transitar hacia procesos de producción fuertemente sostenibles y contemplar el bienestar de las comunidades en donde operan al mismo tiempo que generar utilidades por sus actividades económicas. Por ello, resulta relevante incorporar recomendaciones para aquellos agentes del sector privado que buscan alinear sus operaciones con los límites biofísicos del planeta, así como para aquellos que explícitamente manifiestan su deseo de lograr transiciones sostenibles. ¿Qué acciones se tendrían que tomar?

■ Mapear los flujos de energía y materia al interior de la empresa

Las empresas y unidades de producción económica deberán estar conscientes de sus consumos de energía y materia y minimizar su dependencia en medios naturales de subsistencia. Para ello, hacer la transición hacia la economía circular puede ser un inicio en la dirección adecuada. Desde herramientas más especializadas como los Indicadores de Transición Circular hasta pautas simples, las empresas pueden iniciar un proceso de



diagnóstico sobre su consumo de materia y energía y aquellos desechos que sus actividades económicas generan. Algunas de las pautas se delinean a continuación (obtenidas de Lacy et al., 2020):

Energía

Diseñar planes para reducir el consumo energético, incrementar la eficiencia operativa de energía, y transitar de los combustibles fósiles hacia fuentes renovables de energía.

Emisiones de gases de efecto invernadero

Identificar puntos y procesos de emisión de la compañía. Identificar emisiones en la cadena de suministro. Hacer intervenciones para reducir las emisiones en toda la cadena.

Agua

Reducir la dependencia de la empresa en procesos que usen agua, por ende reduciendo la necesidad de extraerla de cuerpos de agua naturales. Priorizar oportunidades de ahorrar agua. Incrementar el tratamiento y uso nuevo de agua para incrementar eficiencia y reducir costos.

Desechos

Eliminar las fugas de desecho en todos los procesos de la empresa, alcanzando un indicador de cero desechos. Minimizar la capacidad operativa desperdiciada al maximizar el aprovechamiento de insumos.



Desarrollar y promover el uso de tecnologías socio-ecológicas

Las tecnologías socio-ecológicas (su término original en inglés, convivial technologies) poseen cinco diferentes dimensiones (relacionalidad, acceso, adaptabilidad, bio-interacción y adecuación) que se aplican a materiales, producción, uso e infraestructura. La matriz de tecnologías sociales se diseñó por Andrea Vetter (2018), y permite hacer una evaluación de las tecnologías involucradas y su potencial sostenible, particularmente para favorecer la generación de comunidades que sigan principios inspirados en el movimiento socio-ecológico del decrecimiento.

Diseñar modelos de negocios sostenibles

La sostenibilidad, adaptada al diseño de los modelos de negocios que siguen el imperativo del crecimiento económico y maximización de ganancias en un sistema capitalista, suele tener un énfasis débil. La sostenibilidad débil busca soluciones basadas en el mercado y en tecnología, pero a largo plazo no genera un cambio sustancial en las relaciones de las empresas con los medios naturales de subsistencia. No obstante, existen modelos de negocios basados en principios de sostenibilidad fuerte y de ecología económica. Modelos de negocios fuertemente sostenibles son aquellos que: 1) se alinean con las dinámicas de la biósfera y limitan su consumo de recursos; 2) mapean y analizan los flujos de materia y energía requeridos en sus actividades económicas; y 3) reconceptualizan lo que significa valor, y buscan generar valor en una dimensión política, así como para la sociedad civil y para la biósfera (Stål, 2019; Stål & Bonnedahl, 2016). Si las empresas son serias en su compromiso con la biósfera y el medio ambiente, deberán (re)diseñar sus modelos de negocios bajo estas consideraciones.



3.

Sector Público

En condiciones óptimas, el sector público tiene la capacidad de ejecutar acciones con consecuencias para la totalidad de un territorio determinado correspondiente con sus facultades legales. Dada la influencia del sector público, es importante considerar los elementos de un programa político-económico que integre principios de economía ecológica y que busque el bienestar de la población y de los seres vivos no humanos como propósito principal. ¿Qué acciones deberían considerarse? Muchas de las siguientes se basan en propuestas de políticas públicas para el movimiento del decrecimiento, aunque algunas de ellas se basan en el contexto de políticas públicas vinculadas a la justicia ambiental en América Latina.

■ Establecer indicadores de progreso alineados al post-crecimiento

En lugar del PIB, se pueden establecer otros indicadores como el Indicador de Progreso Real (IPR), el cual mide tanto avances en materia económica como el progreso social y mejoras ambientales en un país. Cualesquiera que sean los indicadores a adoptar, no se deben mistificar y defender ciegamente, como ha ocurrido con el PIB (Alexander, 2012). En cambio, se deben someter a revisiones continuas según su capacidad de representar un bienestar para los seres humanos, los seres no humanos y la biósfera.



Reducir las horas de trabajo

Esto conlleva reestructurar todo el mercado laboral y no simplemente exigir que se reduzcan las horas de trabajo. La reducción de horas de trabajo cumple con dos funciones: reducir la cantidad de materia y energía extraída de la biósfera y transformada durante actividades económicas, y liberar el tiempo de las personas para que puedan desempeñar otras actividades que desarrollen su potencial. Acciones que llevarían a esto podrían ser (obtenidas de Alexander, 2012):

1.

Eliminar sesgos estructurales que promuevan estándares elevados de horas de trabajo por semana y que se manifiesten en las leyes laborales (entre 40 y 54 horas en la mayoría de los países).

2.

Prohibir que el apego a cumplir con estos estándares se asocie a salarios mínimos únicamente, y que el cumplimiento del estándar de horas laborales se asocie a un buen nivel de ingresos y prestaciones para el contexto del país. Además, deben facilitarse buenos salarios y prestaciones laborales a quienes desempeñen en trabajos de medio tiempo y permitir en los marcos jurídicos y reglamentos que los empleados soliciten una reducción de horas totales de trabajo al empleador sin que esto sea razón de despido, solamente intercambiando un porcentaje del salario por mayor tiempo libre.

3.

Reducir gradualmente las horas de trabajo en las leyes laborales del país, iniciando por una reducción a 35 horas por semana, y evaluar el éxito de esta medida. Si tiene éxito, buscar la reducción a semanas laborales de 28 horas como estándar.





■ Formular políticas que lleven a asegurar un ingreso básico universal (IBU)

El IBU es una medida que permite que todos los ciudadanos de una determinada unidad territorial reciban regularmente dinero sin condiciones. La aspiración de quienes apoyan el IBU es que este ingreso básico permita cubrir todas las necesidades humanas adecuadas al contexto en que se está otorgando este ingreso. Otras formas de ingreso que podrían complementar el IBU podrían venir del trabajo o de formas de emprendimiento sostenibles (Alexander, 2012). El IBU tiene potencial socio-ecológico debido a que, bajo ciertas condiciones, puede funcionar como una política transformadora de distribución y eliminar la asociación entre trabajo e ingresos. Si se elimina esta asociación, se podrían diseñar estrategias plausibles de reducción de horas de trabajo que ayuden a minimizar los flujos de energía y materia requeridos para las actividades económicas. Al mismo tiempo, si se cultivan nuevas subjetividades económicas, puede favorecer también a la reimaginación de comunidades y de las unidades políticas que constituimos los seres humanos, así como la relación con nuestro entorno (Lawhon & McCreary, 2020).

■ Formular políticas que promuevan el uso de fuentes renovables de energía y la autosuficiencia energética.

En muchos países de la región, la producción y distribución de energía tiene un carácter centralizado y está a cargo del sector público, privado o de ambos. Sin embargo, se debe transitar hacia marcos jurídicos que permitan la generación de energía por parte de las viviendas y de las comunidades bajo un esquema de fuentes renovables de energía, sin que tengan que estar obligados

a consumir de la energía producida por el sector público o privado. De esta manera, aldeas ecológicas y viviendas diseñadas bajo principios de sostenibilidad podrían ser autosuficientes y no contribuir a la generación de fuentes fósiles de energía o aquellas que requieren la destrucción de la biósfera y desarticulación de comunidades para generarse (Alexander, 2012; Swilling, 2019).

Asegurar la protección a los activistas y defensores de justicia ambiental

Como lo han evidenciado los casos de Fepikecha y de Modatima, aquellas organizaciones en América Latina que luchan por la preservación del territorio y la justicia ambiental sufren de agresiones que pueden derivar en asesinatos y desapariciones de sus miembros. Por ello, es necesario que los Estados aseguren en su legislación y en sus programas la protección a estas organizaciones y a las personas que luchan por la justicia ambiental. Los gobiernos subnacionales también pueden diseñar programas o coordinarse con OSCs para brindarles protección a los activistas.

Participar en cumbres internacionales y negociar acuerdos vinculantes en tema ambiental.

Hasta el momento, las cumbres sobre medio ambiente a nivel internacional han fallado en plantear acuerdos vinculantes que obliguen a los países a hacer cambios hacia la sostenibilidad. Desde América Latina, algunos países en coalición podrían impulsar esta agenda y señalar su relevancia para hacer frente a las crisis ambientales y a las violaciones de derechos humanos que generan las dinámicas extractivas promovidas por el entramado Estado-empresa. Para ello, por supuesto, se



necesitan gobiernos progresistas que mantengan un compromiso con el bienestar de los seres humanos y de la biósfera, y que desarrollen las capacidades diplomáticas de negociación para impulsar acuerdos vinculantes a nivel internacional. Además, los tratados comerciales deberán incluir provisiones ambientales que orienten a los gobiernos a mantener la integridad de la biósfera.

Establecer derechos de la Naturaleza en las Constituciones de los países

Hay algunas Constituciones en los países latinoamericanos que orientan a la protección, al menos desde el marco jurídico, de la biósfera. Se otorgan derechos a la Naturaleza en la Constitución de Ecuador y existen varios artículos en la Constitución de Bolivia que resaltan la importancia de la protección a la biósfera. Impulsar reformas constitucionales en los demás países de la región latinoamericana para posicionar a la Naturaleza como sujeto de derecho favorecerá la defensa del territorio y de los elementos naturales. Asimismo, volverá más difícil la posibilidad de que las empresas multinacionales extractivas puedan continuar con sus operaciones sin ninguna clase de repercusión.

Facilitar procesos de consulta y coordinación con las comunidades y OSC

Para cualquier proyecto propuesto por el Estado, se deberá tener en cuenta la voluntad de las comunidades y la integridad del territorio en el que residen y del cual dependen. Por ello, colaborar con OSC y otras organizaciones de base que puedan ayudar a los agentes del Estado a mapear las necesidades e intereses de las comunidades es necesario si se quiere contar con el apoyo de las mismas. Algunos mecanismos que pueden facilitar esto son consultas populares o ciudadanas, co-creación de proyectos comunitarios en conjunto con las OSC de la zona y recopilación de propuestas sobre protección al ambiente con base en conocimientos indígenas y afines a la filosofía del Buen Vivir.



Conclusiones



Este eje, Ecología y Resistencia, ha abordado el panorama actual de América Latina en temas socio-ecológicos y cómo este panorama se ha visto afectado por la pandemia de COVID-19.

Primero se presentó un diagnóstico sobre la situación latinoamericana en torno a las relaciones entre las comunidades humanas, el territorio y los medios naturales de subsistencia. Se mostró inicialmente que estas relaciones están afectadas por factores de la estructura político-económica internacional que se manifiestan internamente por las actividades del entramado Estado-empresas, el cual impulsa dinámicas extractivas que derivan en la destrucción del entorno natural y desarticulación de y agresión hacia las comunidades. Para hacer frente a estas dinámicas extractivas surgen los conflictos socioambientales y formas de resistencia y organización desde las comunidades, las cuales buscan detener estas dinámicas y restaurar relaciones armónicas entre las comunidades y los medios naturales de subsistencia.

La última sección del diagnóstico presentó la manera en que la pandemia de COVID-19 había afectado a la región latinoamericana en su relación con la biósfera, ilustrado con el aumento de la deforestación (vinculado a la reducción de esfuerzos por la protección de los bosques naturales), las dificultades de acceso a agua y la contaminación del aire.

Los casos, geográficamente diversos, mostraron patrones en común en torno a la cosmovisión sobre las relaciones humanas con su entorno natural. Las tres organizaciones de los casos, Fepikecha,

Cooperación Comunitaria, y Modatima Petorca, coincidieron en que existimos en interdependencia con el entorno natural y que la separación entre los seres humanxs y el resto del entorno es una ilusión que favorece a quienes buscan mercantilizar los medios naturales de subsistencia. Las organizaciones vieron su integridad y sus operaciones amenazadas por la pandemia de COVID-19 debido a la profundización de algunas dinámicas previas (tala ilegal, precariedad económica de comunidades, difícil acceso al agua) y a la aparición de nuevas restricciones y amenazas (transmisión comunitaria del virus, bloqueo de caminos hacia comunidades, vigilancia indeseada de sus actividades).

No obstante, por medio de su aparición en foros internacionales, acciones legales, organización comunitaria, diseño de nuevos proyectos y entrada al ámbito público-institucional, las tres organizaciones han encontrado maneras de sobrellevar los retos de la pandemia.

Este eje concluyó con algunas recomendaciones de nivel paradigmático y pautas de acción para la sociedad civil organizada, el sector privado y el sector público. Las recomendaciones de nivel paradigmático se centraron en cambiar el pensamiento lineal y fragmentario por un pensamiento sistémico complejo, concebir a los seres como relacionales y no como unitarios, y cultivar el pensamiento de futuros y de anticipación. Las recomendaciones prácticas surgieron a partir de lo obtenido desde el diagnóstico y desde los aprendizajes de los casos. Para la sociedad civil organizada incluyeron formar alianzas, desarrollar capacidad operativa, diseñar y gestionar proyectos de sostenibilidad fuerte, establecer y gestionar foros de encuentro y

discusión, y resistir colectivamente las acciones de desposesión y destrucción ambiental. Para el sector privado, las recomendaciones fueron mapear los flujos de energía y materia al interior de la empresa, desarrollar y promover el uso de tecnologías socio-ecológicas, y diseñar modelos de negocios sostenibles. Finalmente, para el sector público, las recomendaciones fueron establecer indicadores de progreso alineados al post-crecimiento, reducir las horas de trabajo, formular políticas que lleven a asegurar un ingreso básico universal (IBU), formular políticas que promuevan el uso de fuentes renovables de energía y la autosuficiencia energética, asegurar la protección a los activistas y defensores de justicia ambiental, participar en cumbres internacionales y negociar acuerdos vinculantes en tema ambiental, establecer derechos de la Naturaleza en las Constituciones de los países, y facilitar procesos de consulta y coordinación con las comunidades y OSC.



¿Qué lecciones se deben obtener de este eje?

Primeramente, el hecho de que la estructura político-económica mundial y sus manifestaciones al interior de los países son responsables de las múltiples crisis socio-ecológicas a las cuales nos enfrentamos. Trabajar desde el interior de esta estructura para modificarla y además organizarse colectivamente para oponerse a ella será necesario para evitar problemas socio-ecológicos cada vez más graves en el presente ciclo, entre ellos la amenaza de una catástrofe climática, devastación general para comunidades y la casi certera aparición

de nuevas pandemias con mayor frecuencia. Una segunda lección es la necesidad de desarrollar en muchos sectores de la población cosmovisiones y estilos de pensamiento que ayuden a comprender la interdependencia de los seres humanos con la biósfera, y que orienten hacia prácticas que procuren simultáneamente el bienestar humano y el bienestar del resto del entorno natural. Como se obtiene del conocimiento de grupos indígenas, el ser humano es parte de la naturaleza, somos parte de la biósfera y nos conviene tratar con respeto y cuidado a todos sus elementos. Una última lección se enfoca en la necesidad de actuar de manera contundente ante las necesidades socio-ecológicas del siglo XXI. Independientemente del sector social, se pueden desarrollar estrategias que permitan enfrentar estos retos.

Trabajar en coordinación con otros sectores y formar alianzas será una condición necesaria para transitar hacia relaciones socio-ecológicas armónicas y sostenibles.



Referencias



ACNUDH. (2020). No se podrá parar el COVID-19 sin proporcionar agua a las personas en situación de vulnerabilidad - Expertos ONU. Naciones Unidas Derechos Humanos: Oficina Del Alto Comisionado.

<https://acnudh.org/no-se-podra-parar-el-covid-19-sin-proporcionar-agua-a-las-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad-expertos-onu/>

Acosta, A. (2012). Extractivismo y Neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición. In Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo (Ed.), *Más allá del desarrollo* (pp. 83–118). Fundación Rosa Luxemburg / Abya Yala.

Ahvenharju, S., Minkkinen, M., & Lalot, F. (2018). The five dimensions of Futures Consciousness. *Futures*, 104(May 2017), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2018.06.010>

Alexander, S. (2012). Planned economic contraction: the emerging case for degrowth. *Environmental Politics*, 21(3), 349–368.

Aliaga, J. (2020). Falta de acceso al agua aumenta el peligro en Bolivia ante el coronavirus. *France 24*. <https://www.france24.com/es/20200515-bolivia-falta-acceso-agua-pobreza-peligro-coronavirus>

Alonso, J. (2021). Deforestación que no cesa ni en pandemia: creció un 12 % en 2020. *DW*. <https://www.dw.com/es/deforestación-que-no-cesa-ni-en-pandemia-creció-un-12-en->

2020/a-57189830

Andrews, A. (2014). Downward Accountability in Unequal Alliances: Explaining NGO Responses to Zapatista Demands. *World Development*, 54, 99–113. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.07.009>

Barton, J. R. (2006). Eco-dependency in Latin America. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 27(2), 134–149. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9493.2006.00249.x>

BBC Future. (2020). The place where nature isn't healing. BBC.

Bernauer, T., & Betzold, C. (2012). Civil Society in Global Environmental Governance. *Journal of Environment and Development*, 21(1), 62–66. <https://doi.org/10.1177/1070496511435551>

Bolaño-Ortiz, T. R., Camargo-Caicedo, Y., Enrique Puliafito, S., Florencia Ruggeri, M., Bolaño-Díaz, S., Pascual-flores, R., Saturno, J., Ibarra-espinosa, S., Mayol-bracero, O. L., Torres-delgado, E., & Cereceda-balic, F. (2020). Spread of SARS-CoV-2 through Latin America and the Caribbean region : A look from its economic conditions , climate and air pollution indicators ' s R . Bola n. *Environmental Research*, 191(June). <https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109938>

Bonnedahl, K. J., & Heikkurinen, P. (2019). *Strongly Sustainable Societies: Organising Human Activities on a Hot and Full Earth*. Routledge.

Braidotti, R. (2013). *The Posthuman*. Polity Press.

Burchardt, H. J., & Dietz, K. (2014). (Neo-)extractivism - a new challenge for development theory from Latin

America. *Third World Quarterly*, 35(3), 468–486. <https://doi.org/10.1080/01436597.2014.893488>

Castellani, B. (2018). *The Defiance of Global Commitment: A Complex Social Psychology*. Routledge.

CEJIL. (2020). Chile: CEJIL y MODATIMA solicitan Medidas Cautelares a favor de comunidades rurales en escasez hídrica en el marco del COVID19. CEJIL. <https://cejil.org/comunicado-de-prensa/chile-cejil-y-modatima-solicitan-medidas-cautelares-a-favor-de-comunidades-rurales-en-escasez-hidrica-en-el-marco-del-covid19/>

Claeys, P., & Pugley, D. D. (2017). Peasant and indigenous transnational social movements engaging with climate justice. *Canadian Journal of Development Studies / Revue Canadienne d'études Du Développement*, 38(3), 325–340. <https://doi.org/10.1080/02255189.2016.1235018>

de Castro, F., Hogenboom, B., & Baud, M. (2016). Introduction: Environment and Society in Contemporary Latin America. In F. de Castro, B. Hogenboom, & M. Baud (Eds.), *Environmental Governance in Latin America* (pp. 1–25). Palgrave Macmillan.

Dos Santos, T. (2020). Capitalism, underdevelopment and dependency. *Trimestre Economico*, 88(349), 249–274. <https://doi.org/10.20430/ETE.V88I349.1209>

Fluence News Team. (2020). Brasil Enfrenta Una Crisis por el Agua en la Medida en que se Propaga el COVID-19. Fluence. <https://www.fluencecorp.com/es/brasil-enfrenta-crisis-del-agua-mientras-covid-19-se-propaga/>

Forsyth, T. (1999). Environmental activism and the construction of risk: Implications for NGO alliances. *Journal of International Development*, 11(5), 687–700. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1328\(199907/08\)11:5<687::AID-JID600>3.0.CO;2-2](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1328(199907/08)11:5<687::AID-JID600>3.0.CO;2-2)

Franco, I. D., Ortiz, C., Samper, J., & Millan, G. (2020). Mapping repertoires of collective action facing the COVID-19 pandemic in informal settlements in Latin American cities. *Environment and Urbanization*, 32(2), 523–546. <https://doi.org/10.1177/0956247820944823>

García, D., & Hiernaux, L. (2020). Conflictos socioambientales del agua y COVID-19 (No. 07; Análisis).

Heinrich Böll Stiftung Oficina del Cono Sur. (2020). Especial COVID-19. Heinrich Böll Stiftung Santiago de Chile. <https://cl.boell.org/es/dossier-coronavirus>

Jalali, R. (2013). Financing Empowerment? How Foreign Aid to Southern Ngos and Social Movements Undermines Grass-Roots Mobilization. *Sociology Compass*, 7(1), 55–73. <https://doi.org/10.1111/soc4.12007>

Lacy, P., Long, J., & Spindler, W. (2020). *The Circular Economy Handbook*. Palgrave Macmillan.

Lawhon, M., & Mccreary, T. (2020). Beyond Jobs vs Environment: On the Potential of Universal Basic Income to Reconfigure Environmental Politics. *Antipode*, 52(2), 452–474. <https://doi.org/10.1111/anti.12604>

López-Feldman, A., Chávez, C., Vélez, M. A., Bejarano, H., Chimeli, A. B., Féres, J., Robalino, J., Salcedo, R., & Viteri,

C. (2020). Covid-19: Impactos en el medio ambiente y en el cumplimiento de los ODS en América Latina. *Revista Desarrollo y Sociedad*, 86(3), 104–132. <https://doi.org/10.13043/DYS.86.4>

Menton, M., Milanez, F., Machado, J., Souza, D. A., Sotto, F., & Cruz, M. (2021). The COVID-19 pandemic intensified resource conflicts and indigenous resistance in Brazil. *World Development*, 138, 105222. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105222>

Miller, R., Poli, R., & Rossel, P. (2014). *The Discipline of Anticipation*. <http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2018/11/MILLER-Riel-POLI-Roberto-ROSSEL-Pierre.-Capítulo-2.-The-Discipline-of-Anticipation.pdf>

Ortega Cerdá, M. (2011). Origen y evolución del movimiento de justicia ambiental. *Ecología Política*, 41, 17–24.

Paehlke, R., & Torgerson, D. (1990). *Managing Leviathan: Environmental Politics and the Administrative State*. Broadview Press.

Pérez-Rincón, M. A. (2014). Conflictos ambientales en Colombia: actores generadores y mecanismos de resistencia. *Ecología Política*, 48, 76–82.

Popović, S., & Miller, M. (2015). *Blueprint for Revolution: How to use Rise Pudding, Lego Men, and other Nonviolent Techniques to Galvanize Communities, Overthrow Dictators, or Simply Change the World*. Spiel & Grau.

Redacción Aristegui Noticias. (2020). Brechas en el acceso al agua obstaculizan combate a Covid-19. *Aristegui Noticias*. <https://aristeguinoticias.com/2904/mexico/brechas-en-el-acceso-al-agua-obstaculizan-combate-a-covid-19/>

Sadri, H., & Zeybekoglu, S. (2018). Deurbanization and the right to the deurbanized city. *ANDULI, Revista Andaluza de Ciencias Sociales*, 17, 205–219.

Sebastián Aguilar, E. (2019). Mujeres me'phaa, resistencia y sentido del lugar ante los despojos del extractivismo y el narcotráfico. *Íconos - Revista de Ciencias Sociales*, 64, 69–88. <https://doi.org/10.17141/iconos.64.2019.3643>

Stål, H. I. (2019). Business models based on strongly sustainable entrepreneurship. In K. J. Bonnedahl & P. Heikkurinen (Eds.), *Strongly Sustainable Societies: Organising Human Activities on a Hot and Full Earth* (pp. 153–171). Routledge.

Stål, H. I., & Bonnedahl, K. (2016). Conceptualizing strong sustainable entrepreneurship. *Small Enterprise Research*, 23(1), 73–84. <https://doi.org/10.1080/13215906.2016.1188718>

Svampa, M. (2008). La disputa por el desarrollo: territorio, movimientos de carácter socio-ambiental y discursos dominantes. In *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político* (pp. 1–31). Siglo XXI Editores.

Swilling, M. (2019). *The Age of Sustainability: Just Transitions in a Complex World*. Routledge.

UNEP. (2016). *GEO-6 Regional Summary for Latin America and the Caribbean*. <http://content.yudu.com/web/2y3n2/0A2y3n3/GEO6-LAC/html/index.html?page=2&origin=reader>

Vallejo, I., Zamora, G., & Sacher, W. (2019). Presentación del dossier. Despojo(s), segregación social del espacio y territorios de resistencia en

América Latina. *Íconos - Revista de Ciencias Sociales*, 64, 11–32. <https://doi.org/10.17141/iconos.64.2019.3695>

van Teijlingen, K., & Dupuits, E. (2021). Presentación del dossier Estrategias comunitarias frente a conflictos socioambientales: más allá de la resistencia. *Íconos - Revista de Ciencias Sociales* No.69, 25(69), 7–16. <https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/4727>

Vetter, A. (2018). The Matrix of Convivial Technology – Assessing technologies for degrowth. *Journal of Cleaner Production*, 197, 1778–1786. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.02.195>

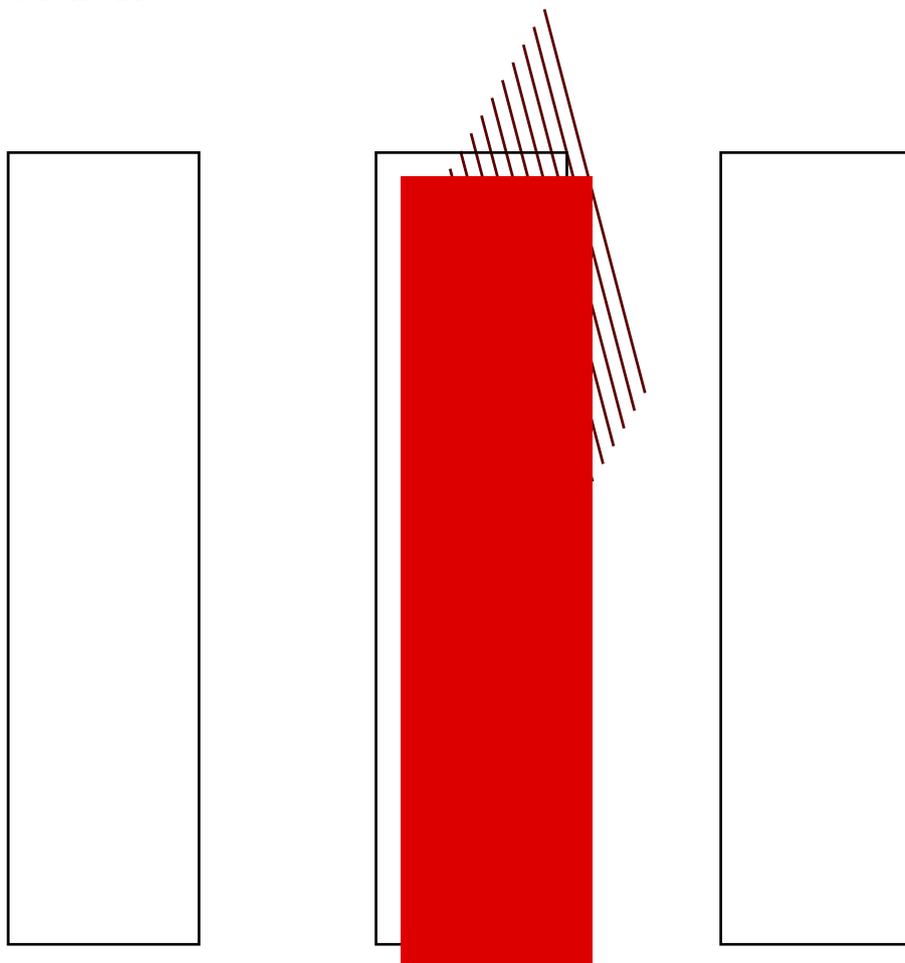






Resistencia Popular y Solidaria

El Otro Capital
Ana A. Ferrer
Cristián Cataldo
Alex Santander



Introducción



El presente informe se realizó teniendo como objetivo analizar cómo los territorios se organizaron frente a las crisis económicas que genera el modelo económico neoliberal, en particular durante el contexto de la pandemia mundial de COVID-19.

La reestructuración de la vida cotidiana, laboral, social, económica y de las organizaciones sociales, ha generado, por un lado, el agravamiento de las condiciones de desigualdad y pobreza, y por otro, la búsqueda de nuevas formas de enfrentar estas condiciones ajustándose a los requerimientos que la pandemia generó.

En la primera parte del informe se presenta una breve discusión que da cuenta de las diferentes formas que existen de comprender la economía y cómo estas se instalan en una relación de asimetría.

Por un lado, el modelo hegemónico que intensifica las relaciones de desigualdad, pobreza y basado en lógicas extractivas, y por otro, las respuestas tanto teóricas como prácticas que surgen para enfrentar ese modelo. Junto con esta exposición, se presentan algunos datos macroeconómicos de la región que dan cuenta de cómo se han visto afectados los indicadores económicos de estos territorios durante el contexto de pandemia. Si bien este tipo de datos macroeconómicos puede ser cuestionado por cuanto suelen representar a una sección de la economía dominante, es interesante considerarlos porque cuando estos indicadores se contraen suelen representar mayor nivel de afectación en los grupos económicos dependientes o excluidos de este sector.

Para poder conocer cómo las organizaciones de la economía social, popular y solidaria han dado respuesta, e incluso cómo han emergido en este contexto de crisis, se seleccionaron cuatro casos de estudios que sirven para ilustrar las diferentes prácticas de resistencia que se han reforzado y generado como producto de este nuevo contexto mundial.

Los casos pertenecen a los países de México, Colombia, Bolivia y Chile. En el caso de México y Colombia, se seleccionaron dos experiencias que representan la zona urbana de sus capitales, y particularmente en Colombia, se seleccionó un caso asentado en una de las zonas con mayores niveles de pobreza y desigualdad de la ciudad. Para el caso de Bolivia y Chile se seleccionaron dos casos de territorios que se ubican en las zonas internas del país; para el caso de Bolivia un territorio de la zona amazónica, y por tanto de realidad rural, y para el caso de Chile un asentamiento en la zona austral del país.

Esta diversidad de casos en cuanto a ubicación geográfica, es decir, contextos socio-políticos diferentes; asentamiento urbano versus asentamiento rural y; cantidad de tiempo que la organización existe, permite conocer cuáles son las problemáticas que se presentan de forma transversal en todos estos casos más allá de las diferentes realidades propias en las que se asientan.

Una vez expuestos estos casos de estudio, al final del informe se realizan una serie de recomendaciones que es necesario tener en cuenta con el objetivo de que estas otras formas de sustento y desarrollo humano puedan seguir funcionando, aunque no estén alineadas

con los principios de la economía hegemónica. Las recomendaciones fueron realizadas considerando tres niveles distintos de acción; primero, las necesidades que surgen en los mismos territorios a nivel local y de carácter de intervención más inmediato; segundo, orientaciones que pueden realizarse a nivel de Estados y que están más lejos del accionar directo de las organizaciones pero igualmente importantes y; tercero, requerimientos que son transversales a los distintos territorios y que el análisis de la realidad de los casos. De esta forma se demuestra que independiente de las características propias de cada región, es necesario tomar ciertas medidas que fomenten otras prácticas económicas habitualmente no consideradas por basarse en valores que no se sustentan en las lógicas del lucro y maximización de la ganancia.



1. Diagnóstico



1.1

Modelo y visiones económicas alternativas

La crisis económica que se vive en América Latina producto del impacto de la propagación del virus COVID-19 y las medidas tomadas para frenarlo son el resultado de la agravación de la crisis de un modelo de desarrollo que, apoyado en la idea de progreso, crecimiento económico y acumulación, ha sido cuestionado desde diferentes territorios.

Una crítica a esta propuesta de modelo de desarrollo único es la utilización del concepto heterogeneidad económica (Gibson-Graham, 2007) para reconocer que existe una variedad de prácticas económicas diferentes a las que habitualmente se muestran como única forma de hacer economía, pues economía no se reduce solo a trabajo remunerado, producción de mercancías destinadas al mercado y fines de lucro. El concepto de Economía Social y Solidaria (ESS) también plantea que las formas de hacer economía son muchas y variadas. No solo se puede considerar economía a las actividades que se realizan en el marco de una empresa privada o bajo la contratación de servicios públicos por parte del Estado (Guerra, 2014). Las discusiones de la Economía Social y Solidaria incluyen, a modo de síntesis, esta gran diversidad

y heterogeneidad de experiencias que se encuentran en diferentes contextos históricos, políticos y geográficos (Jubeto et al., 2014).

Que el modelo económico está en crisis, sobre todo en lo referido a la extracción constante de los recursos naturales y no renovables de la tierra, es un llamado de atención que no es nuevo pues en 1972 desde el “Club de Roma” ya se replanteó que debía existir un límite al crecimiento económico porque los recursos no son infinitos (Meadows, 1972). Los problemas medioambientales cada vez más recurrentes, sobre todo los asociados al cambio climático lo demuestran cada vez con mayor intensidad.

En la discusión sobre el concepto de economía social solidaria, Guerra (2014) identifica dos grandes corrientes teóricas; por un lado, la latinoamericana y por otro, la europea.

En Latinoamérica, un autor central es Luis Razeto quien en los años 80 estableció de manera específica los fundamentos teóricos del concepto solidaridad. Otro autor es Paul Singer, quien analizó las relaciones entre el Estado brasileño y los movimientos vinculados a la economía solidaria y tenían como objetivo que esto se convirtiera en política pública (Singer, 2009). José Luis Coraggio desarrolla, además, el concepto de economía popular, la cual entiende que la unidad básica de organización no es el emprendimiento o microempresa, sino la unidad doméstica (familia, comunidad) (Coraggio, 2016). Además, implica “el conjunto de recursos, capacidades y actividades, de las instituciones que regulan la apropiación y disposición de esos recursos en la realización de actividades de producción, distribución, circulación, financiamiento y consumo realizadas por los trabajadores,

sus unidades domésticas (familiares y comunales), y las organizaciones específicas que se dan por extensión para lograr tales fines (emprendimientos unipersonales y familiares, redes de ayuda mutua, juntas con fines de gestión económica, cooperativas, asociaciones diversas), organizando los procesos naturales y las capacidades humanas con el objetivo de reproducir su vida y fuerza de trabajo en las mejores condiciones posibles” (Coraggio et al., 2010, pág.11).

Además, algunos autores como Acosta (2010), Eduardo Gudynas (2010) y Max-Neef & Elizalde (1993) desde distintos territorios plantean no sólo críticas sino también propuestas que sugieren la transformación del modelo de desarrollo. El Buen Vivir se considera como propuesta que surge desde los valores, experiencias, memorias y prácticas de los pueblos originarios latinoamericanos. Es decir, no se puede concebir un único modelo de desarrollo estandarizado para todos los territorios pues es desde lo local que se construyen las formas de vida propias acorde a los territorios, y por este motivo se habla de buenos convivires en plural y no como concepto único y universal (Acosta, 2010).



Es importante destacar que el Buen Vivir no es un concepto que se construye a nivel teórico, sino que se utiliza para reconocer una variedad de formas de vida que desde la visión europea se consideraron como salvajes y no civilizadas (Quijano, 2000). El modelo de desarrollo imperante supone que aquellos territorios que no siguen esta propuesta son inferiores y se niegan al desarrollo y progreso, no solo económico

sino también social y cultural. Por tanto, la crítica al modelo de desarrollo es también una crítica a esa división creada entre los denominados países desarrollados versus países subdesarrollados (Castro-Gómez & Grosfoguel, 2007).

En la tradición europea, el concepto de economía solidaria ha estado influenciado por el de economía social y la historia del cooperativismo europeo. Guerra (2014) distingue en esta corriente dos abordajes; uno teórico desarrollado por académicos como Jean Louis Laville, y otro práctico desarrollado por las ONG's y el Tercer Sector. Además, una crítica al modelo de desarrollo que surge desde el continente europeo es la que, siguiendo las propuestas de los límites al crecimiento, plantea que una de las soluciones a las crisis que genera el modelo es dejar de crecer económicamente. La Teoría del Decrecimiento (Latouche, 2006) plantea como solución la disminución del consumo y producción para dar más énfasis a otros espacios de la vida. Lo interesante de esta crítica, junto con las otras mencionadas, es que las propuestas que reivindican otras formas de economía se pueden observar desde espacios tan diferentes como los continentes europeos y latinoamericano.

Son tres los elementos centrales a destacar en estas distintas críticas al modelo de desarrollo realizadas desde diferentes territorios.

Una es que el crecimiento económico que se ha dado en los llamados países desarrollados ha ido de la mano del aumento de la desigualdad social y creación de bolsas de pobreza en estos territorios, por tanto, este ha sido más bien el maldesarrollo del desarrollo (Tortosa, 2011). Otro elemento importante es el reconocimiento de los límites que tiene el planeta frente a este modelo de economía industrial, extractiva y de acumulación, pues

si todos los países del planeta quisieran seguir este modelo, harían falta varios planetas para solventarlo. Por último, la crítica a este modelo de desarrollo implica asumir que las necesidades humanas no van siempre vinculadas al aumento progresivo de la capacidad de consumo de bienes y servicios. Pues las necesidades no son infinitas como se pretende asumir, sino que, por el contrario, las necesidades en la historia de la humanidad han sido y son finitas y clasificables según los satisfactores que para cada una de ellas exista (Max-Neef & Elizalde, 1993).



Diagnóstico

1.2

La Economía Social y Popular en pandemia

Estamos en una de las crisis globales más grandes de la historia reciente, representadas en las problemáticas estructurales de clase, género, raza, medio ambiente y lucha decolonial. A esto se suma la crisis de salud por el coronavirus, que agrava las crisis anteriores propias del sistema capitalista. Las repercusiones sobre la economía cotidiana y del hogar han sido devastadoras. La rápida propagación de la enfermedad por COVID y las drásticas medidas de respuesta adoptadas por los gobiernos han golpeado fuertemente a la economía mundial, que en 2020 experimentó su mayor contracción desde la década de 1930 con la Gran Depresión.

Todo ello ha generado graves consecuencias reflejadas en los niveles económicos y sociales en los países, tales como: la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en prácticamente todas las economías del mundo; la afectación en los niveles de comercio; la pérdida de millones de empleos; los aumentos en los niveles de pobreza y desigualdad en diversos ámbitos; y nuevas demandas sociales urgentes de atender.

De acuerdo con el Banco Mundial (2020), en materia de crecimiento económico la pandemia significó una contracción mundial en el año 2020 de un 4,3%. Esta disminución fue ligeramente menos

grave de lo que en un principio se había proyectado, debido principalmente a que la contracción de las economías avanzadas fue menos pronunciada de lo previsto y que la recuperación en China fue más rápida de lo anticipado. Destacan las caídas de importantes economías, tales como la de Estados Unidos (-3,6%), la Zona Euro (-7,4%), Japón (-5,3%), y China (+2%), siendo este último uno de los pocos países que experimentó una cifra positiva en medio de la enfermedad.

De acuerdo con la CEPAL (2021), el PIB de América Latina y el Caribe disminuyó un 7,7% en 2020, la mayor contracción desde que se iniciaron los registros en 1900. El PIB retrocedió prácticamente en todos los países, y a nivel de agregados se observó una contracción promedio para América del Sur de 7,3%, para Centroamérica y México de 8,5%, y para el Caribe de 7,9% (10,8% si se excluye Guyana).

La crisis ha tenido graves consecuencias económicas y sociales en la región, reflejadas en el aumento de la desigualdad y de las cifras de pobreza a un 37,3% de la población, y entre estas personas, el aumento de la pobreza extrema a un 15,5% de la población, agregando el cierre temporal de miles de colegios que afectó a más 160 millones de estudiantes (López-Calva & Meléndez, 2020).

Estas crisis prolongadas de reproducción de la vida y las problemáticas que producen son respondidas por parte de la población afectada y en muchos casos excluida, con la adopción de nuevas prácticas de luchas y organización social, que se pueden considerar como parte de los principios de la economía social, solidaria y popular.



1.3

Políticas públicas en Latinoamérica

El contexto latinoamericano de la primera década del siglo XXI posibilitó la emergencia de diversas iniciativas vinculadas a la economía social y solidaria en la agenda de la región. De manera general, tales iniciativas se presentan como respuestas a las crisis provocadas por el modelo neoliberal impuesto a las poblaciones de estos países a finales del siglo anterior. En ese sentido, la perspectiva de la ESS se presentó en los nuevos temas de las agendas de integración regional, expresando fuerte confluencia y relación con los gobiernos progresistas que implementaron políticas públicas orientadas hacia la reducción de las desigualdades económicas y la inclusión social.

El problema del desarrollo en la región asume nuevas dimensiones y fueron planteadas alternativas a la mirada exclusivamente económica, predominante hasta ese entonces. La perspectiva de la ESS fue incorporada en la agenda para el establecimiento de estrategias e instituciones de nivel regional con enfoque en la dimensión social del desarrollo, representando un importante avance en los esfuerzos de promocionar alternativas al mejoramiento de las sociedades de estos países.

Paralelamente, las agendas de desarrollo propuestas por organismos internacionales reforzaron las iniciativas plasmadas en la región y brindaron metas e indicadores a las políticas públicas implementadas. Actualmente, la estrategia multilateral planteada por la ONU establece la Agenda 2030, donde las iniciativas de ESS pueden servir como herramientas relevantes para lograr el cumplimiento de tales objetivos; además, la integración regional emerge como importante estrategia en dicha coyuntura

En este sentido, se releva la importancia de desarrollar los instrumentos y herramientas generadas para el fortalecimiento de los emprendimientos socioeconómicos de la ESS, como así también los que se han desarrollado como parte de dispositivos institucionales desde organismos del Estado (sea a nivel regional, nacional o local) que intentan capitalizar el potencial de las actividades económicas de las organizaciones productivas de la ESS.

Se requiere una política productiva que trabaje en términos sectoriales estrategias productivas de la economía popular. Las diferentes estrategias implementadas en América latina intentan apuntalar emprendimientos asociativos, pero de manera aislada, desterritorializada y sin estrategias de desarrollo local, por lo que tienen pocas posibilidades de garantizar su sostenibilidad económica en el mediano plazo. Los esfuerzos deben incrementar las capacidades de los emprendimientos productivos de la Economía Popular, proporcionando recursos que puedan facilitar y desarrollar conocimientos apropiados para desarrollar sus competencias y promover el desarrollo integral tanto de sus integrantes como de las unidades productivas comunitarias.

Una buena política pública entiende e

incorpora las diferencias y complejidades, segmentando los emprendimientos que estén en etapa inicial, los que están emprendiendo y aquellas actividades económicas que tienen necesidad de fortalecer sus aspectos productivos y diversificación de productos a largo plazo. En una segunda segmentación se puede identificar además aquellas actividades con características propias de la economía popular (Aguirre & Saavedra, 2018). Esto permite trabajar aspectos transversales comunes al fortalecimiento productivo de las diferentes unidades productivas en un territorio específico, como así también permite detectar necesidades de asistencia técnica específica de los emprendimientos de la economía popular en estadios más consolidados en las diferentes etapas de la cadena de valor que se abordan.



Otros desafíos de las políticas públicas para el sector de la economía popular son las estrategias asociativas a fortalecer que pueden darse en cualquiera de los eslabones de la cadena de valor (compra de insumos conjunta, producción, comercialización, logística colectiva, organización de organizadores de consumo, registración, facturación, identidad común, seguros, caución, etc.). Los dispositivos de la política productiva para el sector requieren contemplar desde una mirada estratégica los instrumentos: económicos, financieros, legales, institucionales y normativos.

Diagnóstico

1.4

Casos de estudio seleccionados

Para dar respuesta al objetivo de este reporte que es analizar cómo desde los territorios se enfrentan las crisis del modelo económico neoliberal en contexto de pandemia, se presentan una serie de casos de estudio a partir de los cuales se pretende generar las respuesta y recomendaciones.

Como primer caso de estudio se analiza La Cooperativa Agrícola Integral “El Campesino” (CAIC) cuyo centro de trabajo se ubica en Riberalta, en el norte amazónico de Bolivia. Se dedica a la producción y comercialización de castañas y se caracteriza por sus miembrxs mayoritariamente indígenas y de tradición agrícola y popular.

El segundo caso seleccionado es el de la Cooperativa Despensa Solidaria en la Ciudad de México. Esta es una red de distribución de productos locales agroecológicos y solidarios que trabaja bajo los principios de la economía solidaria y la agroecología como estrategia para lograr la soberanía alimentaria.

El tercer caso de estudio seleccionado es la Fundación Oasis de la ciudad de Bogotá, que es una entidad sin ánimo de lucro consolidada a través del esfuerzo y los sueños de jóvenes de Ciudad Bolívar para

el apoyo de las poblaciones vulnerables, en particular en lo que a cuidado y alimentación se refiere.

Por último, está el caso de la Cooperativa de Unión Social de Coyhaique, en la zona austral chilena que tiene como objetivo abastecer a las familias coyhaiquinas de comida buena y sana a precio justo, en medio de la crisis económica y sanitaria.

Este caso particular surge en el contexto de pandemia y como contrapunto al caso mexicano y colombiano, presenta la realidad de un territorio geográfico alejado. Está formada por más de 230 personas y funciona a nivel comunal.



2. Análisis (Entrevistas)



2.1

Cooperativa Agrícola Integral “El Campesino” CAIC

A pesar de los indicadores de crecimiento y desarrollo social, Bolivia tiene todavía una estructura sumamente piramidal y desigual, ya que en la base se mantiene el 83% de los trabajadores que desde la economía popular aportan el 25% del producto nacional, mientras que en la cima un 7% de los bolivianos produce el 60% del ingreso. Así, Bolivia sigue siendo el país más pobre de Sudamérica, dado que la pobreza alcanza el 64% y la indigencia el 35%, pero en las zonas rurales los indicadores se encuentran aún peores, en el 80% y 50%, respectivamente.

La ESS boliviana se constituye mediante diversos sectores desarticulados entre sí: las organizaciones económicas campesinas, las organizaciones comunitarias originarias, las cooperativas tradicionales y mineras, y las organizaciones de microcrédito. Las organizaciones económicas campesinas (OECAs) se agrupan en la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia (CIOEC), una unión de 778 organizaciones campesinas, indígenas y originarias – con 70 asociaciones de asociaciones que integran a más de 100 mil familias – fundada en 1990 con el fin de contribuir, mediante el impulso de la economía

solidaria, a la soberanía alimentaria, la autogestión campesina y la agricultura familiar sostenible.

El contexto del desarrollo económico del norte boliviano se caracteriza principalmente por la exportación de dos materias primas renovables sometidas a procesos incipientes de transformación: la castaña beneficiada y la madera aserrada.

En este sentido, Riberalta está fuertemente vinculada con el departamento vecino de Pando, para las áreas de extracción de los recursos naturales.

La Cooperativa Agrícola Integral Campesino (CAIC) se fundó en 1980 y surgió en el periodo del auge de la explotación de la goma y la castaña en el norte amazónico de Bolivia. Es un movimiento que, desde el momento mismo de su constitución se enfrenta al poder monopólico de lxs empresarixs -lxs barraquerxs- que eran quienes imponían los precios y las condiciones de la compra de la castaña y la goma. Desde un inicio la cooperativa adoptó un enfoque integral de producción agropecuaria y forestal, la comercialización de productos de primera necesidad con el objetivo de romper la hegemonía que ostentaba la élite regional en las actividades económicas.

La CAIC es una organización campesina que orienta sus actividades principalmente hacia la recolección, procesamiento, acondicionamiento y la comercialización de la castaña ecológica. El centro de acopio, procesamiento, selección y acondicionado de la producción se encuentra en la comuna de Riberalta, Bolivia. La recolección de la castaña implica un complejo proceso organizativo y de movilización de esfuerzos que involucra la participación de lxs recolectorxs, sus familias, contratistas, transportistas, proveedores de víveres y recursos financieros que garanticen el

acopio y producción.

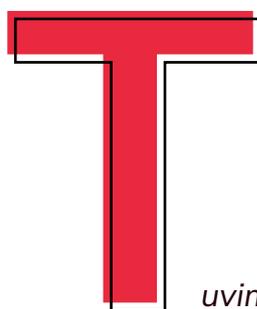
Actualmente CAIC consta formalmente con 131 miembros. Sin embargo, muchos de sus trabajadorxs participan activamente con los mismos derechos y deberes, pero no desde la formalidad de la membresía, muchos de ellos son las propias parejas y familiares de lxs campesinxs miembros. Las cifras formales no se condicen con el importante rol que juegan las familias en el desarrollo de la cooperativa, para el 2016 el 13% de lxs socixs eran mujeres y en 2019 subió al 20% aproximadamente.



Antes de la pandemia, la producción agropecuaria de CAIC tenía como actividad principal la recolección de la nuez del Amazonas (*bertholletia excelsa*), llegando a vender más de un millón de kilogramos de almendras procesadas. Los mecanismos de pago a sus miembros son en dinero, pero también en producción, entregando al principio los productos a los miembros como crédito para permitirles pagar su deuda con castaña. Es decir, que parte de lo que producen lxs mismos campesinxs se utilizan para resolver su necesidad de abastecimiento y alimentación, pero también entregando una cuota de producción para que las vendan posteriormente en ferias y comercio local, de tal manera que parte del pago en producto es convertido en dinero por el trabajo familiar. De hecho, los principales mercados de la cooperativa son el comercio solidario (abastecimiento y venta en ferias) que cubre el 50% del volumen total de sus ventas, el comercio ecológico alcanza el 40% y el mercado convencional cubre sólo el 10%.

La pandemia llegó a Bolivia en un contexto de conflicto y agitación social, en donde había una fuerte movilización en las calles demandando elecciones libres y democráticas para terminar con el gobierno de facto y así instaurar un gobierno democrático social y popular, del que se tienen expectativas de que pueda hacer frente a las crisis sanitaria, social y económica de la pandemia, para actuar en beneficio de lxs más vulnerables y de la economía comunitaria indígena y campesina.

Cuando ocurrió la crisis del COVID-19, en Riberalta no se tenían los resguardos necesarios ni tampoco un trabajo mayor de prevención e información hacia la población. Frente a esto, hubo una respuesta comunitaria, de la que la cooperativa también formó parte realizando acciones importantes para resistir a la pandemia junto a otras organizaciones. En general, estas iniciativas se relacionaban con la generación de datos sobre los contagios y lxs fallecidxs en sus comunidades; la puesta en marcha de campañas de concienciación sobre la prevención del virus; la adopción de medidas contención y mitigación como los cercos sanitarios (prohibición de acceder territorios específicos) con la vigilancia y supervisión comunitaria, la creación de protocolos de circulación y distancia social; la utilización y el fomento de la seguridad de la producción alimentaria.



uvimos que ayudar junto a la comunidad utilizando nuestra organización y conocimiento ancestral. El camino de la organización desde abajo no es fácil. Durante este proceso tuvimos integrantes de nuestra cooperativa que han caído en la enfermedad generada por este virus y también han sufrido la pérdida de seres queridos. Sin embargo, nada de esto nos ha detenido y hemos continuado atendiendo a todas las personas que han requerido nuestro apoyo, porque tenemos claro que la solidaridad nos mueve, bajo nuestro lema 'El pueblo ayuda al pueblo'.

Asegurar el acceso a la información sobre la pandemia fue una preocupación central para las organizaciones de la comunidad rural de Riberalta, fuertemente marcada por la predominancia indígena. Ante la ausencia de medidas estatales, miembros de la cooperativa junto a más de 400 mujeres pertenecientes al Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara (CDIMA), establecieron campañas de información de lavado de manos, mascarillas y distancia social orientadas a la población en general, con énfasis en los cuidados a las de mayor riesgo.

En el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, como una de las principales medidas para prevenir la transmisión del virus, muchos de las miembros de la cooperativa que viven en pueblos rurales junto a sus Unidades Barriales decidieron restringir o cerrar las fronteras de sus territorios más próximos. En abril, miembros participaron de la organización de vigilancia popular y se elaboró un protocolo a cargo de un equipo de antropólogos, médicos y líderes de las comunidades indígenas, que se basó principalmente en impedir el ingreso de personas ajenas a la comunidad, controlar la salida hacia lugares de mayor riesgo, aislar a las personas sospechosas de tener la enfermedad y llevar a cabo campañas de comunicación en lenguas originarias.

Las autoridades del gobierno central respondieron de manera tardía y decretaron una cuarentena con fuerte presencia militar en los meses siguientes, lo que significó que cerraran ferias y comercio establecido, cerrando fronteras. La tardía reducción de movilidad también redujo demasiado la actividad económica. Rápidamente la cooperativa comenzó a verse en un escenario de depresión financiera, siendo afectada en una disminución de sus ventas de cerca de un tercio al que se tenía antes

de la pandemia.

Ante la escasez de ingresos monetarios y de alimentos, la CAIC también ha sido capaz de desplegar estrategias de cooperación y reciprocidad. Como primera respuesta, se activaron mecanismos de intercambio de productos con otros pueblos y comunidades. Por un lado, para adquirir distintas verduras y frutas a cambio de excedentes de productos de castaña (y otros como madera y leña), y por otro, se ayudaron con alimentos a las personas que permanecían en las zonas y municipios cercanos. Se generó la práctica de realizar donaciones recíprocas, donde la cooperativa ayudaba de manera preferente a quienes con anterioridad le habían ayudado, indiferente del monto o cuantía de lo entregado. Se estableció un espacio para relaciones de intercambio indirectas de productos y trabajo, donde el precio monetario pasó a segundo plano para priorizar el valor de la confianza y la solidaridad.

Las desigualdades estructurales que afectan a la organización indígena campesina constituyen su principal factor de vulnerabilidad frente a la pandemia, y que repercuten de manera particular en las mujeres, las jóvenes y las niñas.

Esta situación se ve agudizada por la debilidad generalizada de los programas estatales, que apenas tocan desigualdades anteriores. En efecto, existen políticas públicas específicas para hacer frente al COVID-19 entre los pueblos indígenas y campesinos, pero la mayoría de las medidas se establecieron cuando el contagio ya se había expandido significativamente y se observaron retrasos en los plazos para su implementación, así como en coberturas completamente deficientes. Recién a finales del año 2020, el municipio de Riberalta había rehabilitado ferias y mercados

locales, y el gobierno nacional entregó unos escuálidos bonos para rescatar con liquidez a las cooperativas campesinas.

Por su parte, la comunidad campesina indígena ha articulado múltiples respuestas colectivas para afrontar la pandemia y el abandono estatal. Se han desplegado medidas como el cierre de las fronteras territoriales de las comunidades y, muy probablemente, sin ellas el impacto sanitario entre los pueblos indígenas sería incluso mayor. Gracias a la flexibilidad de la cooperativa para afrontar las crisis, se establecieron estrategias de reciprocidad y cooperación intercomunitaria, se han podido paliar en cierta medida los déficits en la cobertura de la ayuda económica brindada por los Gobiernos nacionales y locales.



Análisis (Entrevistas)

2.2

Cooperativa Despensa Solidaria

El contexto de pandemia fue fuertemente marcado en términos organizacionales para la Cooperativa Despensa Solidaria de México, la cual surge el año 2015 como un colectivo, en donde se comenzó a visualizar la necesidad del levantamiento de una cooperativa a raíz de tres grandes ideas; la necesidad de un trabajo digno, la necesidad de construir y generar espacios en donde se pudieran desarrollar como sujetos y comunidad y, finalmente, para hacer una retribución a la sociedad de la cual son parte. Lo anterior, finalmente se consolida como una cooperativa de consumo y servicios en el año 2017.

La principal dificultad organizacional en contexto de pandemia fue la transición de un modelo de distribución de productos a través de mercado a uno de entregas de domicilio, es por ello, que lo primero fue la activación de lxs socixs cooperadorxs, quienes se reintegraron durante la pandemia, siendo alrededor de ocho personas operativamente activas, lo cual significó una mejora en términos logísticos y tecnológicos para el funcionamiento de la cooperativa. Esta primera etapa fue muy difícil debido al desgaste emocional y físico por la sobrecarga laboral que significó esta migración en el servicio. Posterior a aquello se comenzó a integrar con otras organizaciones que prestaban servicios similares, compartiendo experiencias

y tecnologías. Estos encuentros de intercambios de experiencias fueron fundamentales para reformular el modelo, conocer experiencias y externalizar algunos servicios, como lo fue con los bicimensajeros quienes se encargaron de la distribución de los productos.

Paralelamente, se comenzó la colaboración entre organizaciones del mismo sector impulsando el consumo local y agroecológico, lo cual fue un aliciente para seguir adelante.

Finalmente, al término del 2020 hubo un fuerte desgaste físico y emocional, debido a la alta carga laboral y saturación de los espacios de bodegaje por parte de lxs socixs de la cooperativa, esto hizo surgir la necesidad de un espacio externo para poder hacer de centro de acopio. Lo anterior les llevó a activar redes cooperativas, específicamente con la organización cooperativa "Raíces", para comenzar a generar ahorros para cubrir emergencias de salud que afectaron a lxs socixs durante la pandemia. Se espera que este ejercicio de ahorro popular desencadene en una cooperativa de ahorro y crédito para todos los socios de la organización.

Desde los inicios se comenzó a trabajar con gobiernos locales, sin embargo, la falta de integración y la burocracia del sistema impidieron profundizar en ese camino, posterior a aquello, se decide re adecuar el modelo a uno de integración comunitaria a través de una iglesia local en donde se procede a utilizar el espacio como centro de acopio y distribución de alimentos. Este periodo de integración comunitaria tuvo una extensión de dos años, el cual fue gratificante debido a la participación de la comunidad.

La capacidad de resiliencia, el dejar de idealizar el emprendimiento, saber leer

los momentos y entender los ritmos de lxs socixs de la organización es la única forma de que la orgánica se mantenga en el tiempo. Definir niveles de participación y compromiso es fundamental para generar un funcionamiento flexible en el cual lxs socixs se puedan sentir integradxs, en lo cual se comprendió que debía primar el constante cambio y readecuación por parte de lxs socixs trabajadores, en donde se debe priorizar siempre el bien común y el colectivo, tanto a los clientes, así como a los socios trabajadores de la organización.

La valorización de los recursos intelectuales así como otras formas de intercambio económico como el trueque "comenzaron a tomar fuerza una vez que la organización se fue adaptando. Esto liberó a lxs socixs de la carga de generar recursos propiamente monetarios, sino que visualizar la amplitud de servicios y conocimientos para comunicar y poner a disposición del colectivo y el desarrollo organizacional en conjunto a otras organizaciones.

A la vez, se retomó la actualización del acta constitutiva para integrar a nuevxs socixs de la red; paralelamente, se encontró un espacio para el bodegaje de productos con base a lógicas de colaboración con los mismos consumidores de la red dentro de la misma comunidad, generando así una adaptación a la nueva normalidad que las dinámicas de consumo exigen.

Desde los inicios -y hasta ahora- se trabaja principalmente con base en la autogestión, buscando la sostenibilidad económica y organizacional, además se han obtenido recursos estatales de organismos relacionados a la ruralidad, medio ambiente, cultura y de las alcaldías en las cuales se encuentra presente la red. Estas fuentes de financiamiento públicos concursables se han levantado principalmente para aspectos de infraestructura y

equipamiento, pero también se espera que logren reforzar el modelo organizacional cooperativo, relevando más importancia a las mensualidades y anualidades de productores y consumidores. Finalmente, se ha propuesto una apertura a financiamientos internacionales, debido principalmente a la ineficacia de los fondos concursables nacionales.

Durante la pandemia, se comenzaron a activar redes de cooperativas para generar capacitación, además de acercarse a grupos de emprendimiento social, a pesar de las diferencias en las dinámicas de desarrollo del negocio. Todas estas actividades han permitido avanzar en capacitación en mercadotecnia, redes digitales y así realizar la transformación digital de la organización, la cual se había visto pospuesta debido a la falta de competencias en estas áreas por parte del equipo de socios, quienes son principalmente del área social.

Lo anterior se impulsó a raíz de las exigencias que los clientes comenzaron a demandar en términos de acortar los tiempos de entrega, esto significó integrar herramientas tecnológicas como plantillas digitales para realizar los pedidos, generar un reordenamiento logístico de las rutas de entrega, servicio que posteriormente debió ser externalizado, debido a la alta demanda y dificultad que significaba abarcar toda la cadena de distribución.

Las nuevas dinámicas de consumo exigen transformaciones para la cual la organización no estaba preparada, es por ello que con base en la colaboración y cooperación, se visualizaron algunas soluciones conjuntas, como intercambios de conocimientos, capacitaciones con organizaciones afines y el levantamiento de plataformas web compartidas en conjunto con organizaciones hermanas del ámbito de la distribución alimentaria (página web común).

A raíz de las exigencias pandémicas, se adaptó la metodología de trabajo en red, por lo cual se empezó a utilizar el manual metodológico de Tejeredes de Chile. Esto se vio reflejado en el impulso de redes entre cooperativas y otras organizaciones afines del tercer sector. Paralelamente, se comenzó a trabajar con redes alternativas alimentarias de la ciudad de México, impulsadas desde la UNAM, las cuales actúan bajo lineamientos de agroecología, además del sistema participativo de garantía (SPG) en conjunto con la red cooperativa "Raíces", y una red de más de 30 productores quienes son los principales proveedores de la organización.

Los ejercicios de ahorro levantados en conjunto con la red cooperativa "Raíces" es algo que debe permanecer en el tiempo, ya que plantea la creación de una caja de ahorro pensando en la subsistencia de las organizaciones que la conforman, ya que actúan por un objetivo común, y no necesariamente utilitarista como algunos ejercicios de intercambio de experiencias sin mayor profundidad que se dan en la labor cooperativista en muchas instancias de intercambio.

La organización ha integrado el cuidado de su colectivo como su bien fundamental, entendiendo que las condiciones económicas son complejas, por lo cual la flexibilidad es primordial, generando así la apertura a sistemas abiertos de participación. Por otra parte, la integración con otros movimientos cooperativos es vital para la subsistencia, en donde el consumo agroecológico fue el punto de partida, pero mirando hacia el futuro, se visualiza el levantamiento de cooperativas de vivienda, por ejemplo, en los cuales se puedan resolver las necesidades básicas de los asociados a la cooperativa, como lo son salud, educación y otros derechos sociales universales hasta ahora no cubiertos.

Análisis (Entrevistas)

2.3

Fundación OASIS

La crisis económica que se agravó en el contexto de pandemia, considerando que hay personas que viven en crisis económicas constantes por su situación de pobreza y desigualdad, afectó de manera mucho más marcada a las poblaciones que viven en una situación de desigualdad constante. La Fundación OASIS surge en el año 2014 en el barrio “El Paraíso” de Ciudad Bolívar, en la periferia de Bogotá. Este territorio se caracteriza por la presencia de población desplazada a causa del conflicto armado colombiano. Tiene altos niveles de violencia, desigualdad, pobreza y consumo de sustancias psicoactivas. Por ello, la Fundación OASIS surgió para garantizar que las personas tuvieran derechos como la alimentación y el techo garantizados. Sus principales programas son “Comedores para la vida” y “Casa de Valores”. El primero de ellos está orientado a cubrir la alimentación de personas adultas mayores que por su condición personal y familiar, no disponen de los medios necesarios para autoabastecerse. Además, esto permite también la sociabilidad entre adultxs mayores reduciendo su condición de aislamiento. El segundo programa está orientado a la atención de niñxs y jóvenxs de entre 5 y 17 años y en él se trabaja y fortalece el proyecto de vida a través de la educación, de las artes y de la recreación.

Una característica importante del surgimiento de la Fundación OASIS es su origen local y territorialista, pues la Fundación, si bien cuenta con apoyo de otras organizaciones tanto públicas, privadas e incluso, internacionales, recibe el apoyo, la confianza y el reconocimiento de la comunidad en la cual se ubica. Además, la Fundación está articulada con otras organizaciones del barrio y siempre trata de participar en los procesos sociales de las organizaciones y entidades del distrito en el cual se ubican. Este apoyo local fue central durante su reorganización del funcionamiento de los programas con la llegada de la pandemia pues las primeras acciones y respuestas se articulan desde el territorio inmediato.

Si bien la mayor complicación en la historia de la Fundación ha sido el financiamiento, el hecho de que cuenten con voluntarixs en el territorio, que reciban donaciones de personas que reconocen su labor y el esfuerzo que han hecho por establecer convenios con instituciones públicas, privadas e internacionales, ha permitido una consolidación de la Fundación a partir del aporte de las capacidades no siempre consideradas en términos monetarios. Además, el contar con este tipo de apoyo permite fomentar valores de cooperación y solidaridad.

La pandemia afectó no solo a las personas con quien trabaja la Fundación sino a todo el barrio, pues las condiciones laborales ya eran precarias antes de la pandemia; empleo informal e inestable. Estas condiciones se agravaron provocando un aumento de las familias que solicitan ayuda para alimentación. Además, la virtualización de la educación afectó a lxs menores de edad quienes en condiciones pre-pandemia ya disponían de recursos muy escasos, sobre todo en lo que acceso a internet y tecnologías de la información y comunicación se refiere,

aumentando su condición de desigualdad educativa. Pero, sobre todo, la condición de aislamiento y reducción de interacción social es remarcada por la Fundación como elemento negativo por lo que implica la relación social en el trabajo que ellxs desarrollan.



Los programas de la Fundación empezaron a funcionar de forma virtual y a distancias. En el caso de los comedores, las personas adultas mayores pasaban a buscar el alimento y lo llevaban a la casa en distintos horarios. Pero, además, en el caso de algunas personas con dificultades para movilizarse a buscar el alimento, han sido las familias quienes han asumido este rol de ir a buscar el alimento.

Aquí se evidencia la importancia del reconocimiento de la Fundación no solo con la población directa con la cual trabaja, sino con el barrio en general.

En el caso de lxs niñxs y jóvenes, el foco fue la utilización de las redes existentes, para el acceso a tecnologías de la información y comunicación para poder virtualizar el trabajo desarrollado con ellxs. Además, en el caso de retornos presenciales, se redujeron los grupos de trabajo. Por supuesto, este tipo de medidas ha venido acompañada con actividades de concientización de los protocolos de seguridad sanitaria y legales a seguir para la realización de estas actividades presenciales con grupos reducidos.

La virtualización también implicó la pérdida de algunxs voluntarixs que participaban con la Fundación, por ello, es importante para el afrontamiento de la crisis, la existencia de

un grupo de apoyo de base sólido y amplio. Esta reducción de personas que apoyan con su capacidad y tiempo a la Fundación sumado a la reducción de apoyo económico se produjo porque la recesión económica ha afectado a grupos sociales de diferente nivel socioeconómico, aunque las consecuencias en cada uno de ellos sean distintas.

En el desarrollo de las actividades no presenciales, la demanda sigue siendo la interacción con lxs otrxs y por ello, se focaliza mucho la realización de los programas en mantener las condiciones de bioseguridad sobre todo con la población adulta mayor.

Además, otro reto en la virtualización de las actividades es contar con el conocimiento para la utilización de las plataformas electrónicas, por ello, una actividad nueva fue el aprendizaje del uso de las tecnologías de la comunicación e información, no solo para el desarrollo de actividades internas sino también para el desempeño de otras actividades por cómo se está instalando la virtualidad en distintos escenarios.



Análisis (Entrevistas)

2.4

Cooperativa Unidad Social

La llegada de la pandemia a Chile se sumó al contexto de álgida demanda social que emergió con fuerza en octubre de 2019. Este dato es importante porque la rearticulación de movimientos vecinales y a nivel local en el contexto de protesta, facilitó la organización de algunos movimientos de resistencia económica frente a la crisis económica agravada con la pandemia. Tal es el caso de la Cooperativa de Unidad Social que emerge en el 2020 de la Mesa de Unidad Social que reúne a distintos actores sociales tanto a nivel nacional como en sus representaciones a nivel territorial. Esta Mesa de Unidad Social que funcionaba antes del surgimiento de la protesta en octubre de 2019 se fue consolidando durante la revuelta popular y luego, con la llegada de la pandemia. Las primeras consecuencias económicas se vieron en la pérdida de algunos empleos con despidos masivos de trabajadorxs.

Un elemento interesante de la propuesta de la Cooperativa es que, si bien en el país resurgieron con fuerza las denominadas ollas comunes, la idea era generar una respuesta que no se basara en una práctica pasiva de ayuda o caridad, sino que implicase una autoorganización y autogestión de las personas que se sumasen al proyecto. Las actividades iniciales si fueron en la línea de establecer una ayuda social de emergencia pero a las

pocas semanas, se empezaron a establecer mecanismos de funcionamiento basados en el pago de cuotas y de redistribución en función de las necesidades de lxs socixs que se fueron sumando. Además, al ser una cooperativa de consumo cuyo objetivo se basa en la alimentación de las familias del territorio, se propuso trabajar con un consumo a nivel local que permitiera estimular la economía local y permitiera ser transparentes y rendir cuentas en el mismo territorio. Como su objetivo es el alimento de las familias de forma autogestionada y no caritativa, su población objetivo incluye personas cesantes, mujeres dueñas de casa y perfiles profesionales variados, lo cual permite este trabajo de funcionamiento redistributivo en función de distintas necesidades y capacidades.



Otra característica central del origen de esta cooperativa es que se sustenta en la lógica de la confianza y cuando una familia solicita unirse aludiendo condición de desempleo, no realizaban una ficha técnica o de seguimiento, instaurando otras lógicas de trabajo y funcionamiento. Esto implica también la instauración de valores de confianza, igualdad, solidaridad y reciprocidad sobre todo en un contexto marcado por la cultura individualista que deriva del modelo neoliberal que se instauró en el país. Por tanto, aquí el trabajo de esos otros valores va unido no solo a la lógica interna de funcionamiento sino también a una resistencia cultural impuesta junto al modelo neoliberal y de demostrar que existen otras formas de hacer economía.

Algunas dificultades de instauración en esta cooperativa que es bien reciente tienen que ver con la institucionalidad

y la centralización del trabajo. El primer obstáculo que enfrentaron a nivel legal fue la creación de la figura jurídica, pues existen vacíos legales en el país para regular a este tipo de organizaciones económicas que no siguen lógicas de maximización de la ganancia y estructura vertical. Otra dificultad que surge y tiene relación con la estructuración y orgánica interna es tratar de no crear sobrecarga de trabajo en relación con la gestión de la cooperativa en unas pocas personas, es decir, no centralizar el trabajo en unas pocas personas que siempre se repiten porque supone repetir las lógicas de que unas personas son quienes gestionan y otras solamente asumen lo que desde la gestión se decide. Este ejercicio es un reto constante porque supone trascender esas lógicas culturales arraigadas en la cultura local. Además de no tratar de reducir la carga de la gestión en unas pocas personas, la cooperativa también ha tenido que enfrentar el reto del conocimiento en cuanto al manejo logístico y de la gestión. Al surgir como una propuesta de apoyo a la ciudadanía que tiene como objetivo el abastecimiento de forma autogestionada, al inicio la falta de formación y conocimiento para el desarrollo de la cooperativa lxs llevó a aplicar una lógica de aprendizaje basada en la logística del acierto/error.

Al ser una cooperativa que nace del mismo contexto de adversidad generado por la pandemia, no han sido tantas las dificultades que han tenido que enfrentar propias de esta época porque la propia orgánica y funcionamiento fue ajustándose desde un inicio a la situación sanitaria, sobre todo en cuanto a cumplimiento de aforos y protocolos de seguridad sanitaria e higiene. Una acción que se implementó para evitar aglomeraciones fue la entrega a domicilio de las canastas y además su organización, difusión y gestión ha sido mucho desde el espacio de la virtualidad. Una característica

de lxs socixs fundadores de la cooperativa es su perfil de conocimiento tecnológico por lo que la organización inicial desde lo virtual siempre fue una característica. Sumado a ello, el tejido social previo que existía por el contexto de protesta social y trabajo dirigencial histórico permitió que la organización desde la virtualidad fuese posible incluyendo a perfiles de personas y familias muy diversas y de necesidades variadas, que si bien no estaban tan conectadas al contexto virtual, ya tenían una conectividad que les permitió sumarse a la cooperativa desde sus propias relaciones sociales.

Algunos de los hitos importantes en el desarrollo de la cooperativa hacen que se siga proyectando hacia la cobertura de alimento y sustento, así de como de calefacción a proyecto futuro. Las condiciones climáticas del territorio donde surge la Cooperativa de Unidad Social implican que la población necesite calefacción durante la mayor parte del año, lo cual hace que se convierta en una necesidad casi tan básica como el alimento. Por ello, desde la cooperativa el contar con un grupo de personas voluntarias que permitan el desarrollo de la autogestión que sigue creciendo mes a mes, lxs lleva a tener una mirada de expansión de este tipo de organización con una lógica no de maximización sino de mayor cobertura de necesidades básicas en la mayor cantidad de familias posibles. Durante este año y medio de existencia, su experiencia ha sido compartida hacia otros territorios y se toma como caso de ejemplo en la gestión del consumo de alimentos. Si bien su ubicación geográfica les impide el poder orientarse hacia la adquisición de productos 100% locales por su dependencia de otros espacios del territorio, tratan de darle prioridad tanto al consumo local como al abaratamiento de costos en el acceso a los productos. Al respecto de si debe primar un

criterio económico, es decir, solo reducción de costos al consumo o un criterio político de reivindicación de consumo local directamente desde el productor y sin intermediación, plantean que se encuentran en una situación mixta porque el contexto de crisis económica obliga a priorizar la alimentación con el abaratamiento de costos aunque no siempre se cumplan los objetivos políticos, pero en su proyección futura, estos objetivos políticos son siempre los que los orientan en su práctica.



3. Recomendaciones



Sin lugar a duda, la situación a la que se enfrentan los pueblos latinoamericanos en el contexto de la pandemia de COVID-19 es muy adversa, y su verdadero impacto, tanto a nivel sanitario (incidencia y muertes) como socioeconómico, sólo se podrá cuantificar con evaluaciones posteriores.

A pesar de que no es posible vaticinar hoy cómo será el futuro de la economía social, popular y solidaria en la región, se puede afirmar que la pérdida irreparable de vidas, las carencias alimentarias y habitacionales, la pérdida de ingresos permanentes y estacionales, la reducción del comercio y el turismo tendrán consecuencias a las que deberán responder ineludiblemente los Estados. Sin embargo, aún es posible enmendar rumbos y definir estrategias específicas para frenar las crisis y mitigar sus impactos en la aplicación de derechos económicos, sociales y culturales.

Para tal efecto, se presentan las siguientes recomendaciones orientadas a mejorar la contención de los impactos de la pandemia y a llevar a cabo una recuperación transformadora:

Recomendaciones

3.1

Fortalecimiento organizacional y resistencia

Garantizar la participación de los pueblos indígenas y campesinos a través de sus organizaciones representativas, incluidas las organizaciones de mujeres y jóvenes, en las instancias de toma de decisiones en todos los niveles establecidos por los Gobiernos nacional, regional y local para frenar o mitigar el COVID-19.

Reafirmar y revitalizar las culturas indígenas y los conocimientos populares campesinos, fortalecer las organizaciones de los pueblos indígenas y la participación plena de las mujeres y lxs jóvenes en los procesos de toma de decisiones, como componentes esenciales de los esfuerzos cooperativos.

Concretar las acciones necesarias para fomentar los emprendimientos asociativos y la organización cooperativa, como herramienta fundamental para desarrollar estrategias socio-productivas sostenibles, que sean compatibles con el cuidado de la naturaleza y el desarrollo inclusivo.

Fortalecimiento de los valores de cooperación, reciprocidad, confianza y solidaridad que permitan la experiencia de que es posible otras formas de relación, producción y distribución que no pasen únicamente por el intercambio mercantil y la maximización de la ganancia.

Reforzar las dinámicas de trabajo colectivo que logren permear de manera constante en la orgánica cooperativa, flexibilizando la organización e integrando firmemente el voluntarismo y la horizontalidad como ejes de resistencia frente a las lógicas de trabajo tradicionales.

Avanzar hacia la conformación de cooperativas sustentables, en donde se logre superar la precariedad laboral de lxs asociadxs en base a la profesionalización del trabajo colectivo, integrando modelos económicos que respondan al colectivo, permitiendo sostener la organización en el tiempo.

Generar mercados de consumo alternativo, en donde las lógicas capitalistas no sean las que regulen el funcionamiento, sino que prime el valor organizacional, los principios cooperativos, el comercio justo y el valor humano del trabajo desarrollado bajo lineamientos de la economía social y solidaria



Recomendaciones

3.2

Tejido social y autogestión

Reconocer la importancia de los mecanismos comunitarios (e informales) de protección social implementados autónomamente por las organizaciones comunitarias y cooperativas, que han contribuido de manera fundamental a su protección durante la pandemia; y ejecutar estrategias para su fortalecimiento, ampliación y articulación con los sistemas de protección social formales, a fin de maximizar su potencial productivo, social, económico, ambiental y cultural a nivel territorial. Este tipo de medidas podrían servir como base para establecer una protección social ampliada, inclusiva y culturalmente pertinente.

Asegurar el acceso al diagnóstico, la trazabilidad, la atención y la recuperación de las personas de organizaciones comunitarias y cooperativas, lo que conlleva, al menos: i) asignar recursos específicos para reforzar las redes asistenciales de salud en los territorios indígenas y velar por que los equipos de salud no se conviertan en una amenaza de expansión del contagio en dichos territorios; ii) incorporar la participación de lxs líderes de asociaciones, federaciones y cooperativas como condición para la adaptabilidad y aceptabilidad de las estrategias que se pongan en marcha; y iii) articular esas medidas con especialistas médicxs con enfoque comunitario de

prevención, a los se proporcionará insumos y equipamientos de protección personal, al menos en la misma medida que a lxs técnicxs y profesionales de los sistemas de salud oficiales. Igualmente, durante la pandemia, se deberá asegurar el acceso a servicios de salud adecuados y culturalmente pertinentes en todos los ámbitos, incluidas la salud mental, la salud sexual y reproductiva y la atención de personas indígenas que viven con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).



Establecer medidas específicas para la seguridad alimentaria y nutricional que sean culturalmente pertinentes, como incluir productos locales en las canastas que se entreguen, lo que puede favorecer el dinamismo en las economías tradicionales y fortalecer los sistemas alimentarios campesinos. Se deben considerar estas medidas asumiendo prioritizaciones por grupos de personas según sus condiciones vitales (edad y estado de salud) así como sociales (condición de migrante en algunos territorios, madres solteras, familias con más de 2 hijxs, personas adultas mayores).

Prever medidas especiales para asegurar el acceso a la vacunación contra el SARS-CoV-2, de modo que se tengan en cuenta la participación de las organizaciones y líderes de la ESS, en el diseño y la ejecución de las estrategias y campañas de vacunación; que garantice la pertinencia desde el punto de vista comunitario y contemple medidas adicionales para garantizar la cobertura a sectores informales y populares.

Reconocer de manera adecuada y oportuna las dinámicas demográficas específicas de cada uno de los territorios, así como

las intersecciones entre los factores de género, generacionales, territoriales y de desigualdad de clase, en las respuestas estatales y comunitarias para contener y mitigar la pandemia y sus impactos socioeconómicos.

Integrar a los actores locales dentro del desarrollo y funcionamiento de la organización, visualizándolos como actores claves y activos, en quienes se debe confiar para lograr un servicio comunitario en clave de participación territorial, no sólo como potenciales clientes, sino que como asociados y parte fundamental del ecosistema que contenga el desarrollo y las condiciones óptimas de funcionamiento de la cooperativa.

Visualizar otras formas de valoración económica fuera de la monetización de los productos o servicios, integrar lógicas de trueque e intercambio de saberes y productos con otras organizaciones que refuercen la orgánica interna de la organización, y que además sirvan como forma de retribución para los socios de cooperativa, **buscando resolver así de manera asociativa las necesidades básicas de educación, capacitación, salud y ahorro dentro de los territorios que contienen a las organizaciones de la economía social y solidaria.**

Integrar nuevas fuentes de financiamiento para las organizaciones, las cuales no dependan solo del voluntarismo y trabajo colectivo, sino que amplíen la mirada a organizaciones de la economía social que actúen a nivel nacional e internacional, potenciando así el funcionamiento, la estabilidad y las condiciones de trabajo de los socios de las organizaciones cooperativas.

Recomendaciones

3.3

Transformación digital: tecnología y saberes

Desglosar los datos por tipo de organización de la economía social, popular y solidaria, así como por demografía y nivel socioeconómicos, al brindar información sobre los casos confirmados, lxs fallecidxs, lxs recuperadxs y lxs hospitalizadxs. Así mismo, entregar datos sobre el acceso a los programas de asistencia (canastas de alimentos, bonos financieros, reducción o moratoria del pago de servicios básicos, etc.), y ponerlos a disposición de la ciudadanía a través de plataformas de datos abiertos. Si bien es complicado lograr avances en este ámbito, los Estados deben comenzar este proceso teniendo en cuenta los consensos internacionales pertinentes, que instan a incluir preguntas de autoidentificación de la economía social, popular y solidaria en los sistemas de información y su cobertura universal.

Fortalecer las estrategias de comunicación sobre el COVID-19 junto y entre las organizaciones de la ESS, dando prioridad no solo a los contenidos de reportes médicos, sino también a los conocimientos y prácticas de autocuidado y prevención que forman parte del patrimonio cultural de las comunidades y de sus sistemas tradicionales de salud. En particular, diseñar junto con los pueblos indígenas y campesinxs mensajes que respondan a sus particularidades, tanto en los idiomas indígenas como en el idioma dominante,

y asegurar su amplia difusión, tanto en los territorios tradicionales como en las zonas urbanas, a través de los medios más accesibles y de carácter comunitario.

Potenciar la transformación digital de las organizaciones de la ESS, considerando que el contexto exige que las plataformas digitales y medios de comunicación virtual sean los protagonistas de las nuevas dinámicas de consumo, trabajo y comercialización.

Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento tecnológico que permitan el desarrollo y adaptación de las organizaciones de la ESS para efectos de organización interna, y de mejoramiento de sus estrategias para usuarios y/o beneficiarios del trabajo realizado por las organizaciones.

Impulsar el desarrollo de plataformas digitales y de comunicación de manera colectiva y asociativa, en donde las organizaciones hermanas vinculadas en los mismos territorios, puedan visualizar que colectivizar las necesidades y oportunidades de crecimiento pueden ser una importante herramienta de subsistencia y mejoramiento de las organizaciones partes del mismo ecosistema de la ESS local.



Recomendaciones

3.4

Vinculación con actores diversos

Abstenerse de adoptar medidas legislativas y administrativas que afecten el bienestar de la ESS rural y campesina durante la pandemia, así como no aprobar proyectos extractivos, de expansión agrícola o forestal en los territorios indígenas. Se tratan de aspectos fundamentales en las estrategias para controlar los contagios y sus efectos en los sectores rurales y campesinos, que también debe ser central a la hora de diseñar y aplicar las medidas de recuperación económica tras la emergencia de salud pública generada por el COVID-19.

Establecer medidas especiales de asistencia financiera para que las organizaciones de la ESS se enfrenten adecuadamente a la emergencia sanitaria y sus impactos, y asegurar el acceso a los subsidios en las propias comunidades con miras a reducir el riesgo de contagio que supone el desplazamiento a las ciudades para tramitarlos. Debe prestarse especial atención a los trabajadores sin contrato y organizaciones populares sin formalidad, así como a las mujeres empleadas en el trabajo doméstico remunerado, cuya sobrevivencia se ha visto en dificultades por las medidas de aislamiento y distanciamiento social.

Fortalecer los sistemas de información gubernamentales relativos al COVID-19 y

promover su articulación con las iniciativas de seguimiento emprendidas por las organizaciones de la ESS de los países de la región, como un componente fundamental para el diseño, la implementación y la evaluación de respuestas adecuadas y pertinentes para afrontar la crisis socio sanitaria y recuperarse tras la pandemia. Las enseñanzas que se extraen de sus experiencias pueden contribuir significativamente a implantar el postergado enfoque comunitario en los sistemas de información, además de transformarse en una herramienta de gran utilidad para hacer un seguimiento de las agendas regionales y mundiales para el desarrollo.

Los Gobiernos nacionales, la comunidad internacional y otros actores deberían fortalecer su colaboración con las organizaciones de la economía social, popular y solidaria para mejorar la gobernanza de sus territorios y asegurar sus derechos colectivos.

Asimismo, es importante la coordinación con organizaciones territoriales de la ESS en búsqueda de la resolución de sus necesidades básicas, en donde se logre visualizar la asociatividad como una forma de integración y desarrollo de las organizaciones propias, más allá de la institucionalidad estatal y de los gobiernos locales.

En ese sentido la academia abre espacios relevantes para procesos de formación y capacitación relevantes, los que deben ser utilizados para el desarrollo y crecimiento de las organizaciones de la ESS.

Aprender de las experiencias de la ESS como base para revertir las causas estructurales de la crisis y prepararse para brotes de otras enfermedades infecciosas, ya que todo parece indicar que las naciones

del mundo deben rediseñar sus modelos de desarrollo. En ese proceso, los principios de la ESS juegan un papel fundamental para el desarrollo de un Buen Vivir como oportunidad para construir nuevos modelos más centrados en las personas, solidarios y sostenibles, junto con establecer nuevos pactos políticos y sociales, que sienten las bases para construir un Estado en el que se reconozca la propiedad social y cooperativa.



Conclusiones



El contexto mundial de pandemia por COVID-19 puso de manifiesto que el modelo económico de orden neoliberal sustentado en lógicas de desigualdad, extractivas y de acumulación de la riqueza, incrementa estas condiciones en contextos de crisis.

Así como la acumulación de riqueza en unxs pocos no logra por goteo, la mejora de las condiciones de vida del resto, los contextos de crisis para quienes gozan de mejores niveles de vida agravan también y en mayor medida, la situación de quienes viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social. Los grupos de personas más rápidamente afectadas por la crisis económica generalizada que provocó la pandemia fueron no solo lxs más pobres sino también las poblaciones históricamente dominadas como; lxs campesinxs, población indígena, mujeres, jóvenes, niñxs, población migrante y población adulta mayor.

Dado que este modelo económico sustentado en formas y valores que promueven la alta desigualdad ha sido interpelado desde luchas y organizaciones locales desde muy distintos territorios, la crisis económica generada por la pandemia las llevó a buscar nuevos mecanismos de resistencia. Las iniciativas y poblaciones que promueven otras formas de gestión y organización económica se han clasificado con el concepto de economía social, popular y solidaria, asumiendo la amplia diversidad de prácticas y formas que son propias de cada población y territorio. Pero lo transversal a todas estas economías y formas de autogestión, es que se basan en lógicas de cooperación, reciprocidad, solidaridad y promueven el Buen Vivir, todos ellos principios históricamente negados por el modelo económico dominante.

Los casos de La Cooperativa Agrícola Integral “El Campesino” (CAIC), la Cooperativa Despensa Solidaria, la Fundación OASIS, y la Cooperativa Unidad Social, muestran cómo las lógicas de organización y trabajo colectivo se siguen desarrollando y ajustando a las condiciones de crisis que habitualmente atañen a las poblaciones más desfavorecidas, incluso en un contexto de pandemia mundial como lo es el del COVID-19. Todas estas formas de autogestión que han sido analizadas tienen como elemento común la garantía del sustento humano, ya sea desde la producción y comercialización de alimentos de forma que haya un acercamiento a la soberanía alimentaria; la garantía de un alimento sano que no dañe a la salud de las personas y se focalice en priorizar alimentos locales y de temporada y; desde la búsqueda de la garantía de la alimentación a todas personas independientemente de que por su condición social no pueden acceder al alimento mediante un pago monetario. Un modelo económico realmente alternativo es aquel que busca que todas las personas, independientemente de su sexo, género, etnia, cultura, edad, clase social, puedan tener satisfechas sus condiciones de vida en forma digna.

Por ello, es importante que se puedan seguir desarrollando este tipo de prácticas desde los componentes que actualmente, y producto de la pandemia, se hacen más necesarios.

Primero, desde el fortalecimiento organizacional para lograr la inclusión de los distintos grupos de población históricamente dominados y que se sigan promoviendo los valores de la cooperación, solidaridad, confianza y reciprocidad para que sus luchas

y resistencias se sigan afianzando. Segundo, desde la promoción del tejido social y la autogestión sobre todo en clave de lograr el sustento humano para toda la población, así como un acceso a condiciones de vida saludables en relación con el contexto de pandemia. El transparentar la información sobre cómo afectó a la población la pandemia, así como el acceso a vacunas, se convierte en prioridad para estas organizaciones que siguen desarrollándose pese a la prevalencia del COVID-19. Tercero, y producto del nuevo contexto comunicacional, sobre todo virtual, se hace necesaria la promoción de formas de trabajo y gestión organizacional que permitan la integración en la virtualidad de los distintos grupos de personas, incluyendo, la comunicación en distintos idiomas. Es importante el desarrollo de más políticas públicas tanto locales, como estatales que promuevan estas prácticas autogestionadas que han tenido que sobrevivir sobre todo a nivel financiero, de forma autónoma y autogestionada. Por ello, y como cuarto componente, la vinculación con actores diversos ya sea otras organizaciones cercanas territorialmente, gobiernos locales y nacionales, así como la academia y organizaciones internacionales, ha sido fundamental en la sobrevivencia de estos colectivos y sigue siéndolo dado el contexto de resistencia en el que estas economías siempre se encuentran.



Referencias



Acosta, A. (2010). El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Una lectura desde la Constitución de Montecristi. Policy Paper, 9.

Aguirre, L., & Saavedra, L. (2018). La promoción de la gestión de políticas públicas para la economía social y solidaria: caracterización de actividades productivas en el ámbito local, perspectivas y desafíos. Enfoques y Debates Sobre La Economía Popular Y La Economía Social y Solidaria, Eje 1, 2–8.

Banco Mundial (2020). La Economía en los Tiempos del Covid-19. LAC Semiannual Report; April 2020. Washington, DC: World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33555> License: CC BY 3.0 IGO. URI: <http://hdl.handle.net/10986/33555>

Basañes, C. C. (2020). Empresas de la economía solidaria y trabajadores de la economía popular: convergencias y política pública. Enfoques y Debates Sobre La Economía Popular Y La Economía Social y Solidaria, Eje 1, 34–39. <http://observatorioess.org.ar/2020/10/30/empresas-de-la-economia-solidaria-y-trabajadores-de-la-economia-popular-convergencias-y-politica-publica/>

CEPAL 2021. La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja

productividad. Informe Especial COVID-19 No. 11. <http://hdl.handle.net/11362/47043>

Castro-Gómez, S., & Grosfoguel, R. (2007). El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. In El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Pontificia Universidad Javeriana.

Coraggio, J. L. (2016). Economía social y solidaria en movimiento (U. N. de G. Sarmiento (ed.)).

Coraggio, J. L., Arancibia, M. I., & Deux, M. V. (2010). Guía para el mapeo y Relevamiento de la Economía Popular Solidaria. Grupo Red de Economía Solidaria del Perú - GRESP.

Eduardo Gudynas. (2010). Desarrollo sostenible: una guía básica de conceptos y tendencias hacia otra economía. Otra Economía. Revista Latinoamericana de Economía Social y Solidaria, 6(6).

Gibson-Graham. (2007). <https://thenextsystem.org/>. Cultivating Community Economies.

Guerra, P. (2014). Socioeconomía de la solidaridad Una teoría para dar cuenta de las experiencias sociales y económicas alternativas (2a). Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia.

Jubeto, Y., Guridi, L., & Fernández, M. (2014). Diálogos Economía Social Y Solidaria en Ecuador (HEGOA (ed.)). Universidad del País Vasco.

Latouche, S. (2006). La apuesta por el decrecimiento (ICARIA (ed.)).

López-Calva, L. F., & Melendez, M.

(2020). Las implicancias socio-económicas de la pandemia por COVID-19: Ideas para la acción en políticas públicas. http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/the-socio-economic-implications-of-the-covid-19-pandemic--ideas-.html

Martins, N. M. (2019). La economía social y solidaria en la agenda de integración sudamericana: sinergias regionales rumbo al desarrollo sostenible. *Enfoques y Debates Sobre La Economía Popular Y La Economía Social y Solidaria*, Eje 1, 171–179. www.observatorioess.org.ar/coness

Max-Neef, M., & Elizalde, A. (1993). *El desarrollo a escala humana*. ICARIA.

Meadows, D. (1972). *Los límites del crecimiento*. Fondo de Cultura Económica.

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. CLACSO.

Singer, P. (2009). Relaciones entre sociedad y Estado en la economía solidaria. *ICONOS. Revista de Ciencias Sociales*, 33, 51–65.

http://search.proquest.com/docview/60321857?accountid=14643%5Cnhttp://mlbsfx.sibi.usp.br:3410/sfxlcl41?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ:socabsshell&atitle=State-Society+Relations+in+a+Solidary+Economy&

Tortosa, J. M. (2011). *Maldesarrollo y Malvivir. Pobreza y violencia a escala mundial*. Abya-Yala.



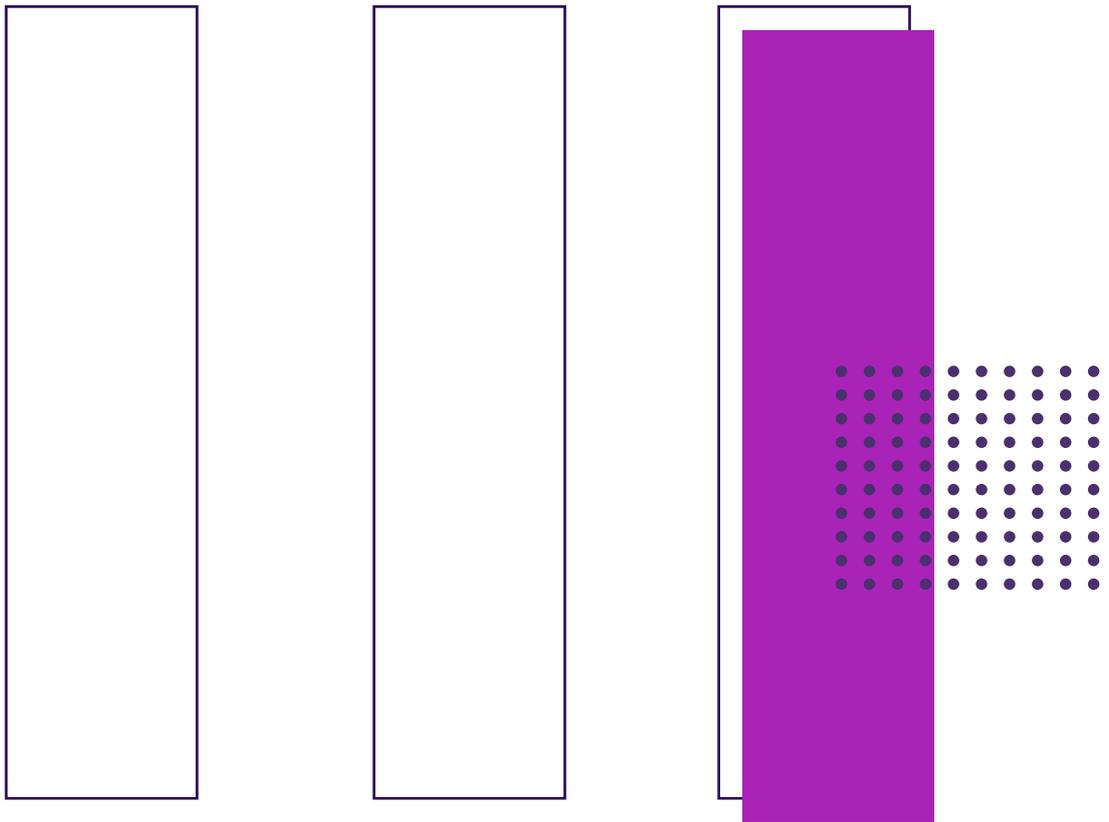


Resistencias Feministas en América Latina ante el Covid-19

Algarabía Feminista

María Florencia González Neira | Pauline Vogel

Jacqueline Cordo | Carolina Tamara-Castro



Introducción



*El patriarcado es un juez
Que nos juzga por nacer
Y nuestro castigo
Es la violencia que no ves*

*El patriarcado es un juez
Que nos juzga por nacer
Y nuestro castigo
Es la violencia que ya ves*

Las Tesis¹

Ha pasado más de un año desde el 26 de febrero del 2020, cuando en Brasil se confirmó el primer caso por contagio de Covid-19² en un contexto donde el mundo empezaba a alarmarse ante las muertes provocadas por este virus. Pasado un mes, después de los primeros brotes del virus en la región de Latinoamérica, los gobiernos tomaron medidas de confinamiento y se aplicaron restricciones para frenar la creciente amenaza. Sin embargo, esta pandemia traía consigo no sólo un virus letal, sino también la profundización de unas grietas de desigualdad e inequidad presentes en la región y que ante la crisis, se recrudecieron.

Sin embargo, esta crisis, como tantas otras, no afecta a todos por igual.

La región de América Latina es la segunda región con más desigualdad y durante la pandemia esto se ha evidenciado nuevamente. Según el informe de la CEPAL (2021) sobre el panorama social en América Latina, se estima que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales del 2020, 22 millones de personas más que el año anterior³. Para dar un ejemplo, según la lista de Forbes, el acervo de riqueza de los multimillonarios en Latinoamérica ha crecido más del 40 por ciento durante el COVID-19⁴.

¹ Canción Un Violador en tu Camino

² <https://www.as-coa.org/articles/el-coronavirus-en-america-latina>

³ <https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-provoca-aumento-niveles-pobreza-sin-precedentes-ultimas-decadas-impacta>

⁴ <https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/director-s-graph-for-thought/covid-19-and-wealth-at-the-top--more-and-wealthier-billionaires-.html>

Es en este contexto que se desarrolla a continuación este informe que pretende comprender de manera general las implicaciones que recaen sobre mujeres y disidencias en la pandemia por el Covid-19. De esta manera, sosteniendo una perspectiva feminista de la economía, se hará especial énfasis en cómo el capitalismo se erige sobre el trabajo no reconocido (ni remunerado) realizado por las mujeres. El trabajo de cuidado y reproductivo, en su enorme mayoría realizado por mujeres, son parte fundamental de las relaciones económicas capitalistas y de la creación de valor. Sin embargo, las mujeres se ven impelidas por la sociedad a realizarlas “por amor”. Es entonces que desde esta perspectiva económica feminista se visibiliza cómo las mujeres, que efectivamente entran en el mercado laboral remunerado, se enfrentan a otros retos como la brecha salarial y la sobre representación en trabajos precarizados.

Así mismo, se presenta las relaciones fracturadas entre el cuerpo y el territorio y el protagonismo presente de un sistema capitalista-patriarcal que mercantiliza y jerarquiza las relaciones entre seres vivxs. Además, se expone la violencia ejercida sobre mujeres y que se problematiza ante las crisis, esto por la asignación de roles, por agresiones sobre sus cuerpos y además por la violencia estatal en la desprotección y en la ausencia de datos para comprender la experiencia de géneros disidentes.



Por otra parte, se exploran experiencias comunitarias de redes (trans)feministas, que resisten desde acciones cotidianas, locales y domésticas ante las opresiones del sistema capitalista-patriarcal, racista y heteropatriarcal en la región. De esta

manera, se presentan diferentes casos de estudios de agrupaciones trans feministas y antirracistas que resisten desde diferentes lugares y diferentes estrategias ante la nueva crisis y ante un sistema que históricamente lxs ha oprimido.

Desde Argentina, la agrupación social transfeminista *No tan distintas* acompaña a mujeres cis y trans, lesbianas, travestis e identidades no binaries en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Esta organización, conformada por una diversidad de compañerxs de distintas clases sociales, con diferentes experiencias y saberes, se basan en la creación de nuevas estrategias habitacionales que escapan a la lógica cis heteropatriarcal capitalista, generando a su vez nuevas estrategias de trabajo y de activismo feminista.

***La Casa de las Vulvas*, en la ciudad de Pelotas en el sur de Rio Grande en Brasil, es una casa cultural feminista y antirracista que busca fomentar y visibilizar a las artistas mujeres y disidencias de género.** Para ellxs el arte es una forma de resistencia y así permiten un espacio que acoge y apoya proyectos feministas, de la comunidad LGTBIQ+ y con un enfoque antirracista. Sin embargo, se han visto afectadxs en sus programas y propuestas y han tenido que resistir en medio de la pandemia.

Desde México, la antropóloga feminista Rosalva Aída Hernández, una profesora que vincula su labor con el activismo, cuenta la experiencia de *Hermanas a la sombra*, en la que ella participa. Esta grupa está integrada por mujeres presas, ex-presidarias y feministas aliadas, que a partir de la escritura creativa como herramienta de reflexión crítica y de construcción de comunidad, se piensan otras realidades y generan proyectos de financiación, ante la dificultad de la pandemia y del sistema que les dificulta la participación laboral.



A partir del análisis de estos procesos de resistencia comunitaria y de lucha, y ante la reflexión del contexto de las mujeres y disidencias en la pandemia por el Covid-19 en la región, se presentarán algunas recomendaciones. La gama de recomendaciones es amplia: desde que el Estado genere políticas públicas sobre el acceso igualitario a plataformas digitales, pasando por la necesidad de regularizar las tareas de trabajo informal y/o no remunerado ejercidas mayoritariamente por las mujeres, y hasta garantizar el acceso a servicios básicos a la consulta directa con mujeres y disidencias organizadas respecto a sus necesidades y deseos. Es decir, estas recomendaciones apuntan a la comprensión de la pluralidad de experiencias e identidades en la región y la necesidad de su análisis e inclusión en las medidas de políticas públicas que mitiguen el impacto por la actual crisis.



Diagnóstico



*Resisto
desde el grito que condena
la normalidad de la violencia
la perpetuidad de los secretos
resisto en pie
me sostiene un abrazo
mis lágrimas son resistencia.*

*Resisto para olvidar
olvido para sanar
sano para reconstruir
un camino sin culpa
un cuerpo sin dolor
una historia sin miedo.*

Itandehui Olivera⁵

Al inicio de la pandemia, el mundo pareció preocuparse por la vida y por el cuidado de los territorios que la sostenían. Es así que en marzo del 2020 se empezaban a proclamar unas nuevas y temporales formas de organización social que se sostenían en el aislamiento y el distanciamiento social, como principios para mantenerse seguros del temido virus que atacaba a los cuerpos.

Gobiernos en la región de Latinoamérica proclamaban que en la responsabilidad comunitaria reposaba el bienestar individual y exaltaban vagamente frases de cuidado comunitario e ideales de futuro, donde sin pandemia, se estaría de nuevo a salvo.

Así, frases como “*Si yo me cuido, te cuido y si tú te cuidas, juntos cuidamos a Guatemala*”⁶ de la campaña publicitaria del plan “*Juntos saldremos adelante*”⁷ promovida desde el gobierno de Guatemala, se hicieron populares. Así mismo, desde Panamá se proclamó, “*#sersolidario Es seguir las medidas de prevención para proteger a mis padres, a mis abuelos, a mis vecinos, a mis amigos, a Panamá*”⁸. Sin embargo, bajo las lógicas de los gobiernos neoliberales era de esperarse que la preocupación final, no fuera el cuidado colectivo y se convirtiera más bien en mantener el mercado y la producción de bienes y servicios.

⁵ Itandehui Olivera (2017): *Soy una mujer que resiste*, Oaxaca / La Haya, en: Leyva Solano, Xochitl y Rosalba Icaza (Coords.): *En tiempos de muerte: cuerpos, rebeldías, resistencias*. Buenos Aires y San Cristóbal de Las Casas: Clacso y Cooperativa Editorial Retos, pp. 329 - 334.

⁶ <https://twitter.com/GuatemalaGob/status/1288848070256594944/photo/1>

⁷ <https://mingob.gob.gt/juntos-saldremos-adelante-campana-de-prevencion/>

⁸ <https://panama.un.org/es/88308-naciones-unidas-en-panama-lanza-campana-ser-solidario-es-para-promover-la-adopcion-de-medidas>

Esto reveló de nuevo que la salud y el bienestar son privilegios a los que no todos tienen derecho, ya que en medio de la crisis de salud, quedarse en casa y cuidarse comunitariamente dejó de ser una opción, dados los problemas económicos para subsistir.

Sin embargo, desde los feminismos comunitarios se presenta una alternativa para dejar de pensar al cuerpo únicamente como fuerza de trabajo. La feminista comunitaria guatemalteca Lorena Cabnal y la Asociación de Mujeres de Guatemala plantean una invitación a recuperar el cuerpo, desde la noción de territorio, para promover la vida en dignidad, a reconocer su resistencia histórica y su dimensionalidad de potencia transgresora, transformadora y creadora.

El concepto cuerpo-territorio(-tierra) apela a la recuperación consciente del primer territorio el cuerpo, como un acto político emancipatorio (Cabnal, 2010).

La idea de pensar al cuerpo ligado al territorio ha sido la base para los feminismos comunitarios, que sostienen que los cuerpos son el primer territorio en disputa, el primer lugar para el cuidado y para la reproducción de la vida.

Una propuesta similar de pensar al cuerpo nuevamente en conjunto con la tierra, es decir, la naturaleza, la hace la autora Rita Segato (2020) en un texto sobre la crisis causada por el Covid-19⁹. La autora argentina expone la relación fracturada y mercantilizada entre sociedad y naturaleza que es protagonista en los últimos siglos. Así, sostiene Segato (2020), que desde el pensamiento occidental-colonial y capitalista se ha extendido la idea de entender a los humanxs como una especie que está por encima, que es superior a la naturaleza,

extendiendo principios de manipulación y control sobre ella. Bajo esta lógica, se nublan las posibilidades de entender las dependencias e interdependencias entre seres vivos en el planeta. Por el contrario, se ha defendido la idea de la temporalidad de la vida y se ha subordinado a la naturaleza y todos sus procesos inherentes bajo la lógica unidimensional del mercado (Segato, 2020).

Ahora bien, este virus nos debería alertar sobre nuestra fragilidad biológica y nuestra inconsciencia con la naturaleza con la que habitamos conjuntamente y reconocer entonces que “las leyes del capital no son las leyes de la naturaleza” (Segato, 2020, p. 18).

De esta manera y en este escenario donde la vida responde a jerarquías, donde hay existencias que valen más que otras, donde la relación con el cuerpo, como una unidad con el territorio, está fracturada, es donde se ha desarrollado la pandemia de Covid-19.

La autora Rita Segato (2016) sostiene también en su reflexión del cuerpo como territorio, que el territorio está dado por los cuerpos que lo habitan (p. 67). De esta manera, cuando se busca ejercer dominio sobre un lugar, ordenar y dominar, debe hacerse sobre los cuerpos que lo habitan. Este patrón, ha sido una estrategia usada por los sistemas de opresión de orden colonial, capitalista y patriarcal que imponen en los cuerpos violencias para ejercer sus mandatos, para mantener la jerarquía de cuerpos y sostener un sistema que duele a los cuerpos. Sin embargo, en este orden, no todos los cuerpos viven las mismas formas de violencia y de asignaciones, de roles y dolores. Los cuerpos al ser ordenados y clasificados según órdenes biologicistas, han sido racializados, cargados con labores y roles determinadas e identidades binarias. En este orden, al enfrentar la realidad

⁹Segato, L. (2020) *Coronavirus: todos somos mortales, del significativo vacío a la naturaleza abierta de la historia. En Pandemia al Sur. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo Libros, pp. 11 – 22.*

que traía la pandemia para la región de Latinoamérica, con una economía y una producción tradicional frenadas drásticamente, se manifestó el papel protagónico de los trabajos de cuidado, de sostenimiento y reproducción de la vida. Y evidenció además, las condiciones precarias en las que se sostienen estos trabajos.



El trabajo doméstico fue transformado en un atributo natural [para las mujeres] en vez de ser reconocido como trabajo ya que estaba destinado a no ser remunerado.

(Federici, 2013, p. 37)



Silvia Federici (2013) por su parte sostiene que, desde una perspectiva feminista de la economía, el capital asignó en las mujeres el rol de los cuidados para sostener en su trabajo no pago los centros de producción de fuerza de trabajo. Y de esta manera, el tiempo de las mujeres sigue siendo un “factor de ajuste del que los Estados disponen para afrontar la crisis y los nuevos escenarios económicos” como advierte la CEPAL (2020) en el informe sobre la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe. Así también, según el informe de la CEPAL en abril del 2020, las mujeres dedican diariamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en los hogares el triple del tiempo que dedican los hombres a las mismas tareas.

Por otra parte, trabajadoras domésticas han visto vulnerados sus derechos dada la alta tasa de informalidad de este trabajo. Según ONU Mujeres (2020) más del 77,5% de las mujeres empleadas en el sector del

trabajo doméstico lo hacen en condiciones de informalidad;



...según han denunciado los sindicatos de trabajadoras domésticas de algunos países de la región, se han cancelado contratos, y se ha reducido el tiempo de trabajo, con una reducción proporcional del pago. Esta situación, asociada a la escasa protección social, provoca que muchas de las trabajadoras domésticas hayan quedado sin ningún tipo de ingreso o con ingresos insuficientes para sostener sus necesidades básicas y las de su familia.

(ONU Mujeres, 2020)



Es así como en este contexto, de cuerpos enfrentados a roles y asignaciones para sostener un sistema, se incrementó la brecha de desigualdad de género. En el caso de las mujeres ha significado el retroceso de diez años en la participación del mercado laboral (CEPAL 2020) y se estima, por ejemplo, que en México 7 de cada 10 desempleadas son mujeres (Cullell, 2021).

Además, debido a las condiciones de aislamiento y políticas de confinamiento, muchas mujeres se vieron más expuestas a violencias por su condición de género ya que muchas han tenido que convivir más tiempo con sus agresores¹⁰. Por ejemplo, en el caso de México, según los datos de Línea Mujeres¹¹, la incidencia de llamadas aumentó un 97% en mayo del 2020 con un total de 1.739 llamadas, en comparación con mayo del 2019 que fueron 968. Sin embargo, mientras las llamadas de

¹⁰ <https://violentadasencuarentena.distintaslatitudes.net>

¹¹ Línea Mujeres de LOCATEL es un servicio telefónico al que las mujeres pueden llamar para pedir apoyo y orientación con relación a violencias de género.

auxilio aumentaban, las investigaciones penales por violencia familiar bajaron un 20% con relación al año anterior (Vela 2020). De esta manera, se evidencia una barrera ante la posibilidad de denuncia dadas las restricciones de movilidad por el confinamiento, el cierre de oficinas estatales para denunciar y también el miedo a infectarse. Y evidencia además la incapacidad de las instituciones del Estado para enfrentar estas violencias. Para dar otro ejemplo, en Brasil¹², entre marzo y mayo, aumentó la tasa de feminicidio en algunas regiones entre el 100 % y el 400 % (Amnistía Internacional, 2021).

En estas formas de violencia que recaen sobre los cuerpos, existe además una violencia institucional que se presenta en la ausencia de datos. Para el caso de personas con identidades de género no binarias, no existe al día de hoy suficiente estadística que permita comprender las condiciones particulares que han tenido que asumir dada la pandemia del Covid-19, las violencias que han caído sobre sus cuerpos y sus resistencias. Esto debido en parte a que las informaciones y estadísticas siguen respondiendo a sistemas binarios, que muchas veces impone el sexo biológicamente y no permite la expresión de una identidad de género. Esto dificulta además la evidencia para la creación de políticas públicas y categorías de protección interseccionales, que comprendan la diversidad de experiencias y las diferentes formas de violencias que deben vivir personas en quienes recaen diferentes formas de opresión.

En esta carencia de datos y ante la falta de un enfoque interseccional en las

políticas públicas y de intervención, impide comprender cómo ha sido las experiencias de personas migran^{txs} que no tienen su situación administrativa en regla, las personas en condición de calle, las personas presas y/o que lo estuvieron y muchas personas que no responden a sistemas binarios biologicistas o que cuentan con privilegios de clase y raza. Contar con datos e información es crucial para poder generar líneas de acción y determinar estrategias de equidad.



¹²En el estado de Acre, por ejemplo, la tasa de feminicidios aumentó un 400%. El número de feminicidios también aumentó de forma considerable entre marzo y mayo en otros estados: el 157,1% en Mato Grosso; el 81,8% en Maranhão y el 75% en Pará. En el primer semestre de 2020, un total de 1.861 mujeres fueron asesinadas y otras 648 fueron víctimas de feminicidio según los datos de 12 estados recopilados por el Foro Brasileño de Seguridad Pública. Los avisos a la policía realizados por los servicios telefónicos de emergencia en relación con la violencia de género en el ámbito familiar aumentaron un 3,8% en los primeros seis meses de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019. En el estado de Ceará, según el Foro Popular de Seguridad Pública, el número de mujeres asesinadas aumentó un 66% en los primeros siete meses del año en comparación con el mismo periodo de 2019; en ese intervalo de tiempo murieron 216 mujeres. El número de niñas asesinadas aumentó un 124% en ese mismo estado.”

Donde haya opresión, habrá resistencia

El sistema capitalista-patriarcal y colonial actual enseña que con optimismo, esperanza, la regulación de los emociones y aceptando la situación se sale “más fuerte”, resiliente, de las múltiples crisis. Y es entonces cuando en tiempos de crisis la palabra resiliencia es la protagonista. La idea de que la resiliencia ayuda a superar momentos difíciles y a afrontar desafíos, es sin embargo, alimentar el afán de la auto-optimización del sujeto neoliberal que se ve frustrado por la crisis, o la pandemia en este caso. La inseguridad del futuro, el aislamiento social y los desafíos generan una búsqueda por mejorar el bienestar personal. Lo que muchas veces se queda afuera alrededor de la resiliencia, es que existen condiciones socio-estructurales que han creado las bases para las crisis que como sociedad se viven y al descargar en el ánimo y el optimismo las condiciones de mejora a futuro, es desresponsabilizar al Estado y a sus formas de gobierno. Se menciona muy poco, en los discursos optimistas, que la crisis del Covid-19 fue quizá lo menos grave que tuvieron que vivir muchas personas, que si bien ya antes estaban viviendo bajo la invisibilidad estatal y ante injusticias en el acceso a la salud, la educación y al salarios dignos. Hay personas que la pasaron mal antes y durante la crisis y probablemente van a seguir así también después de la crisis por el Covid-19.



*Porque sanando tú,
sano yo, sanando yo, sanas tú,
sanamos todas.*

Lorena Cabnal



En la psicología, lo contrario de la resiliencia es la vulnerabilidad, ¿por qué mejor no hablar de vulnerabilidad? Es a partir de espacios donde se compartan sentires, dolores e ideas de transformación, que se pueden empezar procesos de sanación individual y sobre todo, comunitaria. En las luchas colectivas, el autocuidado y el cuidado de la comunidad se piensa en conjunto y se reacciona para señalar las múltiples opresiones y discriminaciones, pero sobre todo para crear procesos de organización política y mejora social.

Donde haya violencia, habrá resistencia.

Mujeres de todas partes del mundo resisten al sistema patriarcal en su cotidianidad. La lucha es cotidiana, doméstica y colectiva. Una lucha de cuerpos que viven opresiones por razones de raza, género, clase, sexualidad, edad y otras. La pandemia no solo afectó las grandes luchas de los movimientos sociales en América Latina, también afectó las luchas que se deban desde las casas, las comunidades, el entorno directo. Pero a partir de aquí, donde para muchxs, se crearon también nuevas formas de organización y nuevas redes de apoyo y solidaridad.

La lucha no para, la pandemia no paró la resistencia. Y de esta manera, con acciones comunitarias, en ollas barriales, agrupaciones, juntanzas, lxs vecinxs y las comunidades se organizan para resistir a la pandemia y sobreponerse ante la ausencia de un Estado benefactor. Se vieron en la región, organizaciones culturales

resistiendo desde el arte y reinventando sus prácticas para el sostenimiento de la vida en prácticas comunitarias, como en el caso de **Yukasa**¹³, en la región de Quindío Colombia y la **Casa Cultural las Vulvas**¹⁴ en la ciudad de Pelotas, en el sur de Rio Grande do Sul en Brasil. Redes de apoyo, de afectos y recursos que impulsan proyectos para personas en situación de calle como lo es **No tan distintos**¹⁵ en Argentina. Agrupaciones acompañando a mujeres presas y expresidiarias que desde la escritura creativa como herramienta de reflexión crítica hacen trabajo solidario para crear otras realidades como **Hermanas en la sombra**¹⁶, en México. También, juntanzas de mujeres universitarias que, ante los nuevos retos por la pandemia, siguieron la búsqueda de redes apoyo para luchar contra las violencias patriarcales en sus cuerpos como la **Red Amaranta**¹⁷ en Cali, Colombia o como **Contexto psi**¹⁸ en Argentina, una grupa de psicólogas en red que abordan la problemática de la salud mental desde una perspectiva feminista.

Así mismo, la agenda política feminista tampoco ha cesado. En el caso de Argentina, se pudo observar que a pesar de las limitaciones físicas que llegaron con la pandemia, la lucha por los derechos se mantuvo con fuerza. Es así como en diciembre del 2020 se logró la lucha por la despenalización y legalización del aborto después de años de resistencia feminista. Además, en el mes de Junio del año 2021 se logró la legalización del cupo laboral travesti, trans y transgénero, después de muchos años en lucha, siendo esto un ejemplo para la agenda feminista de la región.

La resistencia frente a la pandemia causada por el sistema capitalista-patriarcal y colonial se manifestó desde el trabajo solidario y esta estrategia comunitaria es una acción revolucionaria.



¹³ <https://www.instagram.com/yukasafeminista/>

¹⁴ <https://www.instagram.com/casalavulvas/>

¹⁵ https://www.instagram.com/notandistintos_/

¹⁶ <https://hermanasenlasombra.org>

¹⁷ https://www.instagram.com/red_amaranta/

¹⁸ <https://www.instagram.com/contexto.psi/?hl=es>

Nota editorial: la entrevista se desarrolló el día 18 de junio de 2021 con Cássia Fernandes via zoom. Para más información sobre las casas feministas que levantaron durante el 2020, es posible visitar: https://issuu.com/casalasvulvas/docs/zine_casas_culturais_feministas_da_al



Casa Cultural - Casa de las Vulvas

La Casa de las Vulvas surge en el marco de una casa cultural feminista y antirracista en la ciudad de Pelotas, en el sur de Rio Grande do Sul en Brasil. Busca fomentar y visibilizar a las artistas mujeres y disidencias de género. La casa se fundó en 2016 y cuenta con un hospedaje, un restaurante vegano y venta de artesanías. Forma parte de una red de casas culturales con enfoque feminista latinoamericano, instancia que cuenta con más de 45 espacios.

En el 2020, a propósito de la pandemia del Covid-19, tuvieron que cerrar sus puertas de forma provisoria. Además, en Brasil fueron suspendidas todas las actividades culturales, lo que trajo consigo múltiples dificultades financieras para el mantenimiento del inmueble. Plantean que algunas casas están intentando realizar actividades culturales online, pero es difícil por la falta de infraestructura tecnológica y conectividad.



Sororidad

Una acción concreta que desarrollaron en 2020 fue la distribución de **canastas básicas**, compuestas de comida y enseres de primera necesidad para disidencias en situaciones de vulnerabilidad. En siete meses pudieron ayudar a más de 150 familias pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+. Estos recursos fueron entregados por personas de Pelotas y otros estados de Brasil que realizaban sus aportes voluntarios. Durante el 2020 la Casa de las Vulvas junto a otras organizaciones, entregaron alrededor de 2 toneladas de comida y mensualmente recolectaban cerca de 850 euros para la compra de alimentos y artículos básicos. Mapearon durante la pandemia a personas que estuvieran en situación de vulnerabilidad, pero no necesariamente que estuvieran en contacto con la *Casa Cultural Las Vulvas* con anterioridad a la pandemia.

Abrir la puerta como resistencia

“Todos los días hay una persona que nos golpea la puerta”. Con esta frase la entrevistada nos plantea que existe la necesidad de solicitar ayuda por parte de muchas mujeres y disidencias que se encuentran en situaciones difíciles, ya sea por la pérdida del hogar a raíz de la pandemia por no pago o por situaciones de violencia al interior de los hogares. Es por ello que ofrecen hospedaje en casos

de mujeres y disidencias que no tengan vivienda, así como también entregan atención jurídica y psicológica. Para ello generaron redes con otras organizaciones feministas de la región. En ese sentido, cambiaron la utilización del espacio: lo que antes era un hostel, durante la pandemia se transformó en una casa de acogida.

El futuro de la casa en vilo

Al comienzo de la pandemia, las reacciones de las compañeras de la casa fueron de pánico, emoción y preocupación financiera. Al no tener apoyo y sumado a la incertidumbre del momento, buscaron cerrar la casa debido a que no podrían seguir reuniéndose. Plantearse la casa como un espacio virtual fue una situación que solo vino debido a la pandemia, pero no estaba dentro de sus objetivos iniciales. Por ello fue fundamental buscar nuevos horizontes y formas de proyectar el espacio.

Actualmente se encuentran en una situación similar a la que vivían al comienzo de la pandemia debido a que no tienen financiamiento ni un plan definido para conseguir el dinero requerido. Señalan que es difícil producir actividades culturales cuando hay que preocuparse de la salud propia y de sus familiares.

Durante el 2021 no han pagado los gastos de la casa debido a que no han tenido ingresos durante el año que les permitan financiarla. En 2020 recibieron ayuda estatal, de solo una vez, para pagar el arriendo del inmueble y las cuentas básicas. Actualmente están buscando otras fuentes de financiamiento para cubrir los gastos no

pagados en 2021. Por otro lado, proponen que las ciudades y Estados que tengan inmuebles que no estén en uso sean entregados en concesión a agrupaciones como ellas.

Situación en Brasil

La Casa de las Vulvas es un espacio que acoge y apoya proyectos feministas, de la comunidad LGTBIQ+ y con un enfoque antirracista, narraciones que el gobierno conservador de Brasil no apoya. Por ello y entendiendo que la cultura es un espacio que no entra dentro de los intereses específicos del gobierno, la representante de la Casa de las Vulvas considera que es complejo la obtención de nuevos recursos para el 2021.

En 2022 son las elecciones presidenciales en Brasil y las compañeras de la Casa mantienen fuertes esperanzas de poder obtener financiamientos durante un nuevo mandato presidencial. Actualmente no tienen estrategias para la sobrevivencia de la casa, debido a que la pandemia no está controlada y la situación social y política es muy compleja. Por tanto, y sabiendo que mantener un espacio cultural en tiempos de restricciones sanitarias es complicado, están buscando alternativas y planes que permitan atender las demandas de las mujeres y disidencias una vez finalizada la pandemia.

Para ellas el arte es una forma de resistencia y en ese sentido plantean que



[...]las mentes en Brasil están colonizadas y es importante cambiar el pensamiento y la sociedad. El arte como un vehículo de cambio para cambiar el pensamiento de las personas y dejar un legado a las próximas generaciones relativas a poner fin a la discriminación en contra de las mujeres, personas negras, LGTBIQ+, pueblos indígenas, etc.



Nota editorial: todos los datos aquí mencionados se obtuvieron de la entrevista realizada en el marco de la presente investigación a la agrupación No tan distintas realizada el 29.06.2021. Y de su página web <https://www.notandistintas.org>

N

No Tan Distintas

No Tan distintas se presentan en la actualidad como una agrupación social transfeminista que desde 2011 acompaña a mujeres cis y trans, lesbianas, travestis e identidades no binaries en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.

En sus inicios, sin embargo, se identificaban bajo el nombre de “Perdidos”. Así, trabajaban particularmente en la ranchada de Retiro, en donde había (y aún hay) muchas personas en situación de calle. Por aquel entonces eran varones y mujeres, pero mencionan que el “armado no violento” se fue dando con las mujeres y que desde ahí fueron construyendo red, deviniendo en la grupa que son hoy.



Nuevos modos de vida

La organización está conformada por una diversidad de compañerxs de distintas clases sociales, con diferentes experiencias y saberes. La idea de base es la creación de nuevas estrategias habitacionales que escapen a la lógica cis heteropatriarcal capitalista, generando a su vez nuevas estrategias de trabajo y de activismo feminista, como lo definen ellxs: “generar nuevos modos de vida”.

Este año celebraron su cumpleaños número 10, el cual marcó el paso de “no tan distintas” a “no tan distintas”, mostrando la revisión constante que realizan de su accionar y de la importancia que le adjudican al acompañamiento conceptual de los procesos que atraviesa la organización, intentando repensar la práctica cotidiana. A lo largo de todo este tiempo fueron impulsando diferentes estrategias e iniciativas las cuales apuntan a la construcción de realidades contrahegemónicas, a la posibilidad de una organización social y económica feminista que desafíe las reglas impuestas por la economía neoliberal vigente.

Por la autogestión

Una de las primeras propuestas fue **Frida**, una institución que en la actualidad aloja a mujeres cis y trans, travestis y lesbianas en situación de calle con o sin hijxs a cargo y que funciona 24 horas todos los días

del año. Su mayor potencial está en la autogestión: son lxs mismxs habitantes y egresadxs quienes participan de la toma de decisiones sobre su funcionamiento.

En la actualidad realizan acompañamiento de compañerxs en situación de calle; sostienen el espacio de **Casa Leonor**, un espacio alquilado a personas en situación de riesgo de calle por una propietaria que no pidió la documentación ni el dinero de entrada regularmente exigido, reforzando así las alianzas sororas y transfeministas. A partir de esta experiencia pusieron en práctica diferentes estrategias habitacionales contrahegemónicas, poniendo en contacto a diferentes compañerxs para que en conjunto puedan acceder a viviendas dignas en zonas habitables, ayudándolxs con la documentación y en algunos casos haciéndoles préstamos de dinero, el cual es devuelto en un plan de cuotas pautado también con ellxs.

En el Ecofeminismo

Además, tienen la **Huerta Violeta Parra**, donde en un claro desafío a la lógica mercantilista propuesta por el neoliberalismo, lxs compañerxs siembran y cosechan sus propios alimentos, tanto para consumo personal como para el resto de lxs compañerxs. Esto dentro de un marco ecofeminista y bajo la perspectiva teórica del Buen Vivir.

Por último, sostienen también **talleres de formación política e integral**, así como también reparten bolsones de comida y objetos de primera necesidad.

R

esistencia trans-feminista, comunitaria y cotidiana

La pandemia entonces las encuentra con varios años de militancia y experiencia, con una red fuerte a base de resistencia y acción cotidiana. Si bien en los inicios de la pandemia la idea de “poner el cuerpo en primera persona” se vio desafiada, con el correr del tiempo, y cumpliendo con las restricciones y medidas de seguridad, lograron transformar la práctica activista para que no se vea interrumpida.

Quienes participan en la organización son todxs integrantes. Tener una postura tan activa a nivel vincular, tanto hacia adentro como hacia afuera, es decir, con otras organizaciones, les permitió sobrellevar sin mayores dificultades los desafíos planteados por la pandemia. Según sus palabras:



La clave está en cómo armamos la organización: comunicación, contacto y activismo. Lxs propixs compañerxs son integrantes de la organización. Muchas de las compañeras que estaban en situación de calle hoy son militantes.



De esta forma, aseguran que han experimentado la pandemia como una oportunidad de fortalecimiento para su organización:



aprender a hacer acompañamientos virtuales, llamar por teléfono, organizarnos para llevar mercadería a quienes están privadas de la libertad, a las que están internadas, circular la plata para bancar los alquileres, etc. Puso a prueba todas las estrategias que estaban ya en práctica dentro de la organización. Creemos que es porque ya estábamos unidas, organizadas hacía 10 años. Esa vida común en trinchera, esta necesidad de componer vida en común te prepara para estas situaciones.



Resulta interesante la mirada que tienen sobre las políticas neoliberales implementadas en Ciudad de Buenos Aires en la última década. Sostienen, contrario al pensamiento común, que este gobierno efectivamente sí tuvo y tiene gestión pública sobre la problemática, pero con una sofisticación de la micropolítica puntual que refuerza y reproduce la posición que ocupan las personas en posición de vulnerabilidad. La problemática de las personas en situación de calle deviene así en una problemática sobreatendida, el tema radica entonces no tanto en si el problema se gestiona sino en cómo se hace.



Nos interesa conquistar derechos para construir otros mundos.

Por ello, desde la organización plantean una estrategia de acción triple: el asistencialismo, la restitución de derechos y el autonomismo desde el feminismo popular. Trazando así una estrategia de medidas superpuestas, desde un plato de comida hasta un taller de historia, sugieren que en esa superposición radica su lógica de lucha.



Nos gusta estar en la Y. No hay una respuesta única o un buen modo de hacer esto. Hay que ir armando con la compañera. Es el asistencialismo Y los derechos Y otras posibilidades por fuera de los campos de los derechos. La idea del cumplimiento de los derechos para integrarnos a la sociedad que nos expulsa constantemente es adecuacionista, capitalista, capturante. Nos interesa conquistar derechos para construir otros mundos.



Nota editorial: todos los datos aquí mencionados se obtuvieron de la entrevista realizada en el marco de la presente investigación a Rosalva Aída Hernández el día 24.05.2021. Además, vale aclarar que la entrevistada utiliza el femenino plural para referirse a la experiencia de Hermanas en la sombra, por ello se decidió sostenerlo en el desarrollo de ese caso a fin de expresar sus ideas lo más fielmente posible.



Un lugar en el mapa es también un lugar en la historia.



Rosalva Aída Hernández es una antropóloga feminista mexicana que se caracteriza por la producción de conocimiento intelectual situado, es decir, entiende que la producción de conocimiento siempre parte de un lugar tanto geográfico como político-social. Tener en cuenta desde donde está posicionado le intelectual, es tan importante como su sujeto de estudio.

U nidad sorora

El trabajo académico de Rosalva va de la mano de la praxis. Ella misma se define como “con un pie en la academia y un pie en el activismo”. De esta forma, ha participado activamente por años en diferentes organizaciones y proyectos sociales. En esta oportunidad, nos ha contado cómo si bien el Covid-19 ha desafiado algunas estrategias puestas en marcha, al mismo tiempo ha sido el puntapié que dio inicio a nuevas formas y relaciones de unidad sorora.

México, violencia de género y Covid-19. Al mismo tiempo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendaba tener especial atención respecto a la profundización de las violencias de género durante la pandemia y el aislamiento obligatorio que forzaba a las mujeres a estar más tiempo encerradas en las casas que comparten con sus agresores (sumado a la precarización de

la vida laboral que exacerba esa misma violencia), el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmaba que eso no aplicaba a dicho territorio ya que la familia mexicana representaba un lugar de refugio y amor. Esto, sin ir más lejos, se refleja en las políticas económicas que llevó a cabo: a inicios de la pandemia, cuando el gobierno mexicano hizo recortes presupuestarios, uno de los sectores más afectados fueron los de prevención y asistencia a mujeres víctimas de violencia de género. A la par, y solo teniendo en cuenta los datos oficiales, se observó un aumento de hasta un 15% en las llamadas de mujeres denunciando violencia machista. Además, el desempleo femenino se disparó muy por encima del masculino.

otros saberes

Otros saberes. Dentro del espacio auspiciado por la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) Rosalva A. Hernández participa en “Otros saberes”, equipo feminista constituida por diferentes intelectualxs latinoamericanxs a quienes lxs aúna su vocación por la investigación activista y la convicción de saber que existen muchos conocimientos valiosos por fuera de la academia. De esta forma, en el marco de la pandemia, nace “Diálogos de saberes en tiempos de pandemia” con el fin de visibilizar retos y luchas de distintos sectores de la población durante el Covid-19. Hasta el momento de la entrevista, habían logrado organizar ocho webinaros con diferentes ejes temáticos urgentes: trabajo doméstico, mujeres repartidoras, artesanxs indígenas, entre otros. Los mismos estaban integrados no sólo por intelectualxs y trabajadorxs

sino también por organizaciones que están en el territorio y representantxs sindicalizadxs. Además de la visibilización lograda, muchxs trabajadorxs continuaron el contacto ampliando redes de lucha, como por ejemplo lxs artesanxs indígenas que, tras el encuentro, comenzaron con los preparativos para la formación de una red latinoamericana que lxs contenga.

onstruyendo comunidad

Hermanas en la sombra. Integrado por mujeres privadas de la libertad, ex-presidarias y feministas aliadas, esta grupa trabaja desde hace más de 12 años en prisiones femeniles mexicanas utilizando la escritura creativa como herramienta de reflexión crítica y de construcción de comunidad. Para ello, aplican la escritura identitaria feminista como metodología de lucha e investigación. Al comenzar la pandemia, las mujeres en prisión quedaron en una situación de extrema precariedad económica y la agrupación sin la posibilidad de acercarse personalmente hasta el espacio carcelario. Sin embargo, repensando estrategias, comenzaron una campaña para la publicación y venta de los 17 libros que habían hecho hasta la fecha. Tanto la idea y redacción como la edición y diseño estuvieron a cargo del total de la agrupación. Esto resultó en un gran apoyo económico y moral para las mujeres en prisión pertenecientes a ella.



Feminismo antirracista e intercultural

Dentro de este marco, surgió también la idea de capacitar a mujeres ex-presidarias en escritura identitaria a fin de que ellas mismas pudieran seguir capacitando a otras personas en este rubro. Del proyecto formó parte también “Mujeres de luz”, centro fundado por una compañera que había estado en prisión por delitos de drogas y cuyo objetivo era apoyar a mujeres con adicciones o consumos problemáticos. Por tal motivo, nombraron al taller “De hermanas en la sombra a mujeres de luz”. El objetivo fue capacitar a las compañeras para que ellas mismas puedan dar estos talleres de escritura (como salida laboral), pero también abrir el espacio a la reflexión de las violencias machistas, al amor romántico y sus trampas, al autocuidado y el cuerpo. Siempre desde una perspectiva antirracista e intercultural.

En la actualidad, y bajo la situación de “semáforo amarillo” vigente que lo habilita (es decir, ahora pueden verse presencialmente siguiendo las medidas de distanciamiento social), las mujeres que recibieron esta formación online están ahora reproduciendo estos mismos talleres en el mencionado centro de adicciones. Todo esto se ha financiado mediante una beca obtenida en el extranjero y a través de la venta de libros mencionada anteriormente.

Por último, vale la pena señalar que como Hermanas de la sombra y junto a otras compañeras de Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, etc. participaron en un encuentro sobre justicias feministas y luchas

anticarcelarias que tuvo lugar en Ecuador en el año 2019. Las redes allí armadas se sostuvieron, y al momento de la pandemia comenzaron a escribirse entre ellas para ver cómo era la situación en las cárceles de sus países, ya que en la mayoría de estos recintos las dos medidas principales de cuidado (distanciamiento social y lavado de manos) eran imposibles de sostener debido a las condiciones de hacinamiento en las que viven las mujeres en prisión y a los problemas edilicios estructurales que presentan la mayoría de las cárceles latinoamericanas. En el marco del Covid-19 entonces deciden articularse y armar la “Red latinoamericana anticarcelaria” conformada por ex-presidarias y feministas solidarias a la causa y cuyo objetivo es, junto con la realización de un diagnóstico de la situación actual, llevar adelante una campaña a favor de la excarcelación de mujeres. Hasta el momento, la actividad fue en su totalidad online y la mayor participación ha estado concentrada en Chile, Brasil, Argentina, México y Ecuador.



Recomendaciones



*El mundo que queremos es uno donde
quepan muchos mundos*

EZLN²⁰

1.

Información estadística

A partir de la revisión de estadísticas en la región, que diera cuenta de los impactos sociales y económicos que ha dejado la pandemia, se pudo observar que existe un gran déficit de datos. Esto responde a diferentes patrones que limitan la transparencia de datos y la funcionalidad que éstos pueden tener. Una de las cuestiones es que muchas de las encuestas que se realizan con el fin de censar a la población y conocer su diversidad, siguen respondiendo a patrones meramente binarios de hombre y mujer. Para el caso colombiano, por ejemplo, la entidad encargada de la encuesta y la estadística poblacional es el DANE²¹. Este organismo en sus encuestas sólo considera la posibilidad de ser hombre o mujer, sin permitir la opción de otras maneras de identidad más allá del binario. De esta manera, las estadísticas oficiales del país carecen de datos desagregados, que a la hora de promover políticas públicas y acciones de contención frente a problemática social, respondan a la diversidad de la población y a las formas

²⁰ <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/cuarta-declaracion-de-la-selva-lacandona/>

²¹ Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Recomendaciones

en que las afectan ciertas violencias.

Lo mismo sucede en Argentina. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)²² es el organismo nacional oficial que ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en la República Argentina. Posee una base de datos amplia, en donde se puede observar la recolección de información respecto a variados temas: salud, mercado laboral, gastos de los hogares, etc. Los datos recolectados en cada uno de estos grupos, así como en el formato mismo de las preguntas realizadas, responde a una dimensión binaria de la organización social, invisibilizando a las personas que no se sienten identificadas bajo dicho esquema representativo.

Con base en esto, se recomienda:

- La generación de encuestas, para datos nacionales, que permitan la posibilidad de incluir la autopercepción. Esto más allá de poner una tercera categoría a la de hombre y mujer, sino que por el contrario, agregar una que permita comprender la diversidad de identidades presentes en una población más allá del binarismo hegemónico. Estos datos e información oportuna son clave a la hora de pensar estrategias sociales que comprendan la diversidad de experiencias sociales.
- El proyecto de tabulación de datos podría ser liberado y/o acompañado por ONU Mujeres o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y coordinado por las instituciones a cargo de las estadísticas de cada país, generando una colaboración interestatal.



²² <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-BasesDeDatos-4>

Recomendaciones

- Contar con consejos de la sociedad civil, en particular ligado a organizaciones de mujeres y disidencias, con el objetivo de conocer y profundizar las necesidades en la recolección de datos y proponer políticas públicas en la materia.
- Asegurar los recursos necesarios no solo para la elaboración de encuestas, sino también su sistematización de los datos y su implementación en la elaboración de políticas tendientes a mejorar las vidas de mujeres y disidencias.
- Garantizar la periodicidad de las encuestas de acuerdo con los planes establecidos. Esto permite obtener datos de las cuestiones y temáticas investigadas con cierto intervalo de tiempo, lo cual es fundamental para medir los avances y retrocesos.



2.

Acceso a los servicios básicos

En cuanto al acceso a servicios básicos, tales como salud y educación, es fundamental que los Estados sigan realizando todos los esfuerzos tendientes a entregar estos servicios.

- Garantizar el acceso oportuno a atención médica, a controles preventivos por enfermedades como cáncer de mama o cáncer cérvico uterino.
- Entregar en forma correcta las atenciones ginecológicas tendientes a prevenir embarazos no planificados o

Recomendaciones

adolescentes. Por ejemplo, con la entrega de pastillas anticonceptivas.²³

- Asegurar que los centros de educación mantengan grados de atención acordes a la situación sanitaria. Si no es posible realizar las clases de forma presencial, es fundamental contar con la tecnología y dispositivos que permitan que niñas y adolescentes puedan seguir estudiando o profundizando la enseñanza formal.
- Para el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la vivienda adecuada debe ser considerada en términos de contar con un lugar que permita desarrollar la vida en seguridad a la tenencia, la asequibilidad, habitabilidad y accesibilidad. En este sentido, los Estados deben garantizar que las mujeres y disidencias en particular, cuenten con un espacio adecuado donde desarrollar su cotidianidad, y donde sus vidas no corran peligro.



3.

Acceso al mercado laboral

Desde un abordaje feminista de la economía, se visualiza más claramente cómo y por qué las mujeres y disidencias están sobrerrepresentadas en trabajos informales, precarizados y/o mal pagos. La pandemia no ha hecho otra cosa que profundizar esta situación de vulnerabilidad. Particularmente en trabajos relacionados con el turismo, manufacturas,

²³ A fines de 2020 se detectaron anticonceptivos orales defectuosos que fueron entregados en la atención primaria en Chile a personas que buscaban una planificación familiar. Se estima que más de 100 mujeres quedaron embarazadas a pesar de consumir regularmente anticonceptivos hormonales. Más información disponible en:

<https://radio.uchile.cl/2021/02/25/isp-impone-multa-de-66-millones-de-pesos-a-laboratorios-por-anticonceptivos-defectuosos/>

Recomendaciones

comercio en sectores menores y medianos, así como en salud y educación²⁴. En ese sentido es fundamental pensar en una incorporación progresiva al mercado laboral para las mujeres y disidencias.

Por ello consideramos necesario:

- Contemplar estrategias de reconversión laboral para las mujeres, principalmente con miras a puestos de trabajo de la economía digital y ocupaciones que respondan a las demandas de la nueva realidad.
- Promover medidas dirigidas a que el crecimiento de los sectores tecnológicos vaya acompañado por el aumento de la participación de las mujeres, prestando especial atención a la eliminación de las barreras de ingreso en estos sectores.
- Ampliar y promover las prestaciones por desempleo para trabajadoras de la economía informal.
- Generar programas que permitan a las mujeres y disidencias que deben realizar labores de cuidado, generar apoyos tendientes a disminuir la carga de trabajo no remunerado, permitiéndoles así incorporarse de forma efectiva en el mercado laboral.



²⁴ Informe de la CEPAL "La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46633/5/S2000740_es.pdf

4

Trabajo de cuidado informal o no remunerado

Las mujeres están sobrerrepresentadas en la realización de tareas de cuidado y reproducción, ya sea de forma no remunerada (dentro de la unidad doméstica a la que pertenece) o remunerada (realizando dichas tareas en un hogar diferente al suyo, tomando usualmente este vínculo laboral características de trabajo informal).

Por otro lado, y conectándolo con el punto número 1 de las presentes recomendaciones, hemos observado que desde finales de 2019 hasta la fecha es complejo encontrar datos estadísticos en general y en particular sobre materias de género. Creemos que ello se debe a la postergación de encuestas a propósito de la pandemia. En 2015 Chile elaboró la Encuesta Nacional del Uso de Tiempo (ENUT), la cual tenía como objetivo visibilizar y comprender las diversas brechas a la hora de disponer tiempo para el ocio y la recreación, así como para el trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y hombres. Se esperaba que la siguiente encuesta nacional se llevara a cabo en 2020, sin embargo a propósito de la situación actual, esta fue suspendida y hasta la fecha se desconoce cuándo se desarrollará el trabajo de campo.

Por ello, desde un abordaje feminista de la economía, se propone:



Recomendaciones

- Asegurar que los servicios de cuidados sean considerados prioritarios.
- Campañas para el cambio de comportamientos. Es primordial que se desnaturalice el rol de la mujer dentro de estas tareas. Su redistribución equitativa implicaría un paso adelante en la igualdad de derechos y oportunidades.
- Apoyo a la evaluación de necesidades y la elaboración de políticas públicas adecuadas. Para ello, la consulta a las trabajadoras domésticas es prioritaria. Desde su experiencia, se podrán sacar los lineamientos básicos que guíen las medidas a tomar.
- Impulsar medidas que garanticen y fomenten la formalización y retención de empleos en el trabajo doméstico. Por ejemplo, mediante la simplificación de procesos burocráticos, la posibilidad de realizarlos de manera online, el fortalecimiento del rol fiscalizador del Estado, etc.
- Asegurar el acceso a la información y a la asesoría legal gratuita para las trabajadoras domésticas.
- Elaborar estadísticas respecto al trabajo no remunerado y uso del tiempo, que permita obtener datos por género, edad y ubicación geográfica. Estos datos deben ser considerados en la elaboración e implementación de políticas públicas y sociales en materia de igualdad y no discriminación en materia de género. Respetando la regularidad de la aplicación de instrumentos de medición.



²⁵ <https://www.comunidadmujer.cl/2020/09/declaracion-que-esta-pasando-con-la-encuesta-nacional-de-uso-del-tiempo-enut-2020/>

5.

Acceso a plataformas digitales

La pandemia visibilizó la necesidad no sólo de acceder a los diferentes recursos digitales sino también de entender su lenguaje. Ser capaces de incorporarlos a la vida laboral y cotidiana, se presenta como algo urgente e imprescindible. Sin embargo, y al mismo tiempo, la pandemia expuso el riesgo que conlleva para muchas mujeres la posibilidad del trabajo remoto. Muchas vieron extendidas sus jornadas laborales por fuera de lo que estipula la ley y además debieron combinar sus trabajos remunerados con los de cuidado ya que al estar siempre en el hogar, se recurre mayoritariamente a ellas para resolver las tareas cotidianas (las cuales a su vez aumentaron debido al cierre de escuelas, guarderías, etc.). Por lo tanto:

- Resulta necesaria la capacitación de mujeres en los diferentes recursos informáticos y tecnológicos. Es importante potenciar su uso no sólo con fines laborales sino también en pos de garantizar el acceso a la información de sus derechos, la realización de denuncias y el contacto con otras mujeres y trabajadoras organizadas.
- Campaña de concientización para que el ingreso de la tecnología a los hogares no signifique una sobrecarga en las tareas realizadas por parte de las mujeres. Las tareas de cuidado deben re-distribuirse equitativamente entre lxs miembros de la unidad habitacional.



6.

Consultas sociales

Impulsar consultas directas con organizaciones de mujeres y disidencias sobre la situación e incluirlas en todas las etapas de decisión. Es fundamental que la sociedad civil cuente con espacios relativos a la elaboración de políticas públicas que las afecte directamente.

- En ese sentido, es importante la instauración de consejos de la sociedad civil que participen activamente y de forma vinculante en la formulación, elaboración y puesta en marcha de políticas públicas relativas a mujeres y disidencias.
- Incluir en los reportes y los consejos con la sociedad civil para la creación de políticas públicas, una mirada interseccional. Esto, para comprender que hay personas que ya venían experimentando exclusiones y dificultades para el acceso a trabajos, a la salud y/o a la educación y que dada una crisis como la actual, sus dificultades previas se intensifican. Es decir, incluir la experiencia de las personas migrantxs que no tienen su situación administrativa en regla, personas con diversidad funcional, personas en situación de calle y personas presas y ex-presidarias, entre otrxs.



7.

Canales de comunicación para la asistencia

Mejorar canales de comunicación para las mujeres que buscan asistencia producto de la violencia machista intrafamiliar. Esto con el establecimiento de canales virtuales oficiales, que permitan el acceso a la posibilidad de denunciar casos de violencia machista y maltrato. Sin dejar sólo en las posibilidades físicas la opción de justicia, para cuidar la salud de quienes operan en la rama judicial y seguir garantizando la seguridad de las personas violentadas. Esto con un seguimiento a los casos y acompañamiento de las denuncias.

- En este sentido, es necesario que las plataformas estén diseñadas con lenguaje sencillo y accesible y sin mayores dificultades para el acceso, con la posibilidad de usarse con diferentes dispositivos electrónicos.
- El desarrollo de programas, por parte de los Gobiernos, de concientización sobre las formas de la violencia machista en el cotidiano intrafamiliar, esto vía propagandas en televisión nacional y redes sociales.



8

Mujeres privadas de la libertad

Las cárceles latinoamericanas presentan graves problemas edilicios y de sobrepoblación. La falta de artículos de higiene, agua y otros servicios básicos hacen casi imposible la prevención del contagio del Covid-19 al interior de las prisiones. Sin embargo, la pandemia viene a reforzar la situación ya existente de discriminación y vulneración de derechos sistemática que vive esta población.

Por ello se propone:

- La implementación de medidas de higiene y prevención del contagio al interior de las cárceles.
- La ejecución de programas que faciliten tanto el conocimiento de sus derechos por parte de las mujeres presas como la formación de medios ágiles para el reporte de las situaciones en donde se produce la violación de los mismos.
- La utilización de un lenguaje accesible y claro en los instrumentos jurídicos que contemple a la población carcelaria de modo interseccional (por ejemplo, generar accesibilidad para las personas con discapacidad o personas indígenas o migrantxs que no hablen español).



Conclusiones



Debemos cambiar las formas de aprender, de hacer, de producir, distribuir y consumir. Sobre todo, debemos cambiar las formas de relacionarnos.

Catalina Toro Pérez ²⁶

Las reflexiones aquí plasmadas, a partir del estallido por el Covid-19, comprenden cómo se han tenido que adaptar nuevas formas de organización social sobre unas bases que ya venían siendo crudas y difíciles para muchas personas. Con la incapacidad de muchos gobiernos para enfrentar la crisis, dadas sus lógicas de priorizar el mercado antes que la vida, se manifiesta el lugar de los cuerpos feminizados y no normativos en las labores del capital.

Sin embargo, se refleja también el valor de la resistencia y cómo se ha mantenido. Luchas comunitarias autogestionadas y plurales siguen en pie, recordando que donde haya opresión habrá resistencia. Agrupaciones trans feministas, antirracistas, anticlasistas que desde lo cotidiano, comunitario y artístico generan espacios seguros y siguen resistiendo a las lógicas de un sistema que los omite y que desde discursos binarios, molíticos y patriarcales insiste en dejar por fuera.

De esta manera y ante tal contexto, se hace necesario pensar en nuevas lógicas de entender la organización de la vida para entender el mundo en su diversidad. Para esto, es necesario cuestionar la visión utilitarista hacia la naturaleza y pensar el cuerpo y el territorio como uno y velar por su respeto y dignidad. También se hace necesario procurar políticas públicas con una visión interseccional, que comprendan la complejidad de la sociedad y

²⁶ Toro Pérez, Catalina (2020): *Aprendiendo de saberes y haceres. Los Nadies en tiempo de pandemia*, en: Olver Quijano Valencia y Carlos Corredor Jiménez (Coord.): *Pandemia al Sur*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo Libros, pp. 99 - 116.

que pongan de manifiesto la realidad de las personas que han cargado con desigualdades, dadas la sexualización, racialización y la marginalización de sus cuerpos, en lógicas heteronormativas. Es por esto, que las políticas públicas para la igualdad de derechos y la justicia social, deben atender a la diversidad de experiencias y evitar la creación de generalidades, que no expresan las realidades cotidianas. Por esta razón, toda acción de política social debe contar con consejos feministas-antirracistas y trans-incluyentes, que atiendan a la pluralidad de experiencias y formas de vida en la sociedad.

Por otra parte, se ha evidenciado que la vida mediada por espacios digitales, llegó para quedarse. Si bien la comunicación digital está instalada hace ya varios años, la pandemia le ha otorgado una legitimidad desconocida hasta el momento. La imperiosa necesidad de utilizarla en instancias donde antes no había llegado, ya sea desde una consulta al médicx como en instancias laborales o educativas, ha hecho de la virtualidad un acontecimiento cotidiano. Entre los retos que esto supone, se debe también atender para que estas nuevas formas de interacción no agudicen desigualdades e incrementen injusticias y violencias sobre los cuerpos. Se debe además seguir alerta ante las acciones que en nombre del cuidado y del amor, con la asignación de roles, se nieguen derechos, se justifiquen desigualdades históricas y se sostengan opresiones sobre ciertos cuerpos. El bienestar y la vida digna para todxs es la prioridad y la resistencia por nuevos mundos se mantiene.



Referencias



Amnistía Internacional (2021): Informe 2020/21. La situación de los derechos humanos en el mundo. Repositorio Amnistía Internacional. Disponible en: <https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/3202/2021/es/> .

Cabnal, L. (2010): Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala. Momento de paro Tiempo de Rebelión, 116.

CEPAL (2021): Informe especial Covid 19. La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. Repositorio CEPAL. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46633/5/S2000740_es.pdf .

CEPAL (2021): Panorama social de América Latina. Informe anual. Repositorio CEPAL. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020> .

CEPAL (2020): La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe. Informes COVID-19. Abril 2020. Repositorio CEPAL. Disponible en: <https://www.cepal.org/fr/node/51175> .

Cullell, J. (2021): Siete de cada 10 desempleados por la pandemia en México son mujeres. El País. Disponible en: <https://elpais.com/mexico/>

[economia/2021-05-17/siete-de-cada-10-desempleados-por-la-pandemia-en-mexico-son-mujeres.html](https://elpais.com/mexico/economia/2021-05-17/siete-de-cada-10-desempleados-por-la-pandemia-en-mexico-son-mujeres.html).

Federici, Silvia (2013): Revolución en punto cero: trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Traficantes de sueños.

Leyva Solano, Xochitl y Icaza (2017): En tiempos de muerte: cuerpos, rebeldías, resistencias. Buenos Aires y San Cristóbal de Las Casas: Clacso y Cooperativa Editorial Retos.

Segato, Rita (2016): La guerra contra las mujeres. Traficantes de sueños.

Segato, Rita (2020): Coronavirus: Todos somos mortales. Del significativo vacío a la naturaleza abierta de la historia, en: Olver Quijano Valencia y Carlos Corredor Jiménez (Ed.): Pandemia al Sur. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo Libros, pp. 11 – 22.

Toro Pérez, Catalina (2020): Aprendiendo de saberes y haceres. Los Nadies en tiempo de pandemia, en: Olver Quijano Valencia y Carlos Corredor Jiménez (Coord.): Pandemia al Sur. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo Libros, pp. 99 - 116.

ONU Mujeres (2020): Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe, frente a la crisis del Covid-19. Repositorio CEPAL. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45724-trabajadoras-remuneradas-hogar-america-latina-caribe-frente-la-crisis-covid-19> .

Vela, E. (2020): Las llamadas de auxilio de las mujeres. Blog de Intersecta en Animal Político, 21 de mayo de 2020, disponible en: <https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-llamadas-de-auxilio-de-las-mujeres/> .